



HISTÓRICAS
COMUNICACIÓN PÚBLICA

HERIDAS EN LA TIERRA

COLONIZACIÓN, RACISMO Y AGROINDUSTRIA EN MÉXICO

Daniel Kent Carrasco

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Daniel Kent Carrasco es doctor en Historia del Pensamiento Político Contemporáneo por el King's College de Londres. Ha sido docente en la Universidad de Sonora, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esa misma casa de estudios. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Entre sus publicaciones más recientes están *Historia mínima del comunismo y el anticomunismo en el debate mexicano* (Colmex, 2022), escrito en coautoría con Carlos Illades, y *Pandurang Khankhoje. Vida internacionalista, biografía global* (UNAM, 2024).



INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS

HISTORIA PRESENTE

HERIDAS EN LA TIERRA
COLONIZACIÓN, RACISMO Y AGROINDUSTRIA
EN MÉXICO



INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS

HERIDAS EN LA TIERRA

COLONIZACIÓN, RACISMO Y AGROINDUSTRIA EN MÉXICO

Daniel Kent Carrasco



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO, 2023



Kent Carrasco, Daniel, autor.

Heridas en la tierra : colonización, racismo y agroindustria en México / Daniel Kent Carrasco.

Colonización, racismo y agroindustria en México.

Primera edición. | México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023. | Serie: Serie históricas comunicación pública ; 11. | Serie: Colección historia en presente.

LIBRUNAM 2224461 | ISBN 978-607-30-8493-2

Norte de México — Colonización. | Discriminación racial — Norte de México. | Yaquis — Condiciones sociales. | Yaquis — Condiciones económicas. | Industrias agrícolas — Norte de México.

LCC F1314.K45 2023 | DDC 972.1—dc23

Coordinación de la Serie - Equipo de trabajo de Comunicación Pública de la Historia
Elisa Speckman, Mari Carmen Sánchez Uriarte, Ónix Acevedo Frómata y Pedro Marañón

Coordinación de la Colección Historia en Presente
Elisa Speckman Guerra

Equipo de trabajo de la Colección
Claudia Agostoni, Gibrán Bautista, Daniela Gleizer, Regina Lira, María Dolores Lorenzo,
Isabel Martínez, Federico Navarrete, Marcela Terrazas

Cuidado de edición
Ónix Acevedo Frómata

Corrección de estilo
Gwennhael Huesca Reyes

Concepto gráfico de la Serie, diseño, formación y portada
Ónix Acevedo Frómata

Primera edición: 2023

D. R. © 2023, Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Históricas
Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria
Coyoacán, 04510. Ciudad de México

ISBN 978-607-30-8493-2

Imagen de portada: Madre yaqui sosteniendo a su bebé, Arizona, *circa* 1910.
California Historical Society. Imagen libre de derechos

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita
del titular de los derechos patrimoniales

Impreso y hecho en México



CONTENIDO

11 **INTRODUCCIÓN**

PARTE I. MÉXICO Y EL MUNDO

I

25 **Un mundo de fronteras**

II

36 **La globalización del racismo**

PARTE II. EL VALLE DEL YAQUI

III

49 **Miedo y odio en el noroeste mexicano**

IV

59 **Un siglo de guerra**

V

71 **Los inicios de la colonización**

VI

81 **Un proyecto genocida**

VII

93 **El valle cambia de forma**

PARTE III. EL PASADO RECIENTE

VIII

107 **De vuelta al mundo**

119 **CONCLUSIONES. LOS SURCOS DEL PRESENTE**

130 **REFERENCIAS**

Raquel Padilla Ramos
(1967-2019)

In memoriam



INTRODUCCIÓN

Para el pueblo colonizado, el valor
más esencial, por ser el más concreto,
es primordialmente la tierra.

Frantz Fanon, *Los condenados de la tierra*

Vícam, un pequeño pueblo situado en el corazón del valle del Yaqui, una de las regiones agroindustriales más prósperas y exitosas del continente americano, fue el escenario de un suceso trascendental que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2021. En aquella ocasión, el presidente de México, acompañado de la plana mayor de su gabinete, de representantes de grupos y organizaciones comunitarias y de una senadora estadounidense, se reunió con integrantes del pueblo yoeme para dar un mensaje de gran importancia, quizá único en la historia contemporánea del país. Ante un gran número de personas provenientes de todos los rincones del país, el mandatario pidió una disculpa en nombre del Estado mexicano por los crímenes y abusos cometidos por autoridades, empresarios y colonos contra el pueblo yoeme durante los últimos dos siglos.

La disculpa oficial, se anunció, formaba parte del nuevo Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, el cual, según la cuenta de Twitter del presidente, incluirá la restitución de 30 000 hectáreas de tierra, la entrega de numerosos apoyos productivos y fondos para maquinaria agrícola e infraestructura educativa y de salud, así como la construcción de un acueducto que le permitirá a productores yoeme aprovechar el agua del río Yaqui,



como se les prometió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Con tono grandilocuente, el dirigente afirmó que se trataba de un acto de justicia de cara a todos los pueblos indígenas de México. En este discurso oficial, los yoeme encarnaron a las víctimas de la violencia que ha marcado por siglos la relación entre las élites nacionales mexicanas y los pueblos originarios.

Este significativo episodio pone de relieve la compleja imbricación entre el nacionalismo mexicano y los procesos de colonización que iniciaron tras la invasión española en el siglo XVI. Durante los últimos cinco siglos, el colonialismo ha avanzado en México y todos los rincones del planeta por medio del despojo de los territorios indígenas. Como señala Andrew Curley, sus objetivos esenciales han sido convertir la naturaleza en mercancías y recursos utilizables para alimentar el capitalismo global y disciplinar a los habitantes originarios para contribuir a su explotación. Por eso sus dinámicas son inseparables de procesos como el desarrollo, la integración económica, la modernización y la creación de redes de intercambio transcontinentales. Sólo la exitosa colonización permitió el auge minero de la Nueva España y el Potosí, la sorprendente productividad agrícola del *Midwest* estadounidense y el apogeo ganadero del Cono Sur latinoamericano y enclaves como Australia y Nueva Zelanda.

El extractivismo y la agroindustria son, en este sentido y desde hace siglos, las actividades más redituables en entornos coloniales, al mismo tiempo que juegan un papel central en la perpetuación de la dependencia de sociedades y regiones enteras a los centros del capitalismo global. Desde hace medio milenio la prosperidad del capitalismo ha dependido necesariamente del triunfo del colonialismo y de la implantación de un orden colonial estable en porciones cada vez más extensas del globo. Retomando a Curley, durante los últimos quinientos años la política económica global ha sido consistentemente colonial. Es por esto que la lucha contra el colonialismo ha estado siempre, hasta la fecha, estructurada por el reclamo de la tierra y el control del territorio. Como plantea Frantz Fanon en *Los condenados de la tierra*, “para el pueblo colonizado, el valor más esencial, por ser el más concreto, es primordialmente la tie-



rra”, cuyo dominio puede asegurar el sustento, pero también la dignidad.

Una visión de este tipo entra en conflicto con la narrativa maestra de la historia oficial mexicana, que concibe la nación como el fruto de la lucha contra el colonialismo y el triunfo de lo que se ha llamado durante ya dos siglos “la independencia”. En nuestro país, este relato ha tenido un éxito tal que ha permitido la consolidación de un orden nacional que vive de espaldas a las trayectorias de despojo que le han dado forma y en la negación de los vínculos con el pasado colonial. En palabras de Yásnaya Aguilar Gil, “la creación del Estado mexicano y la invención de México como un país en el siglo XIX implicaron la continuación del establecimiento del orden colonial, no su cancelación”. Este hecho está en la raíz de muchas de las violencias que marcan el presente de nuestra sociedad.

En este corto libro trataremos de acercarnos a las complejidades, ambigüedades y dinámicas de las continuidades entre lo colonial y lo nacional en la historia de los últimos dos siglos del país que llamamos México. Mostraremos que, en efecto, la consolidación nacional implicó una agudización de procesos de ocupación colonial del territorio, guerra contra los pueblos indígenas y creación de regímenes racializados de jerarquía social que, montados sobre antiguas divisiones novohispanas, perviven hasta nuestros días. Centramos la mirada en los vínculos que estas historias tienen con el desarrollo de la agricultura comercial en varias regiones del territorio nacional. Estos argumentos no son nuevos ni originales, se han desarrollado antes y de mejor manera. Además de intentar hacer una síntesis de los debates que buscan evidenciar las continuidades de lo colonial en el orden nacional mexicano, pretendemos ampliar el encuadre para poner atención a dinámicas locales causadas por estas continuidades como respuesta no sólo al afán de las élites criollas mexicanas, sino también a procesos de transformación, acumulación e intercambio de alcance global.

Pero antes, volvamos a V ícam. Para aquellos poco familiarizados con las trayectorias de colonización y resistencia gestadas en el valle del Yaqui durante los últimos siglos, el episodio descrito al inicio de este texto podría parecer extraño o fuera

de lugar. En un país con una historia de exclusión, despojo y violencia contra los pueblos indígenas tan nutrida, ¿por qué se eligió este pequeño poblado, localizado en una de las regiones más prósperas del país, en 2021, para realizar una ceremonia de disculpa? ¿Por qué el Estado mexicano siente la necesidad de pedir perdón justamente a los yoeme, cuando hay tantos otros pueblos agraviados por el avance de la integración nacional y la economía capitalista en México? Una parte importante de este libro se dedicará a responder estas preguntas.

La historia del valle del río Yaqui y sus habitantes originarios es dramática y de excepcional importancia para comprender el pasado reciente y el presente de nuestro país. En esta región de extraordinaria riqueza natural y gran relevancia política, los yoeme fueron objeto de un proyecto de colonización que se extendió por varios siglos y generó drásticos procesos de transformación política, económica y ambiental sin paralelo en otras zonas de México. Hasta finales del siglo XIX, los yoeme dominaban el fértil valle del Yaqui de manera casi autónoma. Según el antropólogo Alfonso Fabila, a principios del siglo XX este pueblo se reconocía como dueño de un territorio que iba desde las riberas del río Mátape, al noreste de Guaymas, hasta el sur del valle del río Yaqui, que constaba de unos 45 000 kilómetros cuadrados, el equivalente a casi la quinta parte de la superficie del vasto estado de Sonora.

Pocas décadas después, el valle se había convertido en el centro nodal de la naciente agroindustria mexicana, dominada desde la flamante Ciudad Obregón, en beneficio de una nueva y próspera élite empresarial sin parangón en México, comparable con las oligarquías agrícolas del Cono Sur americano o del oeste estadounidense. Este cambio fue posible gracias a una campaña sostenida de agresión colonial que incluyó desde estrategias de “pacificación” –un término acuñado durante el periodo novohispano para referirse al sometimiento de los pueblos indígenas–, hasta programas de corte abiertamente genocida encabezados por autoridades regionales y nacionales, grupos de intereses y contingentes civiles en Sonora y otras partes de México que recuerdan proyectos de exterminio gestados en los siglos XIX y XX en otras latitudes del globo.

En aquella reunión celebrada en septiembre de 2021, las propuestas del gobierno mexicano se toparon con la respuesta tajante de varios miembros del pueblo yoeme. Jesús Varela, un joven representante del pueblo indígena respondió: “México es una república que se dibujó como si nosotros no existiéramos”. Durante décadas, continuó, “se nos despojó de nuestras tierras y recursos naturales”, “se deportaron a nuestros antepasados” y “se perdieron miles de vidas” con el avance de la colonización mexicana. En vista de esta larga historia de abuso y despojo, el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui “no es un regalo, no es un asistencialismo”, declaró Varela, sino un primer paso hacia la devolución de “lo que es nuestro, [del] territorio que nos fue quitado, el agua que nos han limitado, y la dignidad que nos han querido robar”.

Las naciones son y siempre han sido contrarias al disenso y las diferencias. En la larga y cruenta historia de la dominación de las élites coloniales, criollas y nacionales en el territorio que hoy llamamos México, la historia del pueblo yoeme presenta el ejemplo más flagrante de violencia organizada ejercida contra un pueblo indígena. Conocida en su mayoría por la obra de célebres críticos del capitalismo rapaz de comienzos del siglo xx, como John Kenneth Turner, la brutal colonización del valle del Yaqui no fue un proyecto exclusivo del régimen criminal oligárquico de Porfirio Díaz. Esta guerra se extendió desde inicios de la década de 1820 hasta mediados del siglo xx y contó con la participación de liberales juaristas, modernizadores porfiristas y próceres del régimen posrevolucionario, como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y el propio Lázaro Cárdenas.

Esta “guerra secular”, como la han llamado las historiadoras Raquel Padilla Ramos y Zulema Trejo Contreras, facilitó la integración y la cohesión de las élites sonorenses que se definían a sí mismas como “blancas” y en oposición a los pueblos indígenas que poblaban desde hacía siglos el noroeste mexicano. En el valle del Yaqui, los yoeme no sólo representaron la “otredad” de las aspiraciones de esta minoría blanca sino también un fiero obstáculo para su éxito y consolidación. Sin escogerlo, este pueblo se convirtió en enemigo de la nación mexicana

y sus élites modernizadoras, que no escatimaron recursos ni energías para controlar y, eventualmente, exterminar a los pobladores originarios del valle.

Numerosos historiadores –casi todos hombres, muchos pertenecientes a las élites militares, intelectuales y económicas sonorenses– han buscado ocultar, invisibilizar y justificar esta violencia con la creación de relatos que ponen el énfasis en la audacia y el tesón de los “pioneros” que durante décadas lucharon para “vencer al desierto” y arrancar la prosperidad de su seco suelo arenoso. Esto dio pie a una arraigada mitología, defendida hasta hoy, que excluye a los yoeme de la historia del valle del Yaqui, Sonora y el noroeste de México, y que celebra los triunfos de los beneficiarios del extendido proceso de colonización del territorio ancestral. El éxito de estas narrativas coloniales ha hecho que la violencia detrás de la prosperidad sea silenciada hasta convertirse en algo “indecible”, en palabras del historiador haitiano Ralph-Michel Trouillot.

Para entender a cabalidad los procesos e implicaciones de la guerra de colonización del Yaqui es necesario ampliar nuestra mirada e ir más allá del estudio de las dinámicas regionales y nacionales. En una primera instancia, esta historia debe entenderse en el contexto de las guerras expansionistas libradas contra los pueblos indígenas de Norteamérica a lo largo del siglo XIX, asociadas por lo regular a la mitología imperialista de la “conquista del oeste” estadounidense. Como ha indicado el antropólogo Edward Spicer, la colonización del Yaqui representa el último capítulo de la larga lista de guerras emprendidas contra apaches, sioux, comanches, arapahos, pawnees, osages, utes, cheyennes, y otros tantos pueblos originarios violentados como parte de la integración y consolidación de la sociedad colonial blanca del oeste norteamericano. Todas estas guerras siguieron cauces y lógicas similares, y desembocaron en una transferencia violenta y masiva de los derechos de propiedad sobre el territorio que sustentó el surgimiento de una economía de frontera próspera y una sociedad marcada por la dominación cultural, simbólica y racial de los colonos blancos por sobre los pueblos indígenas que habían habitado aquellas tierras desde hace siglos. En estas vastas superficies norte-

americanas, la lucha por el control de la tierra y la acumulación de riqueza siempre se afirmó sobre la lucha por la eliminación de viejas formas de habitar el territorio. El resultado fue un largo periodo de conflicto, descrito por el historiador Karl Jacoby como “la era del exterminio” del oeste estadounidense.

En un segundo nivel, la colonización del norte mexicano durante el siglo XIX también debe verse como parte del alcance global de una lógica imperialista enfocada en el control de los recursos naturales y el territorio, y la inserción forzosa de regiones antes marginales o periféricas en el entramado capitalista global. La consolidación nacional de Estados Unidos y México sucedió en paralelo al avance de las potencias europeas en varias zonas de Asia y África. En las mismas décadas en las que los Estados nación norteamericanos pugnaban por establecer el control efectivo sobre los territorios y sociedades indígenas del “oeste”, Gran Bretaña afianzaba su dominio en el subcontinente indio y extendía su influencia en el centro de Asia y China, mientras que Francia conquistaba militarmente regiones enteras de Argelia y Senegal, y Bélgica extendía su dominio en las selvas y montañas del Congo.

En todos estos sitios, flujos de colonos e inversionistas facilitaron y financiaron la ocupación de territorios indígenas por medio de la guerra y la implantación de tecnologías no militares de control del espacio, como la privatización y atomización de la tierra, los ferrocarriles, los telégrafos y otras innovaciones asociadas a la idea decimonónica del progreso. Al mismo tiempo, como ha señalado Christina Heatherton, el reordenamiento colonial del espacio implicó también la creación de jerarquías raciales que buscaban la exclusión, subyugación y, en casos más extremos, el exterminio de comunidades enteras. Los mecanismos para asegurar la reproducción del capital se tornaron indistinguibles de los usados para organizar la violencia racista en gran parte de México y el mundo. En entornos tan diferentes como los bosques de Bihar en el norte del subcontinente asiático, el *outback* australiano y las pampas argentinas, se utilizaron técnicas similares para someter a poblaciones caracterizadas como “salvajes” en nombre del “progreso” y la “civilización”, con miras a incorporar sus territorios a una

dinámica de explotación y acumulación capitalista de alcances planetarios. A la vista de este contexto, la colonización de vastas regiones de México durante el siglo XIX se revela como un episodio especialmente dramático de las dinámicas globales de lo que David Harvey ha denominado el “nuevo imperialismo” de finales del siglo XIX y principios del XX.

A diferencia de lo que ocurrió en Mesoamérica, donde el establecimiento de un Estado colonial fue posible gracias a la integración, unas veces violenta y otras voluntaria, de poblaciones indígenas al nuevo orden novohispano, durante las últimas décadas del siglo XIX en el norte mexicano el proyecto colonial se concentró en la necesidad de controlar el territorio y sus recursos, y no contempló la incorporación de sus habitantes originarios en el nuevo arreglo sociopolítico. Al igual que en sitios de Australia, Estados Unidos y Sudáfrica, este colonialismo se gestó sobre el imperativo de remover, y de ser necesario eliminar o deportar, a los habitantes del territorio con miras a implantar un modelo de desarrollo económico y social completamente nuevo. En las vastas franjas de esta región ecológica y económicamente imbricada con el suroeste estadounidense, sucesivas campañas de colonización, ocupación y exterminio dieron forma a una organización territorial y una lógica de desarrollo económico inédita que permitiría el surgimiento de prósperos enclaves agrícolas en las décadas intermedias del siglo XX. En esta lógica, identificada en otras latitudes con la idea del *settler colonialism* o colonialismo de asentamientos, lo primordial no era el control de la población, sino la domesticación y explotación de la naturaleza. En este tipo de proyectos coloniales, las personas no eran indispensables. El uso de la categoría analítica del colonialismo de asentamientos puede ayudarnos a entender las particularidades de la historia colonial de algunas regiones del norte de México en las que la compulsión del mestizaje fue reemplazada por métodos de exterminio, en el que el control sobre los recursos naturales fue siempre prioritario a la conservación e incorporación de los pueblos originarios.

Como veremos en las siguientes páginas, las campañas de colonización del norte de México, en especial en zonas como



el valle del Yaqui, dieron forma a nuevas sociedades definidas por un razonamiento imperialista y racista, similar a las surgidas en aquellos años en otros escenarios de la desmesura colonial, como las grandes planicies de Norteamérica, el sur de África y Oceanía. Se trató, en palabras de Jesús Varela, de un conflicto en el que “se perdieron miles de vidas, corrió mucha sangre, deportaron a nuestros antepasados y los rindieron en el sur de México para trabajar como esclavos”. Estas trayectorias desentonan con las de la colonización de otras regiones del país y nos obligan a repensar las similitudes de nuestro pasado nacional con el de otros países como Estados Unidos, Argentina o Australia. Al mismo tiempo, en algunas demarcaciones naturalmente privilegiadas o estratégicamente importantes del norte mexicano, esta colonización desembocó en un proceso de alteración profunda del territorio, guiado por la implantación de un régimen capitalista de propiedad y explotación de la tierra, la creación de nuevas redes de infraestructura hídrica y de comunicaciones, y la introducción de prácticas de producción agrícola asociadas años después con la defensa de los agroquímicos y la difusión mundial de los organismos genéticamente modificados. De dramáticas implicaciones para las historias regionales y nacionales de México, este es un relato de importantes resonancias globales que no deben ser ignoradas.

Con el objetivo de ofrecer un acercamiento accesible, informado y crítico a la profunda complejidad de estos procesos, en este libro nos hemos planteado hacer una historia de la colonización en México que atienda a las dinámicas de racismo, exclusión, violencia y acumulación que permitieron el surgimiento de la prosperidad agroindustrial que ha caracterizado a distintas regiones del norte mexicano en décadas recientes. Usualmente pensadas como marginales al relato nacional, estas trayectorias, en conjunto, resultan fundamentales para entender la historia contemporánea y reciente de lo que hoy llamamos México, así como corrientes de cambio transcontinentales asociadas al auge de la agroindustria y la llamada Revolución Verde. En las páginas que siguen iremos tejiendo un relato que salta entre lo regional, lo nacional y lo global, y nos



permite vislumbrar distintas facetas de estos procesos dramáticos de cambio histórico.

La primera parte de este texto está dedicada a ofrecer un panorama de las trayectorias ideológicas, políticas y económicas de la colonización y del desarrollo del racismo en el México del siglo XIX y principios del XX. Argumentaremos, siguiendo el trabajo de historiadoras e investigadores previos, que ambos procesos fueron consustanciales, lo que equivale a decir que los anhelos de colonización de las élites mexicanas decimonónicas fueron, desde un inicio, parte de un proyecto racial de transformación de la sociedad nacional, que sigue desenvolviéndose en el presente. Trataremos de entretelar la historia de estos cambios regionales con la discusión de corrientes internacionales de debate e intercambio intelectual mediante las cuales ideas, tecnologías y visiones coloniales fueron adaptadas a la agenda de la integración nacional de México durante el primer siglo de vida independiente.

Con esto en mente, intentaremos posicionar los proyectos de colonización y modernización defendidos por élites mexicanas y extranjeras activas en el norte mexicano en el contexto de la diseminación global de un imaginario colonial racista claramente asociado con el avance del imperialismo capitalista de los siglos XIX y XX en distintos rincones del mundo. Este imaginario, ampliamente discutido en las historiografías de Estados Unidos, África, Asia y otros lugares del mundo colonial, por lo general es ignorado en los relatos de la historia moderna y contemporánea de México, lo que oscurece muchas de las motivaciones e implicaciones de procesos de cambio vividos en el otrora llamado septentrión mexicano. Por otro lado, retomaremos las propuestas de varias historiadoras que han insistido en la importancia de estudiar el papel que el cambio ambiental ha jugado en la apropiación de los medios de producción, la marginación de los pueblos indígenas y la consolidación de distintos órdenes coloniales en estas tierras que hoy llamamos México a lo largo de los últimos siglos. A partir del trabajo de autoras como Elinor G. K. Melville y Vera Candiani, ha quedado claro que no basta con aproximarse a la historia del imperialismo sólo por medio del estudio de conflictos económicos



y políticos, y que es necesario tratar de comprender las formas en las que los cambios ambientales influyeron en las dinámicas de poder, dominación y resistencia del pasado.

En la segunda parte del libro, nutrida con un cuidadoso trabajo de archivo, centraremos la mirada en el valle del Yaqui, donde las trayectorias políticas, económicas, raciales, ambientales, ideológicas, tecnológicas e intelectuales que entraron en juego en la larga colonización del norte de México tomaron un cariz especialmente violento y fueron particularmente exitosas. El resultado fue que durante los siglos XIX y XX se configuró en esa porción del país una variedad específica de lo que Alfred Crosby ha denominado el “imperialismo ecológico” europeo. En su trabajo clásico del mismo nombre, Crosby muestra que, como parte de la expansión imperialista de la modernidad en otras regiones del mundo colonial no tropical, numerosos agentes introdujeron y privilegiaron especies, prácticas y actitudes que transformaron irremediabilmente los equilibrios ecológicos y demográficos anteriores, dando paso a reflejos parciales e híbridos de los paisajes naturales y productivos del Viejo Mundo. Fue el caso, famosamente, de grandes zonas de Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, el sur de Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Como veremos, la lógica de las “Neoeuropas” delineada por Crosby también se desplegó en el sur de Sonora, donde se buscó de manera consistente reemplazar a las poblaciones indígenas por personas “blancas” y alterar los equilibrios ambientales para generar espacios “modernos” con mecanismos como el control del agua, la introducción de cultivos, en especial el trigo, y la creación de infraestructura productiva a gran escala. Por todo esto, plantearemos que la historia del valle del Yaqui representa, no sólo un importante episodio en el proceso de integración de la nación mexicana, sino también un momento significativo del colonialismo contemporáneo en la historia global.

Como suele suceder, esta historia de colonialismo está incompleta. A lo largo de las extendidas campañas de colonización encabezadas por las élites mexicanas de los siglos XIX y XX, los yoeme y otros pueblos indígenas se organizaron para defender su territorio y sus formas de vida de las agresiones de



autoridades políticas y económicas de distintos orígenes y con una variedad de prioridades. De nuevo, la violencia del archivo ha privilegiado las palabras, visiones y posturas de los colonos. Por este motivo, el relato que sigue se enfocará en las acciones y excesos de estos personajes, aunque siempre intentará colocar en el centro a las comunidades e individuos que resistieron el racismo, la criminalización y la colonización durante los últimos dos siglos. En este sentido, evitaremos, en la medida de lo posible, reproducir lo que el historiador indio Ranajit Guha ha llamado “la prosa de la contrainsurgencia” nacida de la lectura acrítica de los archivos del poder, para ofrecer un relato que haga justicia a la historia de dignidad, creatividad y adaptación de los pobladores originarios de México.

Es importante recordar, finalmente, que esta es una historia que sigue escribiéndose y está lejos de encontrar una resolución. A pesar de los esfuerzos recientes del gobierno mexicano, hoy la postura de los yoeme y de otros pueblos indígenas es contundente: “reconciliar una historia tan dolorosa no es fácil”, como aseguró Jesús Varela tras la visita del presidente a Vícam, en septiembre de 2021, “pero es necesario si queremos transformar la vida de este país”.

PARTE I

MÉXICO Y EL MUNDO

I

UN MUNDO DE FRONTERAS

El siglo XIX estuvo marcado por dos procesos de profunda transformación que se interrelacionan. Por un lado, la población humana del planeta creció como nunca, lo que promovió, por el otro, un aumento drástico de la cantidad de territorios destinados a la agricultura y la producción de alimentos. En todas las regiones del mundo, las tierras de sembradío se extendieron enormemente. Esto causó movimientos masivos de población y la inserción de territorios, que hasta entonces habían permanecido al margen de los circuitos globales de intercambio, explotación y acumulación, en el entramado capitalista planetario. En escenarios tan distintos como las estepas del centro de Asia, las planicies del Punjab, la pampa argentina, los desiertos sudafricanos y las selvas brasileñas, la frontera agrícola creció vorazmente, modificó ecosistemas enteros y facilitó el despojo de innumerables comunidades que fueron succionadas con violencia hacia el interior de esta nueva y altamente redituable máquina de acumulación de riqueza. Esto impactó con fuerza patrones culturales y económicos milenarios en distintas regiones del mundo, y provocó el surgimiento de nuevas élites económicas que participaban de un mismo mercado global y compartían valores y perspectivas que, como veremos en las siguientes páginas, implicaban siempre la imposición y el despojo de poblaciones y territorios considerados “primitivos” o “salvajes” en la concepción de esa época.

A lo largo y ancho del globo, la tierra se convirtió en una mercancía más. En la segunda mitad del siglo XIX, autores

como Karl Marx o el estadounidense Frederick Douglass notaron que la acumulación capitalista comenzaba a regirse por una lógica espacial que hacía imperativo el control de territorios cada vez más extensos y que, para facilitar su explotación, sus habitantes tenían que ser despojados o disciplinados. En todos los continentes se configuró una nueva geografía productiva y política marcada por la ocupación violenta de vastos territorios antes habitados por pueblos indígenas. Este impulso global, definido por el geógrafo David Harvey como un proceso de “acumulación por desposesión”, veía en la privatización de la tierra y los recursos naturales y su entrega a agentes privados, individuales o corporativos la clave para la prosperidad de las sociedades y el crecimiento de lo que Adam Smith llamó la riqueza de las naciones. En México, el régimen liberal celebrado por la historiografía nacionalista abrió la puerta a la privatización y mercantilización de la tierra, y echó a andar un amplio proceso de acumulación originaria del capital con el apoyo a la colonización y los intereses privados. Esto trastocaría irremediablemente antiguas estructuras sociales de intercambio, negociación y producción a favor de un modelo rapaz de acumulación de la riqueza, alimentado por la intensa crisis social de finales del Porfiriato, que desembocaría en la Revolución de 1910.

Como parte de este proceso se globalizó la figura del colono o el pionero, el principal vehículo de esta transformación planetaria. La experiencia de estos agentes coloniales tomó innumerables formas. En el sur de Asia, por ejemplo, enormes movimientos migratorios de poblaciones musulmanas de origen bengalí y birmano permitieron la ocupación y explotación de la llamada “frontera del arroz”, lo que afianzó el dominio imperial británico en India y apuntalar el importante crecimiento demográfico y económico de la región durante todo el siglo XIX. En Oceanía, durante el siglo posterior a la creación de la colonia de Nueva Gales del Sur, en 1788, miles de convictos y colonos europeos de raigambre protestante se desplazaron hacia la costa oriental de Australia, desde donde encabezaron la expansión de grandes extensiones de tierra agrícola y ganadera, al mismo tiempo que marginaban a las poblaciones originarias, conocidas por la historiografía imperialista como aborígenes,

hacia las desérticas zonas del centro de la gigantesca isla. En Argentina, donde tuvo lugar uno de los procesos de desarrollo agrícola más espectaculares de la historia de la humanidad durante la segunda mitad del siglo XIX, una potente economía agrícola y ganadera se consolidó sobre la ocupación de amplios territorios indígenas por colonos europeos de diversos orígenes. Las poblaciones originarias fueron desplazadas y violentadas por un aparato colonial que incluía empresarios, agentes del Estado e inversionistas. Del otro lado del mundo, en las vastas superficies del sur de Siberia, miles de colonos rusos, apoyados por el expansionismo del imperio zarista, se lanzaron a la ocupación de grandes porciones de tierra e introdujeron cultivos como el trigo y la linaza, y cuantiosas cabezas de ganado que, en conjunto, fortalecieron la economía imperial rusa en las décadas previas a la Revolución de 1917.

A pesar de las diferencias entre los entornos, los agentes involucrados y las técnicas utilizadas, estas experiencias de colonización compartían el hecho de estar justificadas y sustentadas por una ideología común. En todos los rincones del planeta durante el siglo XIX y los inicios del XX, las iniciativas de colonización siempre se excusaron tras la custodia de la “civilización”, un constructo imperialista definido por la aceptación y la defensa violenta de prácticas y valores culturales, tecnológicos, económicos y filosóficos de origen europeo que, sin embargo, sus promotores percibían como universales. Como veremos con más detenimiento en el siguiente capítulo, durante el siglo XIX esta visión de la civilización se vinculó estrechamente con la preservación del mercado y las formas de producción capitalistas, así como con un entramado ideológico de pretensiones científicas que afirmaba la existencia de “razas”, muchas consideradas inferiores a la “raza blanca” de origen europeo. Para los defensores de la civilización era imperativo imponer sus ideas e instituciones a otros pueblos considerados “salvajes” o pensados como “primitivos”, pues creían que sólo así se lograría el avance de la humanidad.

La llamada “misión civilizatoria” tomó muchas caras, pero nunca estuvo ausente de las empresas coloniales de aquel periodo. Es importante señalar que no sólo fue defendida por

potencias imperiales europeas que ocupaban otras tierras, como los británicos en India o los franceses en Argelia, sino que también fue adoptada con entusiasmo por élites nacionales, sobre todo en el continente americano, que buscaban “civilizar” a las poblaciones de sus nuevos países para imitar los patrones de desarrollo socioeconómico y de acumulación de riqueza perfeccionados en el Viejo Mundo. En este sentido, durante el siglo XIX la misión civilizatoria no sólo fue una ideología imperial, fue también una herramienta crucial para la consolidación de las naciones americanas, como México, cuyas élites encabezaron una guerra económica, social y cultural contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes de sus territorios, cuyos efectos marcan las violentas dinámicas de nuestras sociedades hasta la actualidad.

En este contexto global se gestó una forma de colonialismo particular, distinta a la ensayada en etapas previas de la expansión y desmesura europea. A diferencia de otras experiencias imperialistas acontecidas en otras latitudes de América, Asia o África, durante el siglo XIX el colonialismo de asentamientos no dependió del control efectivo de las poblaciones conquistadas. Armados con la tecnología más moderna y respaldados por la inversión de grandes cantidades de capital, los nuevos colonos buscaban excluir, marginar e incluso exterminar a las poblaciones que se encontraban en su camino. Su interés principal era el control del territorio y sus recursos, y su meta, la creación de una sociedad individualista de propietarios modernos, capaces de generar y acumular la mayor cantidad posible de riqueza. Para esto, los promotores del colonialismo de asentamientos buscaban no sólo dominar el territorio, sino también transformarlo de manera definitiva. Con la constante expansión de la agricultura y la ganadería, y la implantación de un régimen de propiedad individual y capitalista, las tierras ocupadas por los nuevos colonos atravesaron un proceso dramático de cambio definido por la eliminación de especies y paisajes autóctonos, y la creación de espacios enteramente nuevos, delimitados con claridad y explotados según una racionalidad de mercado. Poco a poco, la cuadrícula racional reemplazó las curvas caprichosas de la naturaleza en la cartografía

de los espacios coloniales y la prodigiosa variedad de especies silvestres se redujo para dar paso al monocultivo en vastas zonas del planeta. Al mismo tiempo, en las regiones donde se desarrollaron vertientes de este colonialismo de asentamientos, como Australia, el Cono Sur de América, Norteamérica y algunas porciones del sur de África, las poblaciones indígenas se enfrentaron a distintos modos de violencia genocida que buscaba su subyugación o su exterminio total.

En este mundo de fronteras agrícolas en expansión y colonialismo global, Norteamérica, en especial Estados Unidos, representaba un codiciado horizonte de vastas extensiones cultivables y riquezas aparentemente ilimitadas. Como ha sido documentado y mitificado en innumerables libros, relatos y películas, el “oeste” norteamericano se convirtió en el escenario privilegiado del avance de una nueva forma de conquista y colonización, que tenía como corolario el control efectivo del territorio y la marginación de los pueblos indígenas. Enarbolando la ideología del destino manifiesto, millones de colonos cabalaron hacia la costa del Pacífico, ocupando vastas extensiones de tierra, desplazando a distintos pueblos “indios” y dando forma a una sociedad de frontera que ha sido vista por los apologistas del imperialismo como la clave de la grandeza y prosperidad estadounidenses en lustros recientes. En aquel país, el colonialismo de asentamientos llegó a uno de sus extremos más despiadados y exitosos. En pocas décadas, los colonos blancos lograron arrebatar a los pueblos indígenas casi la totalidad de sus territorios y encabezaron una serie de guerras genocidas que desembocaron en la brutal subyugación de numerosos pueblos y la desaparición de otros tantos.

Como sucedió también en la Argentina del siglo XIX, la ocupación de la vasta frontera del oeste norteamericano se justificó con la lógica del triunfo de la civilización sobre la barbarie. Haciendo eco de un añejo prejuicio que identifica a los pueblos no sedentarios ni urbanos con lo primitivo y a la economía agrícola con lo civilizado, los principales agentes de esta colonización se consideraban vehículos del avance inevitable del progreso en territorios que percibían vacíos y comunidades concebidas como atrasadas. Para muchos colonos, la



imagen que mejor expresaba esta misión civilizadora era la de la conquista del desierto, un espacio que imaginaban inculto y desaprovechado. El antídoto contra este supuesto desperdicio era, por un lado, la ocupación efectiva del territorio por colonos blancos, y por el otro, la implantación de un nuevo orden político, técnico y económico que permitiera la explotación del territorio. Esta colonización se realizó a punta de pistola y se consolidó a partir de la construcción de canales, cercas, prisiones, presas y vías férreas. En este nuevo orden, los pueblos indígenas debían someterse a las élites colonizadoras que controlaban tanto el capital como el conocimiento científico necesarios para explotar las tierras de la forma más redituable. Para sus defensores, dejar en manos de los pueblos indígenas las riquezas de sus propios territorios era igual a desperdiciarlos.

Al sur de las mitificadas tierras del oeste estadounidense, miembros de distintas élites latinoamericanas pronto se identificaron con este ideal de civilización y buscaron ocupar, deslindar, comercializar y desarrollar vastas extensiones de tierra para garantizar su riqueza individual y promover la consolidación y estabilidad de las naciones poscoloniales surgidas tras el final de la presencia imperial española, que buscaban liderar hacia el futuro. Como ha sido bien estudiado por una multitud de autores, una de las principales estrategias de estas minorías en el poder fue la colonización de territorios habitados por pueblos indígenas, que hasta entonces habían permanecido al margen de las principales actividades económicas del periodo colonial. A lo largo y ancho de Latinoamérica, la colonización, de la cual tendremos oportunidad de hablar con más detenimiento en el siguiente capítulo, apareció como la solución perfecta para reforzar el control nacional de zonas alejadas, asegurar el dominio de franjas fronterizas, como el norte de México, y llevar el desarrollo a regiones enteras que hasta entonces permanecían “desperdiciadas” y “ajenas a la civilización”. En las últimas décadas del siglo XIX esta oleada de colonización nacional avanzó en paralelo a la creación de una amplia red ferroviaria, que unía a cada vez más rincones del continente americano con las crecientes redes del capitalismo global. Como sucedía en otras partes del mundo colonial,

como el occidente africano y el norte de India, los ferrocarriles se expandían de la mano del capital privado y con permiso del gobierno nacional, dando forma a una nueva geografía productiva de extracción y a redes de intercambio que desembocaban siempre en los puertos de exportación, como Veracruz, Progreso, Tampico, Piedras Negras, Paso del Norte, Nogales y Laredo.

Como en el resto de Latinoamérica, en México esta colonización se robusteció bajo el cobijo del liberalismo adoptado por gran parte de las élites nacionalistas que acapararon el mando de la nueva república durante la segunda mitad del siglo XIX. Los ideólogos y defensores del liberalismo mexicano veían en la propiedad privada de la tierra la piedra de toque necesaria para construir la prosperidad económica del futuro nacional. Para ellos resultaba urgente desamortizar las tierras supuestamente vacías o desperdiciadas, ocupadas por pueblos indígenas cuyo comunitarismo veían como vestigio de un pasado primitivo y un obstáculo formidable para la marcha del progreso. Los pueblos indígenas que defendieron la posesión comunal de las tierras y resistieron a la lógica de la mercantilización que se extendía por todo el globo fueron identificados por estas élites liberales como enemigos del desarrollo nacional y encarnación nociva del atraso, que algunos observadores de la época llamaron el “vicio comunal”.

Para promover la creación de una sociedad de propietarios individuales orientados hacia la producción capitalista, las élites liberales de México buscaron por todos los medios a su alcance acabar con los sistemas de producción, socialización y organización campesina de los pueblos indígenas, lo que derivó en una agresión sostenida contra la vida social y económica de miles de comunidades en todo el país. Como resultado de esta guerra que pretendía crear una sociedad moderna sobre las cenizas del orden tradicional indígena, durante la segunda mitad del siglo XIX más de 50 millones de hectáreas de tierras comunales fueron deslindadas, privatizadas y vendidas en el mercado, replicando procesos de acumulación originaria del capital gestados en otras regiones del mundo y sentando las bases para la proletarianización de numerosas comunidades campesinas e indígenas de todo el país. Como ha sido estudiado por

una cantidad considerable de autores, entre los que destacan Leticia Reina, Friedrich Katz y Evelyn Hu-DeHart, este proceso de guerra abierta contra los comunes causó innumerables sublevaciones campesinas en todo el territorio mexicano. Leticia Reina ha documentado que durante las décadas intermedias del siglo XIX numerosas comunidades indígenas –mayas, nahuas, nayeeri, wixáricas, chamulas, yoemes– se alzaron contra los nocivos efectos de la liberalización de tierras, atizando el miedo de las élites nacionales y causando inestabilidad en todos los rincones del país.

Durante la década de 1860, cuando las cenizas de la Guerra de Reforma se apagaban bajo los pisotones de la segunda intervención francesa, se avanzó en la creación de un marco jurídico y legal que rigiera el acceso a la propiedad privada de la tierra en México. A pesar de sus diferencias ideológicas, los bandos en conflicto por el control del país parecían estar en acuerdo respecto a la importancia de la comercialización de las tierras. Poco después de que el gobierno de Benito Juárez emitiera la famosa ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos, en 1863, Maximiliano encabezó la creación de una junta de colonización, en 1865, que buscaba coordinar el reclamo de tierras ociosas en todos los rincones del país. En la década siguiente, en 1875, Sebastián Lerdo de Tejada amplió los contornos de estas iniciativas al firmar una ley que abría la puerta a la actuación de compañías deslindadoras de tierra que, como veremos en capítulos posteriores, serían instrumentales para la transformación socioeconómica y ambiental de México. Durante la década de 1880, junto con compañías privadas que buscaron formar parte del nuevo proceso de deslinde, el gobierno de Porfirio Díaz creó comisiones gubernamentales de ingenieros y topógrafos que tenían la misión de medir y fraccionar terrenos baldíos en regiones de potencial agrícola y escasa población, en particular en estados norteros como Baja California, Chihuahua y Sonora, y zonas de las costas tropicales en estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde abundaban terrenos sin títulos de propiedad, individual o comunal, que fácilmente podían ser reclamados como propiedad de la nación. La acción de las compañías y comisiones deslindadoras tuvo

especial éxito en el norte, donde alcanzó, según las palabras de Jan de Vos, “dimensiones gigantescas y hasta absurdas”. En Chihuahua, por ejemplo, tres familias obtuvieron en propiedad privada más de 14 millones de hectáreas, lo que equivalía a la mitad del enorme estado o casi cuatro veces el área total de países como Suiza o los Países Bajos.

La lógica liberal alimentó el crecimiento desmedido de las haciendas, unidades productivas que, como es bien sabido, llegaron a ejercer no sólo un control efectivo sobre el territorio, incluyendo campos de cultivo, pastizales, cuerpos acuíferos y bosques, sino también un dominio político y social sobre las poblaciones asentadas en sus confines. En 1884 se eliminó el límite en la cantidad de tierras que un individuo o corporación podía poseer, abriendo la puerta a la privatización de superficies enormes de tierra y el despojo absoluto de miles de comunidades en todo el país. Mientras que en lugares con importantes redes de colaboración comunitaria, como Oaxaca, se pudo evitar la consolidación de este proceso brutal de acumulación encabezado por empresarios nacionales, con la participación de un nutrido grupo de estadounidenses y europeos, en regiones con presencia de compañías deslindadoras, como el norte y las costas tropicales, la mercantilización de la tierra tuvo un efecto devastador. En estados como Yucatán, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora, las haciendas llegaron a controlar 80% de las tierras y se establecieron dominios unipersonales tan extensos, por ejemplo, los de los empresarios Olegario Molina, José Escandón y Dante Cuzi, que cruzarlos a pie tomaba varios días de viaje. Se sabe que este proceso sentó las bases de un descontento generalizado entre las comunidades campesinas e indígenas del país que desembocaría en el proceso revolucionario de 1910-1920.

En las décadas previas al estallido, estas legislaciones ampararon un crecimiento significativo de la agricultura comercial, la cual se convirtió en una actividad altamente lucrativa y alcanzó alturas industriales en algunas regiones. Junto con los hacendados, villanos del clásico relato del nacionalismo revolucionario, surgió un grupo de capitalistas agrícolas que impulsó la exportación de productos como el henequén y la

vainilla, y la reconversión agroindustrial de comarcas enteras dedicadas al cultivo de materias primas codiciadas en el mercado mundial, como tabaco, caña de azúcar, algodón, fibras textiles y hule. Como afirma María Cecilia Zuleta, mientras descendían las importaciones de productos tradicionalmente importantes, como los minerales, la exportación agropecuaria creció hasta llegar a representar casi 40% del total de las exportaciones mexicanas durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. En una coyuntura favorable marcada por el alto precio de estas mercancías en el mercado internacional, un número creciente de tierras se puso al servicio de los sectores agroindustrial y de exportación. Como era de esperarse, la prosperidad generada por el apogeo de la agricultura comercial capitalista profundizó la desigualdad económica del país y la concentración de la riqueza en pocas manos, al mismo tiempo que el retroceso de cultivos tradicionales, como el maíz, el frijol y la calabaza, obligó al gobierno a importar productos de subsistencia cotidiana a precios altos, empeorando la situación en comunidades rurales y propagando el hambre en todo el país.

El caso más extremo de este proceso de acumulación y polarización se vivió en Yucatán. Para 1900, esta región producía una gigantesca porción del henequén que se vendía en el mundo, lo que alimentó el surgimiento de vastas fortunas que hicieron de Mérida una de las ciudades más ricas de México y convirtieron a la península en una de las zonas más pauperizadas. Sin embargo, otros sitios también se vieron transformados por estos procesos. En el norte de México, este ciclo de acumulación y reconversión hacia la agricultura comercial tuvo profundos efectos en enclaves que habían permanecido ajenos al torrente de la vida económica nacional y los circuitos de intercambio globales. Como apunta Mario Cerutti, al constituir una extensión del gigantesco mercado estadounidense y la dinámica económica del Atlántico, así como una parte importante de los circuitos productivos y de intercambio nacionales, desde finales del siglo XIX el norte mexicano ha sido suelo fértil para el surgimiento de grupos de empresarios agroindustriales y la consolidación de comarcas productivas de gran importancia. Un ejemplo claro es el de La Laguna, región desértica y escasa-

mente poblada, que a partir de la década de 1880 se convirtió en el núcleo de producción algodonera más importante de México y un imán para miles de trabajadores, empresarios y comerciantes de diversos orígenes que nutrieron el sorprendente crecimiento de las urbes de Torreón y Gómez Palacio.

Hemos insistido en páginas anteriores en que esta dinámica no puede entenderse como parte de una transformación meramente nacional. Antes bien, además de los ecos que hallamos en estos procesos de tendencias gestadas en otros lugares del mundo no europeo durante la segunda mitad del siglo XIX, los grandes cambios en la tenencia de la tierra, la expansión de la agricultura comercial y el despojo de las pequeñas comunidades campesinas en México durante aquellas décadas son componentes de una dinámica regional que transformó profundamente grandes porciones de Norteamérica. Como ha demostrado de manera convincente Tore Olsson, entre las décadas de 1870 y 1910 la autonomía económica y el poder político de comunidades campesinas en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos se vieron erosionados por la implantación desde arriba de un proyecto de desarrollo agrícola enfocado en asegurar la estabilidad social en vastas regiones antes ajenas a la integración de estas naciones y en generar estructuras productivas capitalistas orientadas a la exportación. Tanto en el “Nuevo Sur” de los Estados Unidos, que emergía de las ruinas del antiguo sistema esclavista y la guerra de Secesión, como en el México del Porfiriato, que se consolidaba tras décadas de guerra civil, nuevas élites liberales lideraron una embestida coordinada contra las formas de producción agrícola no capitalistas y el trabajo colectivo que buscaba generalizar la privatización de la tierra y garantizar la existencia de masas de trabajadores proletarizados para mantener el funcionamiento de la creciente agricultura comercial. En palabras de Olsson, desde Mississippi hasta Michoacán, pasando por Tennessee y Tabasco, el nuevo milagro agrícola de las élites capitalistas dependía del progresivo despojo y explotación de las masas rurales. Estas contradicciones guiaron una transformación radical de la vida, el territorio y la economía, que vinculaba cada vez más a México y la región norteamericana con corrientes de cambio verdaderamente globales.

II

LA GLOBALIZACIÓN DEL RACISMO

Hacia finales del siglo XVIII, para muchos europeos se volvió cada vez más urgente la necesidad de justificar ideológicamente las inequidades de poder y las brutales injusticias causadas por la expansión imperialista de potencias como España, Francia y Gran Bretaña. Un número creciente de filósofos, burócratas y comerciantes recurrió a la idea de la raza y a prácticas de racialización de poblaciones no europeas en varios rincones del mundo. En 1774, por ejemplo, el terrateniente esclavista inglés Edward Long, dueño de una plantación de caña de azúcar en Jamaica, escribió un tratado en el que afirmaba la existencia de una “raza negra” que, a diferencia de las “razas europeas”, era supuestamente incapaz de razonar y vivir de manera civilizada. Al año siguiente, el fisiólogo y antropólogo alemán Johann Blumenbach publicó un influyente trabajo en el que dividía a la humanidad en cinco grupos de acuerdo con su color de piel: los mongoles o amarillos, los malayos o marrones, los etíopes o negros, los americanos o rojos y los caucásicos o blancos. Aseguraba que las razas no caucásicas eran resultado de un largo proceso de degeneración biológica. En 1799, Charles White, médico de Manchester, completó los planteamientos de Long con un estudio pseudocientífico en el que señalaba distintas categorías raciales correspondientes a rasgos físicos, como la complexión, el color de la piel, la textura del cabello, etcétera. Su tipología apuntaba hacia una falaz y peligrosa conclusión: había razas más aptas para el trabajo físico

y otras para el trabajo intelectual, y las diferencias entre ellas eran insuperables. Tres décadas después, un estadounidense llamado Samuel Morton retomó estas absurdas ideas para dar forma a la farsa de la craneometría, según la cual era posible identificar el origen racial de un cadáver a partir de la medición de su cráneo. Sus técnicas lo llevaron a afirmar que las personas negras e indígenas norteamericanas tenían menor capacidad intelectual, dado que sus cráneos, según sus cálculos, eran generalmente más pequeños que los de las personas blancas.

Junto a muchos otros, estos autores contribuyeron a la consolidación de un pensamiento racista que, a partir del siglo XIX, comenzaría a regir las relaciones humanas en gran parte del mundo con efectos desastrosos. Muy pronto distintos pensadores, en su mayoría hombres blancos involucrados en el avance del imperialismo europeo, pusieron estas ideas en diálogo con las hipótesis desarrolladas por Charles Darwin, quien en 1859 publicó *El origen de las especies*, tratado en el que postulaba la famosa teoría de la evolución que transformaría el estudio de la biología. El resultado fue el surgimiento de una insólita maraña ideológica descrita más tarde como “darwinismo social”, según la cual existía una jerarquía racial dominada por la raza blanca, vista como más avanzada y superior, en cuya base se encontraban las demás razas, intrínsecamente salvajes, que merecían ser dominadas y sujetas a los designios de los pueblos europeos y sus descendientes.

Durante los siglos XVIII y XIX, este nocivo conjunto de ideas se globalizó, adaptándose a una variedad de entornos y tradiciones culturales. De la mano del avance imperialista de las potencias europeas y de la acelerada integración de regiones lejanas al entramado global de producción y explotación capitalista, un número creciente de sociedades fue sujeto a distintos regímenes de racialización. Este término, ampliamente usado por la sociología y la antropología, refiere al proceso mediante el cual algunos grupos humanos son designados como diferentes y sometidos a un trato diferenciado como resultado de su supuesta unidad racial. Esta noción se erige sobre la creencia de que en efecto existen diferencias biológicas entre los grupos de pobladores del planeta y que cada uno tiene características, carencias o habilidades



propias que los distinguen de otros. A lo largo de la modernidad, ésta ha sido la base de una larga serie de prácticas de dominación, organización, clasificación y explotación de sociedades no blancas por parte de distintos agentes imperialistas.

En México, estas trayectorias se entretrajeron con una añeja genealogía de debates e ideas en torno a la pureza de sangre. Para los conquistadores del siglo XVI, esto se refería a la obsesiva necesidad de demostrar la pertenencia a un linaje puro, lo que en la España de la época posterior a la llamada Reconquista significaba no tener ancestros judíos o musulmanes, por lo tanto, probar lealtad a la fe católica. Con el paso de los años en el entorno novohispano, esta noción de pureza, eminentemente religiosa y cultural, fue transformándose hasta llegar a ser equiparada con lo español: ser puro significaba, entonces, no ser indígena, afrodescendiente, judío ni musulmán, y demostrar que se tenía una genealogía española, blanca y católica. La complejidad sociocultural de la sociedad colonial en la Nueva España, sin embargo, hacía difícil mantener esta separación tajante entre puros e impuros, y durante el siglo XVIII emergió un elaborado sistema taxonómico basado en la consideración de la “casta”, una palabra portuguesa que se aplicaría más o menos por el mismo periodo en otras latitudes del mundo colonial, como la India. A pesar de tener contornos similares, las castas del periodo colonial no eran equivalentes a las razas defendidas por los promotores del naciente racismo imperial europeo. Se trataba de un sistema de diferenciación y clasificación más flexible, en el que se podía transitar de un estamento a otro dependiendo de los apellidos, las prácticas culturales y las relaciones sociales. Pocos años después, sin embargo, con el surgimiento del impulso nacionalista del siglo XIX, grupos criollos rechazaron la noción de casta y adoptaron la de raza para dar forma al ideal del mestizaje que, como es bien sabido, se suponía era el resultado de la fusión de lo indígena y lo español en el crisol del incipiente orden mexicano. De manera paradójica, el racismo en nuestro país tiene un origen antiimperialista y surge como parte del proyecto nacional del siglo XIX.

Como han señalado autores como Federico Navarrete, Beatriz Urías Horcasitas y Marcela Martínez Rodríguez, existe una

aversión generalizada entre un amplio sector de la academia mexicana y latinoamericana a aceptar la validez de la raza como un objeto de estudio histórico relevante para la comprensión del pasado de nuestra región. Por un lado, se ha argumentado que es una categoría aplicable sólo al entorno estadounidense o caribeño, donde la diferencia racial fue central para la consolidación de una economía esclavista durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Por el otro, muchos colegas tienen reservas para acercarse a un tema que sigue siendo nuclear para las inequidades políticas, económicas y sociales de países como México: la relación entre la racialización y la muy injusta distribución del privilegio y la riqueza en sociedades como la nuestra. Sin embargo, en tiempos recientes hemos visto una auténtica explosión de discusiones, denuncias, argumentos y propuestas que buscan visibilizar, analizar y condenar el racismo estructural de nuestras sociedades, lo que equivale a poner en tela de juicio narrativas oficiales marcadas por la centralidad del nacionalismo mestizo y generar aproximaciones más críticas hacia el pasado colonial y sus continuidades en el presente.

En el México independiente, el pensamiento racista se montó sobre las antiguas clasificaciones de castas desarrolladas durante la colonia para alimentar un amplio proyecto de descripción y catalogación de los pueblos indígenas impulsado por las élites científicas, políticas y económicas de las distintas regiones del país. Como resultado, durante las primeras décadas de vida nacional tomó forma lo que María Haydeé García Bravo ha llamado un régimen de indigeneidad racializada en México, en el que lo español y lo criollo fueron asociados a lo blanco y al sueño del progreso, mientras que lo indígena se vinculó a ideas como el atraso y lo primitivo. Durante el siglo XIX, numerosos comentaristas y autores de renombre, como Francisco Pimentel, alimentaron un discurso según el cual los llamados indios padecían de una alarmante falta de imaginación, una profunda melancolía, una propensión generalizada a la embriaguez y la pereza, así como una innegable inferioridad intelectual. A medida que avanzaba el proyecto de la integración nacional encabezada por los grupos criollos y mestizos, estos prejuicios racistas se propagaron entre sec-

tores importantes de la población mexicana, filtrándose en el sentido común de las élites de la nueva nación. Con la difusión del positivismo como ideología dominante del Estado durante el Porfiriato (1870-1910), autores como Francisco Bulnes buscaron adaptar tipologías creadas en Europa al contexto mexicano, dando pie a un amplio *corpus* de literatura racista que engarzaba los anhelos modernistas de la época para sacar a México del atraso y dirigir al país hacia el progreso.

Una de las nociones centrales de esta ideología nacionalista racista del siglo XIX era la supuesta degeneración de los indígenas. Defendida por observadores de distintas inclinaciones, desde científicos europeos como Alexander von Humboldt, hasta conservadores nacionales como Pimentel, este juicio se nutría de la mezcla de la exaltación e idealización del pasado prehispánico con el arrogante desdén por las formas de organización comunitaria de las comunidades campesinas del país independiente. Apoyándose en las falacias pseudocientíficas del racismo europeo de la época, algunos comentaristas y autoridades mexicanas de la época no dudaron en recurrir a la supuesta degeneración para justificar la idea de que los indígenas eran inferiores intelectualmente e inherentemente propensos a la criminalidad, el vicio y la violencia, como queda claro en los infames *Estudios de Antropología Criminal*, publicados en Puebla por los doctores Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara. A medida que avanzaba el siglo, estas imágenes racistas y criminalizantes se extendieron tanto que llegaron a ser incluidas en libros de texto escolares, como la también infame *Geografía de México*, publicada en 1889, en la que el país aparecía dividido en “personas más ilustradas o que poseen el elemento vital de los capitales” e “indios” que “por su carácter indolente [...] y falta de ilustración” representaban un “elemento casi nulo” y “un factor insignificante en el consumo y producto de la riqueza pública”. Estos últimos, a su vez, eran categorizados en “indios bárbaros, que son perversos, crueles, guerreros constantes [que] no reconocen las autoridades y viven del pillaje” e “indios degenerados” que eran meramente “indolentes, desaseados y de torpe inteligencia”.

Como queda claro en esta absurda explicación pedagógica, durante todo el siglo XIX el racismo en México, y el mundo,

estuvo estrechamente vinculado a procesos de acumulación y despojo capitalistas que se extendieron de la mano de la civilización. Desde un inicio, el amplio proyecto de deslinde y privatización de las tierras comunales y el despojo de las comunidades campesinas de este país avanzó paralelo a una agenda de transformación racial. Como vimos en páginas anteriores, en este proceso la idea de que la tenencia comunal de la tierra representaba el vestigio de un supuesto pasado primitivo sirvió para consolidar la asociación de los pueblos indígenas con imágenes de barbarie y atraso, y justificar su despojo. Tal y como fue concebida por sus principales ideólogos y defensores, la nación mexicana no contemplaba la inclusión de los pueblos indígenas sino, al contrario, su desaparición paulatina, ya fuera por medio de la fuerza o la inclusión gradual en las filas de la civilización encabezadas por las élites blancas, liberales y capitalistas. Esta violenta disposición a la exclusión y el desprecio fue, como ha señalado Enrique Semo en su magistral trabajo *México: del antiguo régimen a la modernidad*, la “más grande tragedia del liberalismo modernizador, y por ende del país” durante aquellas tumultuosas décadas de integración nacional.

Como era de esperarse, el conflicto no tardó en estallar y sacudir la frágil paz que había emergido del largo conflicto anticolonial de inicios del siglo XIX. En 1840, Santiago Imán, oficial militar nacido en Mérida, emitió un pronunciamiento de protesta por el reclutamiento de milicianos yucatecos para participar en la guerra de Texas y abogar por el respeto al estatus especial de Yucatán y a las normas del nascente federalismo mexicano. Su llamado tomó fuerza y recibió el apoyo de pueblos de indios de la región de Valladolid, que se sumaron a la disconformidad para exigir la reducción de la carga fiscal impuesta por el gobierno estatal a las comunidades mayas de la península. Como es sabido, este pronunciamiento fue el prólogo de una guerra entre fuerzas del ejército mexicano y milicias yucatecas encabezadas por mayas y mestizos mayahablantes, que sacudió la región entre 1842 y 1843. Como ha apuntado José Ángel Koyoc Kú, en años posteriores el gobierno de Yucatán traicionó el apoyo de las comunidades mayas, a pesar del papel que jugaron durante el conflicto con las fuerzas centralistas,

e ignoró su petición de reducir los impuestos a sus actividades comerciales y productivas. Esto alimentó el agravio en el oriente de la península, llevando al alzamiento de numerosas comunidades mayas, en 1847, que sumaron pronto a sus peticiones originales el fin del deslinde de las tierras comunales, la abolición de la deuda de peones acasillados y la creación de un gobierno autónomo para la región. Las autoridades estatales respondieron de inmediato con una violenta campaña de ejecuciones sumarias, represión y fusilamiento de líderes involucrados en la sublevación, como Francisco Uc y Manuel Antonio Ay.

A pesar de que estos reclamos despertaron el apoyo de numerosos mestizos y pobladores de apellido hispano de Yucatán, las élites de Mérida y la Ciudad de México no dudaron en caracterizar la insurgencia como una guerra de castas, cuya finalidad última, afirmaban recurriendo a tropos racistas y criminalizantes, era la eliminación de los blancos de la península. Incapaces de entender la dimensión política y económica del alzamiento, las élites blancas se esforzaron por ver en aquella revuelta organizada el reflejo de la barbarie y el sanguinario primitivismo. Durante los años siguientes, la insurgencia se fortaleció con la participación de un número creciente de comunidades, entre las que tomaron especial relevancia las de los pueblos de Noh Cah Santa Cruz y Santa Cruz Tulum, y el apoyo de autoridades y comerciantes británicos asentados en Belice, interesados en aprovechar la inestabilidad de la joven nación mexicana para apuntalar sus propios intereses imperialistas en el Caribe. La incapacidad de las fuerzas mexicanas para apagar la rebelión y la inflexible y racista postura de las autoridades yucatecas respecto a las peticiones de los rebeldes prolongó la guerra durante toda la segunda mitad del siglo XIX, periodo durante el cual las comunidades mayas conservaron el control efectivo de gran parte de la península y defendieron su autonomía política y cultural frente al avance de las políticas liberales que transformaban el resto del país.

En los años siguientes, como han documentado historiadoras como Ana Sabau, el discurso del miedo a la llamada guerra de castas y la sublevación de las “razas indígenas” prendió

como fuego en la seca pradera de los anhelos liberales. A partir de 1847, funcionarios públicos en distintas partes de México identificaron la “subversión racial” como el principal peligro que acechaba a la joven nación y el ideólogo conservador Lucas Alamán afirmó, en 1849, que la guerra de castas representaba para México una amenaza mayor que el prospecto de una invasión extranjera, como la encabezada por los ejércitos estadounidenses por aquellos mismos años. Más adelante, este miedo racista al supuesto carácter salvaje de los pueblos indígenas no hizo más que crecer, alimentando distintas fantasías de violencia entre las élites mexicanas. En 1869, en respuesta a un nutrido alzamiento campesino indígena en San Juan Chamula, el gobernador de Chiapas Pantaleón Rodríguez redactó un documento que expresaba nítidamente el miedo que la posibilidad de una guerra racial despertaba entre las autoridades de aquel estado en el que “las tribus indígenas, bastante numerosas desde antes de la conquista” se habían “multiplicado sin perder sus instintos feroces”. Según Rodríguez, los pueblos indígenas eran representantes de “una raza sin aspiraciones y sin necesidades [...] acostumbrada a todos los ejercicios groseros [...] y sin más instinto que el de reproducirse”. Frente a esta multitud amenazante, el gobernador identificaba a los miembros de la raza blanca como “descendientes de los conquistadores” y en desventaja demográfica apabullante frente a las “tribus feroces”, cuyos miembros los superaban en una proporción de seis a uno. Acorralado por el miedo, dado que no era “posible encarcelar a pueblos enteros”, Rodríguez pedía asistencia del gobierno federal para “sacar” a los indígenas “de sus madrigueras y trasladarlos a distintas localidades del estado” y el país, de forma que pudieran ser “útiles a la República” como trabajadores y peones, y al mismo tiempo se asegurara la paz racial en Chiapas. Así daba inicio una tradición que, como veremos en capítulos subsecuentes, sería retomada para violentar a distintos pueblos indígenas, como los yoeme de Sonora, en posteriores décadas.

Además de la agresión directa y la represión armada, el gobierno mexicano recurrió a otra estrategia crucial en su guerra contra los comunes: la colonización. Desde inicios del periodo



nacional, esta última fue entendida como el mecanismo principal para extender el control del gobierno central por todos los rincones del territorio mexicano y asegurar el aprovechamiento de tierras fértiles y regiones productivas por medio de la expansión de la agricultura comercial y la propiedad privada. Sin embargo, había pocas personas ilustradas para tan vasto país, por lo que se buscó no sólo promover la migración de criollos y mestizos a regiones alejadas y despobladas, sino también la llegada de colonos europeos que ayudaran al desarrollo de la nación. En 1824, el Congreso General Constituyente promulgó la primera ley de colonización en el país, que serviría de palanca para la creación de leyes estatales encaminadas a atraer a colonos, nacionales y europeos, dotarlos de tierras y otorgarles estímulos para incentivar la actividad agrícola comercial. Entre las regiones que comenzaron a poblarse de extranjeros al amparo de esta ley estuvieron Coatzacoalcos, Jicaltepec, Papantla y Texas, donde Esteban Austin dio inicio a una colonización que desembocaría en el conflicto separatista que culminó con la anexión de la vasta región nortea a los Estados Unidos de América en 1845.

En años posteriores, las élites mexicanas, con independencia de sus inclinaciones ideológicas o intereses políticos, impulsaron el proyecto de la colonización: en 1853, Antonio López de Santa Anna creó el Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio; en 1863, Benito Juárez decretó la ley de enajenación de terrenos baldíos en un esfuerzo por regular la colonización, y en 1865, Maximiliano impulsó una junta de colonización para atraer al inestable país más extranjeros afines a su gobierno. Liberales, como José María Luis Mora, y conservadores, como Lucas Alamán, coincidieron en que la migración europea era la clave para la creación de una ciudadanía moderna y la superación de la inmadurez cultural y la inestabilidad política. Como en otros países de Latinoamérica, la colonización en México fue desde un inicio un proyecto de ingeniería social enfocado en cambiar el perfil racial de la población. Aquí, como la Araucanía chilena, las Pampas argentinas o el sur de Brasil, se trataba, en palabras de Jorge Pinto Rodríguez, de “hacer desaparecer al indio” o “transformarlo



en un campesino capaz de incorporarse como mano de obra” a cadenas de producción transregionales y de hacer avanzar la “civilización” en medio de la “barbarie” indígena.

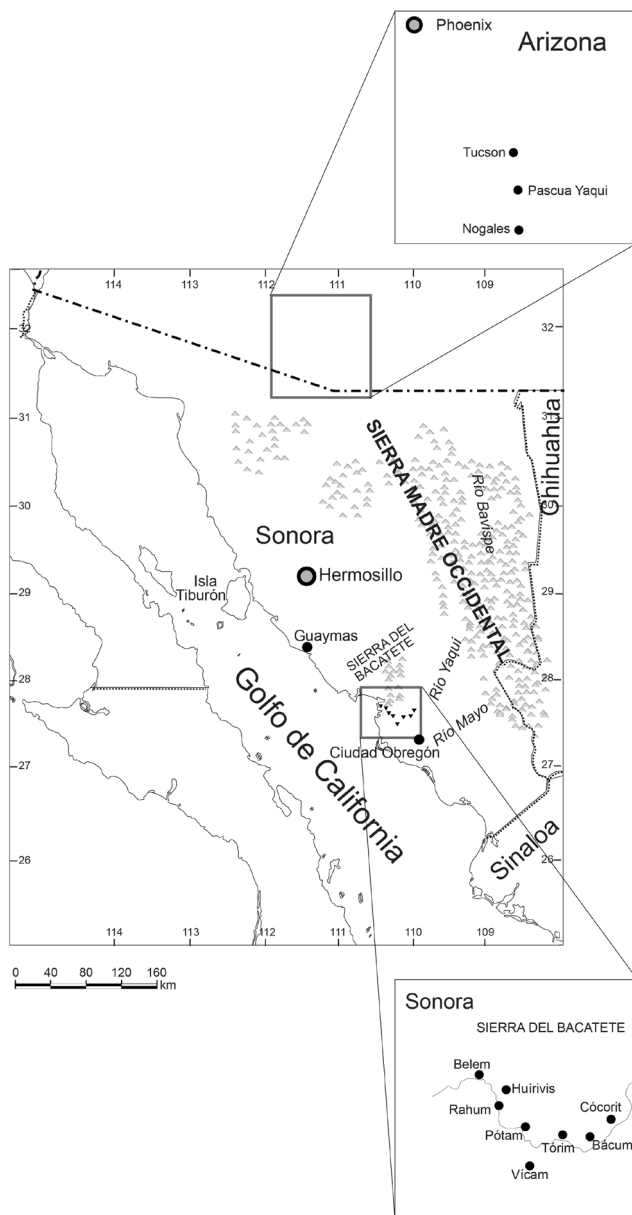
A pesar del decidido impulso dado a las leyes y campañas de migración extranjera y las facilidades otorgadas para la creación de colonias, en la mayor parte de México la colonización no cumplió con las expectativas de las élites nacionales. En el centro y sur del país, así como en la península de Yucatán, la población siguió siendo predominantemente indígena y los casos exitosos de colonización fueron escasos y muy focalizados. Sin embargo, en el norte, por siglos despoblado y periférico, la historia fue muy diferente. Como comentamos en el capítulo anterior, en estados como Chihuahua y Baja California gran parte de las tierras cultivables cayeron en manos de un grupo reducido de terratenientes capitalistas y la cercanía con Estados Unidos permitió la llegada de inversionistas, comerciantes, trabajadores, emprendedores y oportunistas de todo tipo que se aprovecharían de distintas maneras del afán privatizador y modernizador de las élites mexicanas. Hacia finales del siglo XIX, en las vastas extensiones del norte tomó forma un nuevo tipo de sociedad de frontera, teñida por las compulsiones y prioridades de la integración nacional mexicana, pero marcada también por dinámicas productivas y étnicas propias. Regiones como La Laguna, Monterrey y las llanuras de Chihuahua se transformaron profundamente gracias al éxito colonizador, el dinamismo capitalista y la consolidación de una clara jerarquía racial en la que los indígenas fueron relegados a los estratos más bajos de la división laboral, los derechos de ciudadanía y la tenencia de la tierra. Con el cambio de siglo, siguiendo el análisis de Marilyn Lake y Henry Reynolds, mientras en el mundo se globalizaba la blanquitud como una modalidad transnacional de identificación racial y poder político y económico, en el norte de México se consolidaban arreglos que facilitarían el auge de la agroindustria durante las décadas siguientes.

En los próximos capítulos volveremos a dirigir la mirada hacia Sonora, territorio con el que empezamos esta narración. Nos serviremos de la historia del valle del Yaqui, situado en el sur de aquel vasto y hermoso estado, para aportar un estudio

de caso que permita entender de mejor manera el desenvolvimiento de los procesos descritos en las últimas páginas. La historia de esta excepcional región es profundamente significativa. Clavada en el noroeste mexicano, es una zona bendecida por la provechosa conjunción de generosos ríos que fluyen caudalosos desde las inaccesibles cumbres de la Sierra Madre Occidental hacia las aguas del golfo de California y el océano Pacífico, y la existencia de vastas planicies fértiles, bañadas por un sol poderoso y perpetuo. El valle del Yaqui fue un escenario central para el despliegue de los anhelos raciales, colonizadores, privatizadores, productivistas y modernistas vinculados al establecimiento y florecimiento de la agroindustria, la integración nacional y la consolidación de sistemas de producción e intercambio económico, científico e ideológico de alcances transnacionales durante los siglos XIX y XX. Como veremos en los siguientes capítulos, todas estas trayectorias confluyeron en el sur de Sonora en un proceso de transformación demográfica, ambiental y económica sin paralelo en otras regiones de México, cuyo estudio permite vincular procesos, a menudo examinados por separado, para llegar a una comprensión cabal de la historia contemporánea de nuestras sociedades y su interacción con procesos globales de cambio histórico. En el devenir contemporáneo del valle del Yaqui, uno de los escenarios privilegiados de la prosperidad agroindustrial del presente, se combinan trayectorias de colonización, racialización, criminalización, desarrollo de infraestructura, conformación de grupos empresariales, genocidio, urbanización, experimentación científica y conflicto agrario, que resultan centrales para descifrar la historia de México, pero también para entender el lugar que estos sucesos han jugado en los procesos de cambio internacionales de los últimos siglos. Por lo tanto, ésta es una historia simultáneamente regional, nacional y de implicaciones globales a la que debemos poner atención para entender no sólo las complejidades de nuestro imbricado pasado, sino también los retos de nuestro conflictivo presente.

PARTE II

EL VALLE DEL YAQUI



Mapa 1. Territorio yoeme. "Map of locations where Yaqui speakers live".

Elaborado por Sebastian Nordhoff.

[https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Yaqui_population.svg]

III

MIEDO Y ODIO EN EL NOROESTE MEXICANO

Indio valiente y obcecado. Si no quieres que tu raza se extinga, que desaparezca para siempre de la historia de los vivos, evoluciona, procura civilizarte; no des lugar a que el progreso, irresistiblemente arrollador, haga contigo lo que tú haces con tus águilas y tus fieras: perseguirlas y aniquilarlas hasta su completo exterminio.

Manuel Balbás, *Recuerdos del Yaqui. Principales episodios durante la campaña de 1899-1901*

En 1927, Manuel Balbás, médico con aspiraciones de historiador y defensor a ultranza de Porfirio Díaz, publicó un famoso recuento de la guerra librada contra las poblaciones yoeme del valle del Yaqui durante los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Reeditado en numerosas ocasiones por el gobierno de Sonora, el texto refleja claramente el profundo impacto que la ideología imperialista decimonónica, que unía la infatuación del progreso con la franca aceptación del racismo, tuvo entre las élites sonorenses del Porfiriato. En su libro, Balbás afirmaba que era innegable que las tierras del valle del Yaqui pertenecían por derecho y costumbre a los yoeme; sin embargo, se apresuraba a matizar que aquella “riquísima zona” no era “debidamente explotada por los indios y el progreso exig[ía] que así lo [fuera]”. “No es posible”, continuaba en arrogante tono colonial, “que tal riqueza permanezca indefinidamente

en poder de hombres que no saben o no quieren explotarla convenientemente". Ningún "mexicano civilizado y culto", remataba, podía conformarse con dejar en manos de los nativos las riquezas del valle que habían habitado durante siglos. "El progreso tiene grandes exigencias", sentenciaba ominosamente, "y el pueblo que no se amolda a ellas, tiene que sucumbir".

Como en otras regiones latinoamericanas, como las pampas argentinas o porciones del interior brasileño, en Sonora, durante la segunda mitad del siglo XIX, se gestó una variedad específica del colonialismo de asentamientos, que se nutría de la experiencia estadounidense de años anteriores, pero con características que la hacían única. Durante el periodo novohispano, Sonora constituyó uno de los límites más lejanos del dominio virreinal. Aislada del centro del poder político por enormes distancias y formidables barreras naturales, esta comarca había permanecido, salvo pocas excepciones, más allá del control estatal, un flanco abierto en el extremo norte de la Nueva España que parecía imposible de controlar o aprovechar. En las primeras décadas de vida independiente en México, la escasez de población y la falta de capital impidió que la situación de la zona cambiara de manera significativa. Sin embargo, tras el fin de la guerra mexicano-estadounidense (1846-1848) y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se cedió gran parte del suelo septentrional mexicano a Estados Unidos, Sonora tomó una importancia mayor a los ojos del gobierno nacional, que se vio obligado a reforzar sus fronteras para evitar otra pérdida territorial a manos del vecino del norte. De ser una frontera física y simbólica, la región había pasado a convertirse en una frontera geopolítica de crucial importancia.

No obstante, para la década de 1850, Sonora seguía estando eminentemente aislada del flujo de la integración política y económica de los recién creados Estados Unidos Mexicanos. A diferencia de otras zonas norteñas, no contaba con grandes puertos comerciales, enclaves urbanos fuertes ni vínculos establecidos con otros lugares de mayor dinamismo socioeconómico. Opacado por puertos como Tampico o Mazatlán, Guaymas era un territorio costero de reducida importancia, mientras que poblaciones de relativa prosperidad, como el

centro minero de Álamos o la capital Hermosillo, palidecían en comparación con otros asentamientos extractivistas o políticos del norte y el Bajío, como Parral, Zacatecas o Guanajuato.

Las impacientes élites sonorenses tuvieron que esperar al inicio del Porfiriato, en los últimos años de la década de 1870, para avizorar el final de su aislamiento y marginalidad. Autores como Miguel Tinker Salas han señalado que durante las últimas décadas del siglo XIX tomó forma en Sonora una nueva dinámica socioeconómica que se benefició de la integración a la economía del suroeste estadounidense, que vivía una plena y vigorosa expansión gracias al éxito del colonialismo de asentamientos de fechas anteriores y la creciente atención y apoyo del gobierno federal mexicano. La construcción del ferrocarril Nogales-Guaymas (1880-1882) encendió los ánimos de estas élites regionales, sentando las bases para proyectos de gran calado que se modelarían en las siguientes décadas. Parecía que, finalmente, se abría la puerta hacia la prosperidad y el desarrollo de la comarca. En este contexto se intensificó el interés por colonizar el valle del Yaqui, en el sur del estado, un territorio que, como veremos en una sección posterior, había sido el centro de un importante conflicto interétnico desde la década de 1820.

El sueño de colonizar el valle del Yaqui no era nuevo. Desde hacía mucho tiempo observadores externos y miembros de las élites regionales habían apuntado con entusiasmo las enormes posibilidades que aquellas planicies ofrecían para el desarrollo de la agricultura. A lo largo del periodo virreinal, numerosos misioneros jesuitas habían celebrado la increíble fertilidad del valle. Fue el caso del cura alemán Ignaz Pfefferkorn, quien en 1795 afirmó que el suelo era “tan pródigo que por cada faneга que se cosecha regresa cien o más en la cosecha”. Durante las décadas siguientes a la independencia de México no fueron pocos los fuereños que se asombraron de la fecundidad y abundante vegetación que el cauce y las crecidas del río Yaqui hacían brotar en el amplio valle en todas las estaciones del año. Rodeado de un vasto e inhóspito desierto, el Yaqui evocaba en la mente de estos observadores imágenes del lejano y legendario río Nilo, que durante milenios había favorecido la prosperidad de los habitantes de Egipto.

Las fantasías de abundancia que despertaba el llamado Nilo de Sonora, sin embargo, se topaban siempre con un obstáculo aparentemente insuperable: el fértil valle del Yaqui no era una *terra nullis* que esperaba con paciencia que el hombre blanco llegara a labrar sus generosas tierras; al contrario, era el hogar del pueblo yoeme, que durante siglos había resistido los intentos de dominio de españoles, criollos y mexicanos. Para lograr la explotación de las imaginadas riquezas del valle era necesario resolver este dilema. En las primeras décadas del XIX hubo quienes soñaron con atraer a los yaquis al camino de la civilización con prebendas y el contacto creciente con la llamada gente de razón. Fue el caso del ingeniero Ignacio Zúñiga, quien en 1841 expuso que “la conquista de esa tribu para la civilización” sólo se lograría mediante la mezcla entre “nuestros nacionales [...] y sus hijas”, y la promoción de las “necesidades y gozos” de la sociedad moderna entre los pobladores del valle. Sin embargo, como veremos con detenimiento más adelante, a medida que avanzaba el siglo y los sucesivos esfuerzos de colonización se frustraban se vivió un cambio profundo en la estrategia de las élites sonorenses, que gradualmente se inclinaron hacia la violencia y la lógica de la eliminación, propia del colonialismo de asentamientos ensayado en Estados Unidos, Australia y otros rincones del mundo. Para inicios del siglo XX, este cambio de perspectiva había tomado lugar de manera indiscutible. Esto queda claro en la visión del general Francisco P. Troncoso, autor de una famosa crónica de las guerras de colonización del Yaqui conocidas en la historiografía regional como “La campaña del Yaqui”, quien en 1902 afirmó sin tapujos que el progreso del valle y de Sonora sólo sería posible con el exterminio total del pueblo yoeme y la ocupación forzosa de todas sus tierras.

En las páginas siguientes se rastrean los efectos de este cambio radical en la política de las élites sonorenses y mexicanas respecto al valle del Yaqui, que cristalizó en uno de los proyectos de colonización más brutales de la historia moderna de estas tierras que hoy llamamos México y desembocó en uno de los procesos de transformación ambiental más impresionantes de la historia reciente del mundo. En los capítulos

subsecuentes analizaremos los procesos militares, económicos y sociales que nutrieron esta colonización. Sin embargo, es necesario preparar el terreno para esta exposición con una revisión de los discursos que hicieron posible en términos políticos y justificaron en términos ideológicos la terrible violencia instrumentada contra los yoeme por medio de la creación de un régimen de racialización y criminalización específico en el noroeste mexicano.

Durante el Porfiriato, escritores como Fortunato Hernández, autor del famoso tratado *Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui*, de 1902, recurrieron al creciente *corpus* de pseudociencia dedicado a las diferencias raciales desarrollado en Europa, Estados Unidos y otros rincones del mundo colonial para promover el estudio de los pueblos originarios de aquel estado norteño. Hernández, quien aseguraba haber cursado estudios de medición craneal en osamentas halladas en el sitio de la brutal matanza de Mazocoba (1900), desarrolló una tipología de las supuestas razas de Sonora en la que describió a los comca'ac, o seris, como una comunidad de “majestuoso porte”, “espléndida cabellera y soberbia dentadura”; a los tohono o'odham, u ópatas, como la “tribu más valiente de Sonora”, y a los o'ob, o pima, como una nación “pacífica” conformada por “excelentes soldados”. En conjunto, estos pueblos eran esbozados como miembros de razas salvajes que vagaban “sin creencias, sin dioses, sin hogares” en “lejanos bosques” y permanecían neciamente reacios al avance del progreso. En el relato de Hernández, reeditado en numerosas ocasiones por el gobierno de Sonora, estas comunidades son descritas como “tristes”, ajenas a la civilización y destinadas a un “porvenir esclavo” como resultado de su atraso supuestamente incurable.

A lo largo de las primeras décadas de vida independiente, entre las poblaciones sonorenses que se asumían como gente de razón se gestó una imagen ambigua y contradictoria de los yoeme. Por un lado, de manera paternalista, eran vistos como un pueblo laborioso, fuerte y capaz. Sus miembros, afirmaba el mismo Hernández, eran “muy hábiles para tejer telas de lana y algodón”, “notables por su resistencia a las fatigas” y “bastante inteligentes”. Acostumbrados a las inclemencias del clima del

desierto, los yaquis eran delineados como trabajadores “sanos, muy robustos” y altamente capaces. Esta percepción circulaba ampliamente entre terratenientes y empresarios ganaderos desde el siglo XVIII, y correspondía a que gran parte de la mano de obra utilizada en las haciendas y reales de minas de la región estaba compuesta por personas yoeme. Al conformar el grueso de la mano de obra en el sur de Sonora, a pesar de ser señalados como primitivos por la lógica racista de las élites nacionales, eran considerados un elemento fundamental para la supervivencia económica del valle y la futura prosperidad de sus empresarios y autoridades. En pocas palabras, sin la explotación del trabajo yoeme, era imposible para las élites sonorenses previas al Porfiriato vislumbrar el futuro de florecimiento del que se sentían merecedoras.

Este discurso, que podría parecer enaltecedor, encerraba una visión ferozmente deshumanizante: gracias a su energía y vigor, Hernández no dudaba en comparar a los indígenas con “las bien organizadas bestias”. A pesar de apreciar su fuerza y capacidad para trabajar, el pueblo yaqui infundía un profundo miedo a las poblaciones de Sonora autodenominadas blancas. Sin tapujos se decía que eran “muy dados a la embriaguez” y poseían “instintos feroces y salvajes” que los hacían impredecibles y peligrosos. Sin ninguna explicación convincente, el texto de Hernández reflejaba un temor generalizado al afirmar que los yoeme sentían un “odio profundo e implacable” hacia la supuesta “raza blanca” de la que Fortunato y sus interlocutores se sentían parte. A medida que se acercaba el final del siglo XIX, esta paranoia se extendió cada vez más entre otros sectores de la sociedad sonorenses. Incluso acontecimientos anodinos llenaban de pánico a autoridades y ciudadanos en distintos puntos del estado. Encontramos un ejemplo revelador, por absurdo, de este miedo en un comunicado del prefecto de Magdalena, escrito en noviembre de 1908. Según esta autoridad, un grupo de vecinos, al presenciar una estampida de ganado que “corría azorado” por los campos, de inmediato tomó las armas y se dedicó a patrullar las inmediaciones del pueblo durante toda la noche por temor a la presencia de “indios rebeldes”. A pesar de que no había indicios de fuerzas indígenas en aquella

región, los vecinos armados no renunciaron a su búsqueda, la cual, según el informe del propio prefecto, no llegó a nada ni arrojó una explicación convincente para la estampida. El miedo al supuesto odio de los *yoeme* sirvió de justificación para crear numerosos grupos de vigilancia y control de los trabajadores y viajeros yaquis en varios distritos del estado. El temor de las poblaciones blancas llegó a extremos delirantes, como en el caso de un militar que en 1908, año en que la ofensiva oficial diezmó brutalmente a las poblaciones originarias, declaraba que los nativos tenían “el propósito de matar a todos los patrones y quemar los trigos, haciendo cuanto mal les sea posible”. Este discurso de miedo serviría para justificar los excesos contra el pueblo *yoeme* en los momentos más violentos de la guerra de colonización, que tendremos ocasión de analizar en el capítulo siguiente.

Al margen de la paranoia, durante los últimos años del siglo XIX distintos discursos racializantes definieron las políticas del gobierno sonorense respecto a los *yoeme*. La Constitución de Sonora, redactada en 1866, afirmaba, por ejemplo, que las “tribus errantes y las de los ríos Yaquí y Mayo” no podían gozar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos sonorenses dado que se negaban a renunciar a sus formas de vida y de “organización anómala”. Esta perspectiva imperialista fue retomada por el macabro gobernador Ramón Corral, de quien tendremos oportunidad de hablar más adelante, quien fue más allá en la década de 1880 al declarar que el grado de civilización de las comunidades indígenas de Sonora dependía no sólo de su obediencia a las leyes del gobierno, sino de su disposición a aceptar y promover las exigencias del mercado, sobre todo en lo que correspondía a la tenencia de la tierra. Para finales del siglo XIX era claro que el racismo se había institucionalizado en Sonora. Los *yoeme*, que se negaron consistentemente a someterse al dominio estatal y permitir la colonización de su valle durante todo el siglo fueron poco a poco convertidos en enemigos de las poblaciones blancas del estado y vistos como ajenos a la nación mexicana que poco a poco tomaba forma.

Las autoridades sonorenses intentaron lidiar con el supuesto atraso de los nativos con distintas estrategias. La más

extendida y menos brutal fue la de incorporar niñas y niños yaquis al sistema educativo de los yorim, pensando que esto lograría alejarlos de las tradiciones bárbaras de sus antepasados. A pesar de que la raza se consideraba un atributo biológico, distintos miembros de las élites blancas sonorenses creían que era posible curar el supuesto atraso del pueblo yoeme con la educación y la inclusión de sus miembros en los hábitos culturales de la civilización. Esto queda claro, por ejemplo, en el alegato de Carlos Parra, habitante de Magdalena, que afirmaba haber adoptado y criado un niño indígena en el seno de la sociedad de gente de razón. En una carta dirigida al general Lorenzo Torres, Parra relató que había “recogido y alimentado” al hijo de una mujer y un hombre yoeme que “murieron estando a [su] servicio”. Tras bautizarlo con el nombre de Juan y darle su apellido, había acogido al niño en su propia casa y aseguraba que era “en todos estos lugares reconocido como [su] hijo”. Como resultado, Parra aseguraba que la criatura había renunciado a sus viejos hábitos y a las primitivas costumbres de “los de su raza” y debía ser considerado un miembro más de la comunidad blanca de Sonora. Esta capacidad de superar el supuesto atraso no era exclusiva de los infantes. En 1919, por ejemplo, se reportó el caso de un tal Luis. G Matus, hombre yoeme “casado con una mujer yori” que durante años había “dado muestras inequívocas” de buscar “su mejoramiento social” y “elevar su nivel intelectual” con la asistencia puntual a una escuela nocturna y la adopción ferviente de patrones de conducta apreciados por los defensores del progreso y el orden. Queda claro que, a pesar de la rígida división impuesta a lo largo del siglo XIX, la barrera de la raza era permeable y existía la posibilidad de que los yaquis la cruzaran siempre y cuando renunciaran definitivamente a la lealtad cultural y étnica a su comunidad.

Sin embargo, la educación no era la única vía para afrontar la diferencia de los yoeme, hubo otras medidas más drásticas y violentas, como la adopción forzada y el secuestro de niñas y niños indígenas que fueron puestos bajo custodia de familias blancas en ciudades como Altar, Hermosillo y Guaymas. El historiador Miguel Tinker Salas afirma que para 1861 los infantes raptados por fuerzas estatales durante las llamadas

campañas de pacificación del valle del Yaqui constituían un elevado porcentaje de los trabajadores domésticos de la burguesía sonorense. Presente de manera velada a lo largo de las primeras décadas de vida independiente, con el cambio de siglo esta práctica dejó de ser invisibilizada y llegó a ser celebrada en distintos foros. En el periódico *El Centinela* de Hermosillo, del 25 de febrero de 1905, se mencionaba que muchos menores habían sido sacados “de una situación miserable” y colocados en el “seno de honorables familias que los tratan con tanta caridad, con tanto amor como si fueron sus hijos”. Al disfrutar de “las comodidades de los hijos de un rico”, gran parte de estos “niños Yaquis de cuatro o seis años” llegaban a “imitar los usos y costumbres” de la sociedad civilizada y, según el periódico, renegaban de sus viejas costumbres. Al adoptar prácticas como la captura y el secuestro de niños indígenas, extendidas en otras regiones del norte mexicano, Estados Unidos y sitios lejanos, como Australia, las élites sonorenses hacían eco de uno de los métodos más brutales del amplio repertorio de violencias perfeccionado por el colonialismo de asentamientos del siglo XIX.

Esta multifacética visión racializada, teñida a partes iguales de añoranza, paternalismo, miedo y desprecio, estuvo acompañada de un claro esfuerzo por criminalizar a los yome encabezado una vez más por autoridades y miembros de las élites sonorenses. A medida que avanzaba el siglo XIX, la percepción de los nativos pasó de inofensivos pero trabajadores seres atrasados que debían ser atraídos hacia el camino de la civilización, a peligrosos criminales y amenazantes depredadores que era necesario combatir. En el Archivo Histórico del Estado de Sonora abundan testimonios de prefectos, comisarios y jueces que daban crédito a rumores y noticias sin fundamento para culpabilizar a individuos yome de todo tipo de crímenes. Robos, desperfectos y hasta asesinatos cometidos en poblaciones alejadas entre sí, como Moctezuma, Cananea, Álamos, Guaymas y Magdalena, eran rutinariamente atribuidos a trabajadores y viajeros yaquis sin el menor atisbo de evidencia. Un ejemplo extremo y ridículo es el testimonio de un juez de distrito de Magdalena, contenido en el tomo 2318. En este documento se reporta el asesinato de dos ciudadanos

estadounidenses que se encontraban acampando en las inmediaciones de aquel centro minero. Al presentarse en el lugar, el juez Francisco Chiapa observó que los caballos de los difuntos habían sido despojados de sus sillas de montar y que en la escena del presunto crimen se apreciaban huellas de “huaraches que sólo usan los yaquis”. Sin dudarle y con el argumento de que era ampliamente sabido que los nativos acostumbraban robar monturas, el juez llegó a la conclusión de que los asesinos debían haber sido miembros del pueblo yoeme. A la distancia, la argumentación del juez parece risible al no estar basada en ningún tipo de evidencia y sustentarse enteramente en un prejuicio racista. Sin embargo, sus deducciones fueron dadas por válidas con una facilidad que deja ver la magnitud de la aceptación la imagen de los indígenas como “depredadores” y bandidos.

Este proceso de criminalización, alimentado por numerosos individuos y comunidades, desde autoridades locales hasta empresarios mineros, comerciantes, trabajadores y hacendados, llegó a su oscuro apogeo en 1908. Ese año, del que tendremos amplia oportunidad de hablar más adelante, el gobernador Alberto Cubillas declaró públicamente que la tendencia natural de los yoeme era “entregarse a la vida del asalto y del asesinato”. Debido a su supuesto “carácter malvado”, los yaquis fueron declarados abiertamente enemigos de la sociedad sonorense. En un popular libro llamado *México y sus progresos. Álbum-directorio del Estado de Sonora*, publicado por el editor Antonio B. Monteverde, miembro de una de las familias patricias de mayor abolengo del estado, se afirmaba sin reservas que, debido a su salvajismo, los nativos no podían evitar empeñarse en el “camino de la sublevación” y el “bandidaje”. Haciendo eco de un sentimiento ampliamente compartido por las élites de Sonora, Federico García y Alva, el autor, apuntaba que el destino de esta “raza” era el de “desaparecer, y mientras más pronto mejor”. En una clara apropiación de la lógica de la eliminación que alimentó el colonialismo de asentamientos y otros proyectos genocidas de los últimos siglos, todos estos actores estaban abriendo las puertas para uno de los episodios más sombríos y vergonzosos de la historia reciente de México.

IV

UN SIGLO DE GUERRA

Mientras exista un indio yaquí,
habrá un enemigo del gobierno.

Manuel Balbás, 1927

Para inicios del siglo XVI, los yoeme dominaban la fértil región del valle del río Yaquí, donde desarrollaban una economía agrícola altamente productiva que les permitía subsistir de manera holgada y cómoda. Su organización comunitaria giraba en torno al río. Las crecidas anuales fertilizaban grandes extensiones de tierra y las preparaban para sostener abundantes cosechas, al mismo tiempo que obligaban a las comunidades a vivir en rancherías móviles que cambiaban de tamaño y lugar dependiendo de los rumbos y energías del caudaloso torrente que descendía de la sierra. Durante siglos, este pueblo se familiarizó con un paisaje cambiante, redefinido cada año por el desbordamiento del río.

En este escenario era posible asegurar un cómodo sustento, pero difícil desarrollar un sistema de asentamiento permanente o tenencia fija de la tierra. Estas condiciones ambientales –que brindaban amplios beneficios, pero ponían claros límites– marcaron la conformación de las estructuras sociales, económicas y simbólicas del pueblo yoeme, que se resistió hasta fechas muy recientes a asentarse de manera permanente y aceptar de lleno los mandatos del individualismo y la propie-

dad privada. En palabras de Raquel Padilla Ramos, la vida en este contexto ecológico moldeó la cosmovisión del pueblo yaqui, marcada por la potencia del río que “lo mismo traía bonanza y prosperidad en tiempos de paz, como destrucción, muerte y revueltas en tiempos más difíciles”. La incertidumbre y constante mutación del entorno y de la vida nutrieron un *ethos* comunitario generoso, solidario y fuertemente cohesionado. Según Manuel Balbás, a quien hemos citado antes, los yoeme permanecieron hasta inicios del siglo xx como “esencialmente comunistas, en el sentido de que practica[ban] la máxima de ‘lo mío es tuyo y lo tuyo es mío’”, y vivieron de acuerdo con una lógica comunitaria que dictaba “que cuando un individuo no tiene qué comer, acude con la mayor naturalidad y confianza al amigo o al vecino, quienes siempre reciben bien al huésped” y lo apoyan en la medida de sus posibilidades.

A lo largo de todo el periodo colonial, el yoeme fue uno de los pueblos originarios mejor organizados y autónomos del norte de la Nueva España. Su lejanía respecto al poder concentrado en la Ciudad de México y la debilidad de las oleadas de invasión y ocupación encabezadas por españoles, criollos y sus aliados indígenas en el amplio septentrión novohispano durante los siglos xvi y xvii permitieron que los yaquis permanecieran firmemente independientes y firmes en el control de su territorio. A medida que el orden colonial iba consolidándose y dando forma a nuevos arreglos y equilibrios de poder en la vasta superficie que va de las actuales tierras de Centroamérica al llamado Nuevo México, los yoeme aprendieron a colaborar y resistir a los agentes e intereses de aquel nuevo mundo. Sin embargo, a diferencia de muchos otros pueblos que fueron exterminados o aculturados durante el largo dominio español, esta comunidad logró mantener su singularidad cultural y su autonomía política hasta inicios del siglo xix gracias a una hábil mezcla de intercambio, resistencia y negociación. En palabras del historiador Raphael Brewster Folsom, su trayectoria tiene muchas similitudes con la de los tlaxcaltecas, que también preservaron un alto grado de autonomía política durante los siglos de la colonia, al mismo tiempo que obtuvieron grandes beneficios de sus tratos y negociaciones con las autoridades virreinales.

La presencia del Estado colonial novohispano en las tierras del valle del río Yaqui se hizo sentir de forma tardía y principalmente en la acción de los misioneros jesuitas. Los primeros representantes de la Compañía de Jesús aparecieron en la región en 1617. Desde el primer momento, la presencia de estos extraños fue monitoreada de cerca por las comunidades yoeme. En desventaja numérica y siempre constreñidos por la precariedad de su situación en un entorno desconocido y hostil, los jesuitas muy pronto se vieron obligados a plegarse a las exigencias yaquis y, en efecto, a “reducirse”. A lo largo de los dos siglos siguientes, la relación entre estos indígenas y el régimen novohispano estuvo definido por el muy limitado poder de este último y el dominio de aquellos. Durante buena parte del periodo colonial, los yoeme fueron verdaderamente libres y orgullosamente soberanos en su territorio.

A pesar de su impotencia para imponer un control colonial efectivo en el sur de Sonora, la acción de los jesuitas tuvo un importante impacto en la vida comunitaria del pueblo yoeme. Si bien sus avances misioneros fueron siempre lentos y frustrantes, durante el siglo XVII los ignacianos encabezaron la creación de los ocho pueblos yaquis que hasta la fecha rigen la vida de los nativos: Espíritu Santo de Cócorit, Santa Rosa de Bácum, San Ignacio de Loyola de Tórim, Natividad de Nuestra Señora de Vícam, Santísima Trinidad de Pótam, Nuestra Señora de la Asunción de Rahum, Santa Bárbara de Huírivis y San Miguel Arcángel de Belem. Además, los religiosos promovieron una red de misiones en territorio yoeme y otras zonas del noroeste novohispano que llegaron a ser tan productivas y disfrutar de tal bonanza que pronto sirvieron como base para la evangelización de regiones lejanas, como California. Como resultado del empeño jesuita, la bondad del suelo yaqui se convirtió en un factor decisivo para la expansión del orden colonial hacia las vastas y desconocidas tierras del norte.

Mientras la prosperidad de las misiones nutría el expansionismo novohispano hacia Arizona, California y Nuevo México, las comunidades yoeme negociaban su inserción gradual en el orden colonial. Además de su relación con los jesuitas, sus integrantes participaban activamente en la economía agrícola

y minera de la región, así como en las fuerzas armadas de la frontera novohispana, al mismo tiempo que sus familias adaptaban el credo del cristianismo a sus formas simbólicas y preocupaciones culturales propias. A pesar de su creciente aceptación del cristianismo e inserción en las estructuras económicas de los invasores, los yoeme nunca se sometieron al yugo del poder virreinal. Dependientes de su mano de obra y conocimiento, los jesuitas se vieron obligados a defender a los indígenas y facilitarles las condiciones para sobrevivir y florecer al margen de la rapiña de las autoridades coloniales en otras regiones del vasto virreinato. Como resultado, los yaquis disfrutaron de lo que Evelyn Hu-DeHart ha denominado una “existencia separatista” y autónoma hasta principios del siglo XIX. Esto significa que dictaron en gran medida el devenir social, cultural, económico y político del valle y de grandes extensiones del actual sur de Sonora hasta fechas muy recientes.

El primer gran alzamiento yoeme estalló en 1740. En mayo de aquel año, un grupo de nativos armados, liderado por Juan Calixto Ayamea, se lanzó sobre la población de los asentamientos yorim del valle, como Baroyeca, Santa Ana y El Mortero, en venganza por la desaparición y presunta muerte de dos emisarios de la comunidad que habían viajado a la Ciudad de México para entrevistarse con el virrey en meses anteriores. Este ataque recibió pronto una violenta respuesta de mano del sargento mayor de la milicia de Sonora, Agustín de Vildósola, quien reunió un contingente de soldados veteranos de las guerras con los apaches para amedrentar a las poblaciones del valle del Yaqui. El resultado fue una espiral de agresiones que causó una situación de inestabilidad en toda la región. Las autoridades novohispanas recurrieron a la violencia extrema. Vildósola, cuyo apellido fue elegido para nombrar una importante avenida de la actual ciudad de Hermosillo, capturó, ejecutó y decapitó a numerosos yaquis, colocando sus cabezas en distintos cruces de caminos a manera de advertencia. Como réplica, los yoeme sitiaron importantes localidades, como Álamos, y la mayoría de los pueblos yori del valle del Yaqui. En septiembre, sus líderes hicieron un llamado de paz tras la aparición con vida de Juan Ignacio Jusacamea y Bernabé Basoritemea, los dos emisarios

dados por muertos en mayo. Las autoridades novohispanas aceptaron el llamado y se firmó una tregua. Sin embargo, la confianza de los indígenas sería traicionada pocos meses después. En junio de 1741, Vildósola, quien había sido ascendido a gobernador de las provincias de Sonora y Sinaloa tras su participación en la represión yoeme, rompió el acuerdo y arrestó de manera sorpresiva a Jusacamea y Basoritemea. De manera unilateral, el prócer de la historia oficial sonorense los mandó ejecutar a pedradas, pensando en la necesidad de imponer un castigo ejemplar a la rebeldía yaqui. Tras aquella brutal y artera represalia, las cabezas de ambos emisarios fueron exhibidas en distintos pueblos nativos como aviso y signo de humillación comunitaria. Otros participantes en la sublevación, incluido el propio Ayamea, fueron también ejecutados, sellando el final de la insurrección y el futuro de la desconfianza que marcaría la relación entre los yoeme y los yori durante los siglos por venir.

Tras este violento episodio, durante las últimas décadas del periodo colonial los yoeme fortalecieron sus redes de organización y cohesión comunitaria. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de la Nueva España. En palabras de Raquel Padilla Ramos, esto le permitió a la comunidad nativa “tomar las riendas de su propia religiosidad” y consolidar durante las últimas décadas del siglo XVIII una práctica litúrgica y simbólica propia que se nutría de la espiritualidad tradicional de sus ancestros y aspectos del catolicismo novohispano. Durante aquellos años, muchos individuos y familias yoeme vivieron un momento de prosperidad económica al insertarse de manera provechosa en distintas actividades productivas y comerciales en pueblos y ciudades mineras de la región. Allá a donde fueran, conservaban su unidad étnica, establecían barrios y conservaban sus prácticas culturales y religiosas. Tenemos evidencia, por ejemplo, de la existencia de un próspero barrio yaqui en el enclave minero de Parral en el que vivían muchos de los más preciados trabajadores de la ciudad. Por otro lado, al liberarse de las labores en las misiones, muchas familias indígenas participaron de manera más decidida en las actividades agrícolas del fértil valle, llegando a consolidar el control de zonas y recursos estratégicos, como la producción de sal. Al mismo tiempo, muchos

yaquis se unieron a las milicias coloniales y colaboraron en la protección de las fronteras del noroeste novohispano a cambio de lucrativos salarios. La seguridad económica le permitió a la comunidad conservar su unidad política, simbólica y cultural durante el ocaso de la colonia. Para principios del siglo XIX, los yoeme disfrutaban de una tranquilidad y una prosperidad que muy pronto se verían perturbadas por las agresiones de un nuevo enemigo: los colonos mexicanos.

A partir de la independencia de 1821, los yoeme representaron un formidable obstáculo para la integración de la tambaleante nación mexicana. Desde el primer momento fueron vistos, al igual que otros pueblos indígenas, como los diné o apaches, como una amenaza para la seguridad de las lejanas regiones fronterizas de los recién nacidos Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, las reducidas élites criollas sonorenses miraban con codicia los abundantes recursos del sur de la entidad y pensaban en planes para acapararlos para su propio beneficio. De manera contraintuitiva podemos afirmar que éste fue el inicio del verdadero periodo colonial en el valle del Yaqui. Durante los siglos en los que la Corona española consolidó su dominio virreinal en la Nueva España, los yoeme permanecieron en gran medida en control de su territorio, libres y prósperos. Fue con el nacimiento de la nación mexicana que su autonomía comenzó a peligrar por una forma muy específica de colonialismo interno, encabezado por intereses y agentes nacionales.

Los primeros intentos de colonización comandados por mexicanos llegaron muy pronto. En 1826, apenas cinco años después de la independencia, los yoeme se unieron bajo el liderazgo de Juan de la Cruz Banderas para hacer frente a la creciente y abusiva presencia de colonos fuereños en el valle del Yaqui. Este líder de formidables aptitudes creó una plataforma de resistencia que pretendía atraer a otros grupos indígenas y minoritarios de la región para oponerse a los designios colonizadores de las élites sonorenses. Aseguraba haber sido comisionado por la Virgen de Guadalupe para reestablecer el imperio de Moctezuma y buscaba el apoyo de comunidades comca'ac, o'ob y tohono o'odham, al mismo tiempo que cabil-

deaba para crear una red en distintas partes del estado que le permitió dirigir una insurrección efectiva durante más de un año. El alzamiento se extendió y la represión de las autoridades mexicanas se hizo cada vez más feroz y despiadada. A finales de 1826, en el que quizá sea el primer caso conocido de deportación utilizada como arma de guerra, varios yaquis fueron enviados a Veracruz con la excusa de que serían juzgados por supuestos crímenes cometidos en Sonora y enrolados en la Marina contra su voluntad. Ésta y otras medidas represivas llevaron a que las fuerzas yome decidieran dar fin a la sublevación en abril de 1827. Para las autoridades nacionales el peligro parecía haber quedado atrás. Sin embargo, este episodio notable marcaría apenas el inicio de una larga guerra que sacudiría el valle del Yaqui durante el siguiente siglo.

La rendición de Banderas abrió el camino para un nuevo intento de las autoridades mexicanas de imponer su dominio en el valle. En 1828, se promulgó una amnistía para toda la población yaqui y a cambio se les exigió a los ocho pueblos integrarse a un nuevo municipio, cuya cabecera se estableció en el viejo presidio de Buenavista. Esta maniobra legislativa buscaba anular la posibilidad de que comunidades yome continuaran con el gobierno autónomo que habían ejercido hasta entonces en su territorio y abrió la puerta para la creación de incentivos y regulaciones que fomentaban el establecimiento de colonos de fuera en el fértil suelo del sur de Sonora. A pesar de todo, este pueblo preservó firmemente el control de sus tierras y para la década de 1850 representaban una avasalladora mayoría en los ocho pueblos y amplias extensiones del valle del Yaqui.

Pocos años después llegó una nueva era de amenaza colonial con el ascenso a la gobernatura de Sonora del liberal y ferviente juarista Ignacio Pesqueira. Su largo periodo al frente del estado (1857-1876) ha sido alabado por la historiografía regional como el verdadero momento de integración política, cultural y económica de la entidad. Al igual que Vildósola, Pesqueira es uno de los pilares de la narrativa oficial de la historia regional y la identidad sonoreense que se han construido en abierta oposición a la memoria y experiencia del pueblo yome. El mandato de Pesqueira marcó el comienzo de un ataque

frontal contra las comunidades originarias, que reunió autoridades locales, nacionales y distintos sectores de la sociedad yori del estado, y desembocó en la total colonización del valle en décadas posteriores. Durante su administración, la ofensiva gubernamental en territorio indígena fue encabezada por Jesús García Morales, otra figura celebrada como un importante prócer de la historia regional oficial. A partir de 1859, García Morales estuvo a cargo de una campaña de pacificación –eufemismo decimonónico para la contrainsurgencia– que acabó con la vida de centenares de yaquis y desestabilizó profundamente la vida de las comunidades originarias. En respuesta a la intimidación y la violencia fomentada por el gobierno estatal, muchos nativos se refugiaron en la Sierra del Bacatete, dando inicio a la creación de una compleja red de resistencia comunitaria que facilitaría la insurrección en la región hasta mediados del siglo xx. Esta campaña de pacificación llegó a su cruento clímax con la tristemente célebre matanza de Bácum de 1868. En febrero de aquel año, fuerzas del orden sonorenses, al mando de un coronel de apellido Bustamante, abrieron fuego contra unos 450 prisioneros yoeme concentrados en la iglesia del pueblo causando innumerables muertes. En el infame recuento de Troncoso se afirma que “la artillería se colocó en la puerta del edificio e hizo varios disparos con metralla sobre aquella multitud indefensa”. Poco después, el templo ardió en llamas, aún lleno de gente, terminando con la vida de quienes milagrosamente habían sobrevivido aquel cobarde ataque.

La brutal guerra de Pesqueira y García Morales logró su cometido. Durante la siguiente década, el pueblo yoeme pareció estar efectivamente pacificado y sus integrantes no volvieron a tomar las armas contra las autoridades mexicanas y los colonos del valle. Esto cambió radicalmente en 1875, cuando una nueva insurgencia sacudió el orden político de la zona. En esta ocasión, los yaquis se reunieron bajo el liderazgo de José María Cajeme, un dirigente de extraordinarias habilidades políticas y gran carisma, que encabezó la restauración de la autonomía del pueblo yoeme en los años siguientes. En la segunda mitad de la década de 1870, los nativos abandonaron e incendiaron

distintas poblaciones creadas por colonos yori en el valle y crearon un sistema de administración paralelo que incluía el cobro de impuestos al tránsito, el comercio y otras actividades económicas. Alimentado por el crecimiento del comercio en aquella región, que poco a poco se integraba al sistema de intercambio creado por la colonización estadounidense del oeste norteamericano y los resultados de la legendaria fiebre del oro en California, el orden político yoeme liderado por Cajeme representaba un reto mayor, quizá el más significativo para el sueño de integración de la nación mexicana. En palabras de un funcionario sonorense registradas en el Archivo General del Estado de Sonora, para 1879 los yaquis estaban “sustraídos a la obediencia de toda autoridad que no [fuera] la de sus caciques”. En la práctica, entonces, la insurrección guiada por Cajeme había logrado, una vez más, instaurar la autonomía del pueblo yoeme y asegurar su control sobre el territorio en detrimento de los avances colonizadores de las poblaciones fuereñas. Resulta revelador que este episodio no sea más conocido en la historiografía mexicana, que hasta hoy permanece limitada por un intenso nacionalismo y una devoción irreflexiva a la narrativa oficial. El régimen de Cajeme representa, por mucho, uno de los ejemplos de organización comunitaria exitosa más importantes de la historia reciente de México, sobre el cual aún hay mucho que aprender y reflexionar.

En 1885, el ejército mexicano, esta vez bajo el liderazgo del presidente Porfirio Díaz, dirigió nuevamente sus baterías contra el pueblo yoeme. A principios de aquel año, el gobierno federal autorizó el inicio de una campaña militar encabezada por el general José Guillermo Carbó, cuyo apellido se asignó a un poblado en el centro de Sonora, que tenía como objetivo acabar con la insurrección y asegurar el control yori de la zona. Esta amplia ofensiva sacudió una vez más la paz del valle del Yaqui, causó la muerte de centenares de yoeme y el desplazamiento de otros miles, y concluyó con la captura y ejecución de Cajeme, en 1887. Durante los años siguientes, la insurrección continuó bajo el mando de Juan Maldonado Waswechia “Tetabiate”, quien se enfrentó a nuevos y brutales ataques coordinados por el gobernador sonorense Ramón Corral y el

general Luis Torres, quien a la postre se convertiría en uno de los más importantes terratenientes del valle del Yaqui. La resistencia liderada por Tetabiate se extendió durante más de una década, causando una disrupción significativa en la vida económica y política de Sonora y de todo el noroeste mexicano. Como resultado, las autoridades mexicanas comenzaron a hacer uso de tácticas de guerra cada vez más feroces. Fue el caso de las deportaciones forzadas que, como veremos más adelante, se retomarían en años posteriores para acabar de debilitar el alzamiento yoeme. Esta práctica criminal comenzó en 1896. Varias decenas de yaquis fueron secuestrados por autoridades mexicanas y transportados como trabajadores forzados al Istmo de Tehuantepec y a plantaciones en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Para finales del largo siglo XIX, las bases estaban sentadas para la ofensiva genocida que tomaría forma en los últimos años del Porfiriato.

En 1899 dio inicio lo que autoridades e historiadores oficialistas llamarían la Campaña del Yaqui, un esfuerzo por terminar de manera permanente con la resistencia yoeme en el sur de Sonora. A diferencia de embestidas previas dirigidas por gobernantes locales y federales, esta campaña liderada por el general Torres estuvo marcada por la activa participación de amplios sectores de la población civil de Sonora identificados con el proyecto racista del colonialismo de asentamientos. A lo largo y ancho del estado, comunidades enteras se movilizaron para vigilar, perseguir y agredir a los yoeme, señalados como enemigos públicos. Numerosas personas, familias y comunidades sonorenses contribuyeron con entusiasmo a la Campaña del Yaqui donando su dinero, su tiempo y sus recursos al esfuerzo bélico del gobierno. Familias de abolengo, como los Almada, se unieron a colonos recién llegados de apellidos extranjeros, como los Bours, los Singh y los Sung, para proveer a las fuerzas represivas de financiamiento. Empresarios estadounidenses ofrecieron recompensas por cada “yaqui muerto o capturado” y hasta miembros de otros grupos indígenas, como los tohono o’odham, se unieron a las guerrillas populares dedicadas a la persecución y cacería de los yoeme en distintas regiones del estado. Cobijados por la impunidad que les daba



la declaración de guerra contra los nativos lanzada por el gobierno, distintos sectores de la sociedad sonoreense, antes enfrentados, se unieron al grito de una guerra de colonización a todas luces injusta y desproporcionada que sirvió para crear un amplio sentimiento de cohesión social. La creación de esta alianza multiétnica integrada por miembros de distintas clases sociales deja en claro que para las autoridades mexicanas la Campaña del Yaqui no sólo tenía el objetivo de acabar con la insurrección en el valle, sino también, y sobre todo, de crear un sentimiento de unidad e identidad regional mediante la violencia común. Los yaquis, desde entonces, quedaron condenados a ser percibidos como enemigos en su propia tierra.

En los albores de nuevo siglo, las castigadas tierras del valle del Yaqui volvieron a ser escenario de un episodio trágico de extrema agresión que recordaba la traición de Vildósola en el siglo XVIII y las matanzas de BÁCUM en el XIX. En enero de 1900, mientras personas en todo el mundo celebraban la llegada del nuevo siglo, las fuerzas del general Lorenzo Torres se lanzaron sobre un nutrido campamento yoeme, con mujeres, niños, niñas, ancianos y hombres, situado en las inmediaciones del cañón de Mazocoba, a medio camino entre VÍCAM y el puerto de Guaymas. El enfrentamiento duró todo el día y culminó con la muerte de casi 400 yaquis y la captura de más de mil. Estaba claro que el Estado mexicano no tenía ningún reparo en utilizar toda la fuerza a su disposición para acabar con la orgullosa insurrección.

Como veremos en un capítulo siguiente, sin embargo, las autoridades no cumplieron su cometido. Durante varias décadas el pueblo yaqui continuó resistiendo la ocupación del valle por parte de colonos fuereños y autoridades mexicanas. Acostumbrados a las agresiones y a tener que defender su territorio y sus formas de vida, los yoeme fueron capaces de sobrevivir a la Campaña del Yaqui de 1899 a 1902, como habían subsistido a tantos otros intentos de despojo en épocas anteriores. Para inicios del siglo XX, gran parte de su organización social giraba en torno al fortalecimiento de esta resistencia. Las familias nativas que laboraban fuera del valle mandaban recursos y fondos para mantener a las fuerzas que se oponían a

la invasión en ambas laderas del río Yaqui. Quienes residían en el valle permanecían en un estado constante de comunicación y vigilancia, y se dedicaban a reunir grandes cantidades de comida y provisiones, que ocultaban en pozos, cañones y cuevas situados en distintos rincones de la Sierra del Bacatete para alimentar y auxiliar a los guerreros que se mantenían alzados en armas. Aquellos yoeme que habitaban al norte de la frontera con Estados Unidos compraban armas y municiones con sus salarios obtenidos en minas, almacenes y campos agrícolas de la floreciente economía vecina, y las enviaban al valle. En conjunto, toda la sociedad yaqui se volcó hacia una red de organización transregional que buscaba mantener viva la llama de la resistencia. Cuando lo necesitaban, los guerreros que encabezaban la lucha armada volvían a sus pueblos y comunidades, donde podían ocultarse y moverse, parafraseando a Mao Tse Tung, como peces en el agua. En palabras de Bruce Vandervort, durante aquellos años los yoeme sentaron un precedente para el resto de las guerrillas exitosas del siglo XX en lugares tan lejanos como Vietnam, India o el Congo, que siguieron estrategias similares para poner de rodillas a poderosos aparatos imperiales y nacionales.

Antes de discutir el clímax de la guerra genocida en el valle del Yaqui y sus ecos en el periodo posrevolucionario, es necesario completar este recuento con un relato de las iniciativas de colonización y ocupación de la tierra que acompañaron la continua guerra ejercida contra los yoeme en todo el siglo XIX. Sólo así se puede entender en toda su extensión la violencia del proceso de colonialismo de asentamientos encabezado por élites y autoridades mexicanas en Sonora, para vislumbrar que la guerra del Yaqui no sólo fue una batalla contra un pueblo indígena, sino sobre todo una campaña dirigida al dominio y la transformación profunda del territorio.



V

LOS INICIOS DE LA COLONIZACIÓN

Pero nosotros, es decir, un reducido número de colonos, luchamos aún, porque sentimos la pena propia de quien se desprende de su pequeño patrimonio y, sobre todo, la de entregar definitivamente al salvajismo yaquí esta región tan fértil.

Carta de los vecinos de Bácum al C. gobernador del estado, 25 de octubre de 1919

Tras el final de la rebelión encabezada por Juan de la Cruz Banderas, en 1827, comenzó un periodo largo de relativa paz en el valle del Yaqui. Durante las décadas de 1830 y 1840, pequeños grupos de colonos yori aprovecharon esta coyuntura para instalarse en distintos puntos de la región. Sin embargo, los fuereños llegaban a cuentagotas y muchos desistían pronto de sus esfuerzos por establecerse debido a la abierta oposición de los pobladores yoeme. A pesar de que Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales llegaron a extremos criminales en sus intentos por abrir la comarca a la colonización, durante los treinta años siguientes la planicie siguió estando poblada eminentemente por integrantes del pueblo originario, que volvió a estar en control pleno de sus recursos, sobre todo bajo el liderazgo de José María Cajeme.

El panorama cambió drásticamente en la década de 1880, cuando el nuevo gobierno porfirista comenzó a brindar impor-



tantes apoyos a proyectos de colonización en distintas comarcas del norte de México, que hasta entonces habían permanecido ajenas al control gubernamental y al sueño de la integración nacional. Como parte de este amplio esfuerzo expansionista, en 1883 comenzaron a llegar al valle del Yaqui cuadrillas de ingenieros pagados por el gobierno federal para iniciar el proceso de deslinde de distintas porciones del territorio yome, con miras a incentivar su comercialización y eventual transferencia a manos privadas. Los ingenieros eran emisarios de una marea de ocupación y aprovechamiento de las llamadas tierras baldías que, sobre la base de una serie de nuevos decretos federales, buscaba despojar a comunidades indígenas y campesinas en todo México con la excusa de que la propiedad privada era el mejor mecanismo para llevar la prosperidad al campo y asegurar la estabilidad de la tambaleante nación independiente. Durante los años siguientes, millones de hectáreas de uso comunal fueron escrituradas y puestas a nombre de hacendados y compañías, entre las que se contaban empresas ferrocarrileras, mineras y agrícolas. Como resultado de este proceso, para finales del siglo XIX, cerca de 10% del territorio nacional había sido comercializado por firmas deslindadoras y pasado a manos de un pequeño grupo de propietarios privados. Como es bien sabido, este acaparamiento de tierras llevó a innumerables comunidades campesinas e indígenas a alzarse en armas contra el gobierno liberal en regiones tan alejadas entre sí como Nayarit, Chiapas, Yucatán y Oaxaca. A la larga, los efectos de esta oleada privatizadora alimentarían el profundo descontento que provocaría el estallido revolucionario de 1910. Tras una década de guerra revolucionaria, y después de medio siglo de privatización, muchos de estos terrenos serían redistribuidos durante las décadas de 1920 y 1930 con la creación de enormes extensiones de propiedad ejidal y comunal, reinstaurando parcialmente estructuras comunitarias arrasadas por el celo liberal de las élites mexicanas decimonónicas.

En el valle del Yaqui, la marea privatizadora tomó fuerza tras la muerte de Cajeme, en 1885. Tres años después, el gobierno federal ordenó el envío de 1 200 soldados para imponer la “pacificación” definitiva de la zona. Además de promover esta



invasión, las autoridades respaldaron las actividades de la flamante Comisión Científica de Sonora, creada en 1887 para encabezar el deslinde, fraccionamiento y escrituración de las superficies que rodeaban los ocho pueblos tradicionales. Unilateralmente y con apoyo del régimen porfirista, durante los últimos años de la década de 1880 la Comisión entregó innumerables títulos de propiedad de las ancestrales tierras yoeme a colonos, muchos de ellos estadounidenses y europeos. En las inmediaciones de Tórim, grandes extensiones fueron cedidas a hombres de apellidos como Cano, Félix, Almada, Garza y Tellechea, mientras que en Cócorit otro tanto fue otorgado a los Zazueta, los Valenzuela y la compañía de Ferrocarril Cananea-Río Yaqui y Pacífico. Uno de los mayores beneficiados de este reparto fue el general Lorenzo Torres, protagonista de la brutal represión contra los yoeme durante aquellos años, quien por sus servicios a la patria se hizo acreedor de unas 400 000 hectáreas en distintos puntos de la fértil cuenca, convirtiéndose automáticamente en uno de los terratenientes más importantes de Sonora y uno de los hombres más ricos de todo México. De la mano de los militares que habían asolado la región durante años, la Comisión avanzaba a pasos agigantados en la tarea de transformar la organización y la tenencia de la tierra en la zona, así como de establecer de una nueva generación de colonos que buscaba conducir el valle del Yaqui hacia el anhelado estado de prosperidad soñado por las élites de Sonora desde hacía décadas.

Para inicios del siglo xx, este esfuerzo colonizador, que combinaba la guerra abierta contra los nativos y el apoyo oficial a la privatización de su territorio, había mermado considerablemente el control yoeme en la zona. Miles de familias fueron desplazadas y obligadas a buscarse la vida en distintos puntos de Sonora o cruzar la frontera hacia Estados Unidos. De los 32 000 indígenas contabilizados en el valle en 1851, para 1890 quedaban en la región apenas unos 20 000. Por otro lado, para 1900, en las cercanías de los ocho pueblos vivían alrededor de 4 000 fuereños, muchos de los cuales eran propietarios de importantes porciones de tierra. Era el caso, por ejemplo, del empresario Carlos Conant, antiguo vecino de Álamos, que en 1890



firmó un contrato con el gobierno de Sonora que le autorizaba deslindar y vender porciones de terreno para lucro personal, así como emprender la construcción de tanques y canales de agua para promover la agricultura a gran escala. Con este fin en mente, Conant buscó apoyo financiero de inversionistas afincados en la ciudad de Nueva York para crear la Sonora and Sinaloa Irrigation Company, conformada por 75% de capital estadounidense, que sentó las bases para la transformación radical del valle del Yaqui en años posteriores, como veremos a continuación.

La aparición de figuras como Conant hablan de una nueva etapa en la colonización del valle, enfocada en completar el dominio de la tierra con el control del generoso afluente del río Yaqui, que había sustentado al pueblo yoeme durante centurias. Además de las obras encabezadas por Conant, durante los últimos años del siglo XIX la Comisión Científica de Sonora financió la creación de numerosos canales de riego en la planicie, incluyendo los famosos Marcos Carrillo y Porfirio Díaz. Con su auspicio comenzó también la entrega de concesiones a empresarios privados para el uso del líquido que fluía desde la Sierra Madre Occidental hacia las costas del golfo de California. Para 1900, la Comisión actuaba abiertamente como una auténtica agencia de bienes raíces, facilitando la creciente comercialización no sólo de la tierra de la llanura sino también del uso privado del recurso más valioso de aquella soleada y árida región: el torrente del río Yaqui.

Una vez más, resulta necesario entender las trayectorias imperialistas en Sonora en el contexto de cambios que estaban tomando forma en distintos puntos del globo durante las últimas décadas del siglo XIX. En sitios tan lejanos como Uzbekistán, Estados Unidos y la India británica, autoridades y élites capitalistas se lanzaron a la conquista y control del agua como parte central del proyecto de dominio efectivo sobre regiones enteras y sus poblaciones. Este proceso, descrito como “imperialismo hidráulico” por la historiadora rusa Ekaterina Pravilova, fue de igual importancia que la ocupación de tierras y el desplazamiento de comunidades indígenas para la consolidación del expansionismo de la época. En entornos desérti-



cos, como el sonorenses, el oeste estadounidense o el centro de Asia, el manejo del recurso hídrico cobraba una importancia aún mayor. Sin asegurar el control del líquido resultaba imposible pensar en dominar efectivamente el espacio e imponerse sobre las poblaciones nativas. Como ha demostrado el historiador Donald Worster, la famosa “conquista del oeste” sucedió no sólo con la expansión violenta y la ocupación de tierras, sino también como resultado de la creación de una auténtica “sociedad hidráulica” basada en la manipulación intensiva y el control del líquido vital a gran escala. Esta nueva instancia, intrínsecamente “coercitiva, monolítica y jerárquica”, fue encabezada por reducidas élites blancas capaces de movilizar grandes cantidades de capital y los conocimientos científicos y técnicos necesarios para imponer un orden sobre el movimiento de las aguas, su racionamiento y su utilización.

En el sur de Sonora, que representa una extensión de las famosas guerras de conquista del oeste norteamericano, como se ha dicho antes, el control del agua fue desde muy pronto una prioridad para los defensores de la colonización. Una vez asegurada su tenencia en distintos trozos de tierra, los invasores del valle del Yaqui buscaron también aprovechar la apertura del gobierno mexicano acerca del uso privado del recurso hídrico. Entre 1888 y 1894, distintas leyes y decretos federales posibilitaron hacer concesiones del líquido a particulares y compañías comerciales que buscaban aprovecharlo para impulsar sus iniciativas productivas. Como resultado, durante la segunda mitad de la década de 1890, numerosos colonos buscaron obtener este beneficio. En palabras de José Otero, un vecino de Cócorit, cuyo testimonio de 1896 se conserva en el Archivo Nacional del Agua, no era un secreto para nadie que “para que la industria agrícola alcan[zara] un estado floreciente ha[bía] que aunarle el factor indispensable del agua”. Se lamentaba de que a pesar de que desde “hacía años” él y otros vecinos venían “luchando” por acogerse a “los beneficios de la ley del 6 de junio de 1894”, aquella era la fecha en la que aún no tenían un veredicto positivo de las autoridades federales. Sin embargo, Otero y sus pares no tuvieron que esperar mucho tiempo para recibir respuesta a sus peticiones. En 1898, la Secretaría

de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno mexicano estaba expidiendo concesiones de agua a colonos nacionales y extranjeros, profundizando el control fuereño de los recursos del valle.

A pesar de que la mitología blanca de las élites regionales la celebran como una de las pioneras más importantes del valle del Yaqui, la iniciativa de Carlos Conant fue un estrepitoso fracaso. En 1904, la Sonora and Sinaloa Irrigation Company se hundió en la quiebra financiera tras haber logrado el deslinde de unas 8 000 hectáreas. La disolución de esta sociedad abrió la puerta para la aparición en escena de uno de los actores centrales de la transformación de la llanura en las décadas siguientes: la famosa Compañía Constructora Richardson. Sus accionistas, basados en Los Ángeles, adquirieron la concesión de Conant para seguir adelante con la comercialización del territorio yoeme. Provenientes de una de las regiones más icónicas del desarrollo del rapaz capitalismo estadounidense de finales del siglo XIX, estos empresarios tenían ideas muy claras sobre la importancia de imponer los valores del desarrollo y el progreso sobre las estructuras sociales, culturales y económicas de los pueblos originarios. Después de todo, California había sido en décadas anteriores el escenario de uno de los genocidios más brutales de la violenta expansión colonial norteamericana, en el que decenas de miles de indígenas murieron a manos de agentes gubernamentales estadounidenses y empleados de grandes firmas capitalistas. Armada de abundantes fondos para invertir y de la convicción racista de que la tierra debía ser arrebatada por la fuerza a sus habitantes ancestrales para convertirla en mercancía, durante los años siguientes la Richardson adquirió y comercializó más de medio millón de hectáreas. El deslinde había estado limitado a los terrenos cercanos a los ocho pueblos tradicionales, pero durante aquel periodo se extendió hacia la vasta superficie entre la ribera sur del río Yaqui y las costas del golfo de California. La posibilidad de canalizar el afluente y privatizar su uso potenció la enorme expansión del colonialismo en la región (véanse los mapas 2 y 3).

Mapa 2. Se observan las colonias construidas en torno a los pueblos y ome tradicionales, siguiendo el curso del río. Parte norte del delta del río Yaqui, Sonora, México. Elaborado por la Compañía Constructora Richardson, S. A., sin fecha.

Comisión Nacional del Agua, Archivo Histórico del Agua, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3415, expediente 46587, legajo 2, foja 25



Mapa 3. Se aprecian las grandes extensiones de tierra deslindadas y lotificadas en rectángulos en la parte sur del río Yaqui, en las que florecería la agroindustria centrada en Ciudad Obregón. Parte norte del delta del río Yaqui, Sonora, México. Elaborado por la Compañía Constructora Richardson, S. A., 9 de febrero de 1911. Comisión Nacional del Agua, Archivo Histórico del Agua, Fondo Aprovechamientos Superficiales, caja 3415, expediente 46587, legajo 3, foja 45

Entusiasmadas por el prospecto de, finalmente, poder beneficiarse de la explotación del próspero Nilo de Sonora de la mano del capital estadounidense, en 1907 las autoridades federales otorgaron a la Richardson una generosísima concesión que le permitió hacer uso de 55 000 litros por segundo del torrente del río Yaqui. Habiendo consolidado su preeminencia como los mayores terratenientes y usuarios de los recursos hídricos del valle, los accionistas dieron forma a un plan de desarrollo de escala gigantesca. En una carta que Albert Stein, representante de la Richardson en la Ciudad de México, envió en julio de 1910 a Olegario Molina, esclavista y secretario de Fomento de Porfirio Díaz, guardada en la caja 1051 del Archivo Histórico del Agua, menciona un plan para construir “un sistema” compuesto por “una presa, obras de distribución,

derivación, etc.”, que en conjunto “sería de una magnitud más grande que cualquiera otro del Continente Americano”. Prometía la construcción de una presa “más grande y de mayor capacidad que la gran presa Roosevelt del proyecto del Salt River de Arizona”, que posibilitaría la irrigación de una extensión “dos veces más grande” que la del Valle Imperial en California. Según el entusiasta emisario de la compañía, se proyectaba que el plan fuera ejecutado entre 1910 y 1917. La Richardson soñaba en grande. No obstante, el estrepitoso declive del régimen oligárquico de Porfirio Díaz, acontecido pocos meses después de la redacción de esta carta, clausuró la posibilidad de llevar a cabo esta faraónica obra.

El estallido de la Revolución no impidió que la Richardson consolidara su posición dominante en el valle del Yaqui durante la década de 1910. A pesar de la inestabilidad y las subsecuentes sacudidas políticas, para 1917 había impulsado la creación de 550 kilómetros de canales de riego, 150 puentes, más de 600 kilómetros de caminos y una extensa red telefónica que comunicaba los extremos del valle. Para 1925, en pleno gobierno de Álvaro Obregón, la compañía estaba en posesión de cerca de 80% de las tierras agrícolas de la comarca. En su vigorosa expansión, la Richardson había aprovechado el debilitamiento de la red de resistencia yome causado por las continuas agresiones dirigidas por autoridades y élites regionales. Es indudable que su éxito fue posible gracias a la criminal escalada de ataques oficiales llevados a cabo durante los últimos años del Porfiriato. En las páginas que siguen haremos una aproximación a este momento tristemente célebre para seguir juntando las piezas de la violenta historia de la colonización del sur de Sonora.



Figura 1. Grupo de más de 30 mujeres y niños yoeme
prisioneros en Guaymas, *circa* 1910.
California Historical Society Collection, 1860-1960-USC
Libraries Special Collections.

Disponible en Wikimedia Commons: [https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:A_group_of_more_than_30_women_and_children_Yaqui_Indian_prisoners_under_guard,_Guaymas,_Mexico,_ca.1910_\(CHS-1512\).jpg](https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:A_group_of_more_than_30_women_and_children_Yaqui_Indian_prisoners_under_guard,_Guaymas,_Mexico,_ca.1910_(CHS-1512).jpg)

VI

UN PROYECTO GENOCIDA

Como vimos antes, durante los últimos años del siglo XIX la guerra contra los yaqui impulsada por las autoridades fue también adoptada por grandes sectores de la sociedad sonorense, ávidos de participar del proyecto colonial del valle del Yaqui. En los primeros años del siglo XX, la llamada Campaña del Yaqui se convirtió en una verdadera industria. A lo largo y ancho del estado, en localidades tan alejadas entre sí como Guaymas, Moctezuma, Magdalena, Cananea y Ures, numerosos hombres se volcaron a participar en los grupos organizados y financiados por el gobierno estatal para vigilar, amedrentar y controlar a las poblaciones nativas. A cambio de sus servicios paramilitares recibían un pago y muchas veces accedían a bonos otorgados por individuos y empresas, sobre todo mineras, por la aprehensión de indígenas supuestamente involucrados en acciones de bandidaje y depredación. Como resultado, para mediados de la década de 1900 la guerra se había convertido no sólo en una política de Estado, sino también en una actividad redituable para muchas familias yori de Sonora.

Este periodo de creciente confrontación coincidió con el momento de consolidación de una nueva élite económica y política en la entidad. Después de décadas de pugnas entre facciones regionales que buscaban controlar el estado, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX un nuevo grupo cercano al presidente Porfirio Díaz se impuso y logró una concentración de poder nunca vista durante la corta vida

independiente de México. Esta alianza estaba encabezada por lo que la historiadora Evelyn Hu-DeHart ha descrito como el triunvirato, conformado por el general Luis Emeterio Torres, el vicepresidente Ramón Corral y el gobernador sonoreense Rafael Izábal, que reunían una enorme influencia política y económica en la región, acrecentada gracias a sus buenas relaciones con el gobierno federal y las fuerzas armadas. Durante los años de la Campaña del Yaqui, los miembros del triunvirato se erigieron como socios y líderes de las élites terratenientes de Sonora y los intereses capitalistas de la zona. Aprovechándose del fortalecimiento de la economía local generado por la inserción de la comarca en la dinámica de expansión del suroeste estadounidense, estas figuras amasaron inmensas fortunas al amparo del poder político sirviéndose de la impunidad que éste les brindaba y de una creciente red de complicidades y acuerdos. En los años previos al estallido revolucionario, estos “aristócratas armados” llegaron a encarnar, en palabras de Paco Ignacio Taibo II, la “síntesis del capitalismo porfirista [...] bronco, rapiñero, escurridizo y simulador” que justificaba la más terrible violencia en defensa del progreso.

Durante los primeros años del siglo xx, la vigilancia y el control de las poblaciones yoeme se convirtieron en una auténtica prioridad para el triunvirato. A partir de 1902, Izábal y Torres encabezaron una enérgica campaña de represión que incluía forzar a los nativos a adoptar residencias fijas para facilitar su control y a solicitarles salvoconductos para permitirles desplazarse dentro del estado, lo que coartaba de manera ilegal su libertad de movimiento. En los años siguientes, al ver que la rebeldía yaqui no aminoraba, las autoridades recurrieron al encarcelamiento arbitrario de cientos de personas, la separación de innumerables familias, la ejecución ilegal de decenas de individuos y la deportación de pequeños grupos de insurrectos a las lejanas tierras del sur y el sureste de México. Hacia mediados de la década de 1900, la ansiedad de las élites locales aumentó de manera exponencial a medida que comenzaban a hacerse visibles los primeros signos de la profunda sacudida que se viviría en la entidad y el país entero a partir de 1910. La bonanza económica vivida en el último trecho del si-



glo XIX comenzó a desvanecerse causando el descontento entre amplios sectores de la población, incluyendo los trabajadores mineros que organizaron la épica huelga de Cananea, en 1906. En un escenario de creciente incertidumbre económica, muchos hombres y familias sonorenses vieron en la guerra contra los yoeme una oportunidad laboral y de incremento de su patrimonio. Los grupos armados antiyaquis se popularizaron en todo el estado y muy pronto comenzaron a contar con el apoyo financiero del gobierno federal, facilitado por la intervención de Corral. A pesar de ser bastante poco efectivas, las cuadrillas paramilitares se extendieron por numerosos pueblos de Sonora, lo que llevó a incontables abusos y la normalización de la violencia popular contra los indígenas, vistos como enemigos por gran parte de la población. Al margen de los fondos federales que comenzaron a recibir con la llegada de Corral a la vicepresidencia, estas agrupaciones también disfrutaron del patrocinio de empresas, como la Cananea Consolidated Copper Company, gremios de comerciantes chinos en ciudades como Hermosillo, e individuos potentados, como Jorge y José María Almada.

La creciente ola de vigilancia y agresión generalizada contra los nativos alcanzó su clímax en 1908, año que permanece en la memoria como uno de los más oscuros y vergonzosos de la historia contemporánea de la entidad y la República Mexicana. Existen cuantiosos documentos en el Archivo General del Estado de Sonora que atestiguan el incremento en las comunicaciones entre distintos niveles de poder que se coordinaron para escalar la violencia contra la comunidad yaqui a partir de los primeros meses de ese año. Durante aquellas semanas, decenas de hombres yoeme fueron arrestados, torturados y encerrados en comisarías y prisiones de Guaymas, Hermosillo y otras poblaciones de la región. Esto llevó a que un grupo de indígenas, bajo el liderazgo de Luis Bule, aceptara negociar con las autoridades estatales para intentar llegar a una tregua. A pesar del anuncio de un supuesto tratado de paz firmado en mayo, la confianza entre los pueblos originarios y los mexicanos, encabezados por figuras como el violento general y terrateniente Lorenzo Torres, se quebró muy pronto y se

reanudaron las agresiones. En junio de 1908, a medida que el calor subía en la amplia franja desértica del noroeste, el gobernador Alberto Cubillas dirigió un comunicado a la sociedad sonorenses en el que pedía que se preparara para promover “no solamente la defensa de sus intereses” sino también para “escarmentar enérgicamente al enemigo cuando el caso se presente”. En un anuncio certero de lo que vendría después, el gobernador declaró que se debía “acabar definitivamente” con la insurrección yoeme, para lo cual se había llegado a un acuerdo entre su administración y el gobierno federal para llevar “a la práctica las medidas más enérgicas y eficaces” para “obtener un pronto y satisfactorio resultado”.

El primer paso de la estrategia anunciada por el gobernador Cubillas consistía en dar la orden a prefectos, coroneles y presidentes municipales de Sonora de aprehender y encarcelar a todos los indígenas del estado. Hasta aquel momento, el gobierno había diferenciado entre los “alzados” y los “mansos”, concentrándose en la represión de los primeros y la vigilancia de los segundos. Sin embargo, a principios del verano de 1908 se abrió la puerta para una persecución generalizada que reflejaba la intención de las autoridades de acabar de una vez por todas con la amenaza que los yoeme representaban para su modelo de desarrollo, acumulación y progreso. A mediados de junio se llevaba a cabo una guerra generalizada contra los yaquis en Sonora. En las regiones mineras y ganaderas del centro y norte del estado, autoridades y grupos paramilitares asediaban a trabajadores y familias nativas; en la Sierra del Bacatete, nutridos contingentes militares encabezados por Lorenzo Torres avanzaban expulsando a los rebeldes de sus escondites, y en el fértil y codiciado valle del Yaqui, los soldados apresaban a todos los yoeme que se topaban, incluyendo niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres pacíficos. Este brutal hostigamiento incluyó también la participación de considerables sectores de la sociedad civil. En localidades como Ímuris, Nacozari y Magdalena se reportó la creación de grupos de decenas de personas que se lanzaron sin miramientos al acoso y aprehensión de mujeres, ancianos, hombres y hasta niños de pecho. Sirviéndose de la maquinaria de acoso y de los discursos deshumanizantes

y racistas perfeccionados en épocas previas, la sociedad sonorenses se volcó a la ofensiva contra los pueblos originarios, replicando lo sucedido en otros lugares del mundo lacerados por la lógica de la eliminación del colonialismo de asentamientos.

El 23 de junio de 1908 se anunció que el general Luis Emeiterio Torres, el vicepresidente Ramón Corral y la Secretaría de Guerra habían dado la orden de “sacar de Sonora a todos los yaquis, todos sin excepción” y “sin distinción de ninguna clase”. Unos días después, Corral se comunicó con el gobernador Cubillas y le pidió que no se preocupara asegurando que “el presidente de la República esta[ba] de acuerdo con esa medida”. De inmediato se procedió a instrumentar esta criminal agenda a lo largo y ancho del estado. El primer paso fue poner en marcha una persecución, ejecutada de manera violenta, arbitraria y de acuerdo con una lógica abiertamente racista. En Fronteras, por ejemplo, se reportó la detención de un grupo de otomíes, originarios de San Miguel de Allende, que fueron confundidos con yaquis. En las inmediaciones de Baviácora, miembros de la población civil aprehendieron a ciudadanos ópatas, pimas y pápagos, que fueron violentamente sometidos por su supuesto parecido fenotípico con miembros del pueblo yoeme. Estaba claro que se trataba de una guerra racial enfocada en la eliminación de una comunidad entera. Durante los sofocantes meses de julio y agosto, las detenciones en masa continuaron y miles de indígenas sonorenses fueron privados de la libertad en puntos tan lejanos entre sí como Ímuris, Arizpe, Álamos, Magdalena, Janos y Nogales, para luego ser transportados al puerto de Guaymas, desde donde fueron embarcados en dirección al sur.

En un episodio especialmente simbólico, el 7 de julio se reportó que 800 yoeme encadenados iban a bordo del barco de vapor Ramón Corral, bautizado en honor del macabro vicepresidente porfirista. Esta demencial dinámica siguió desarrollándose durante los siguientes seis meses, hasta diciembre de 1908, cuando el gobierno estatal emitió un comunicado en el que se festejaba el triunfo de “la deportación absoluta de esa tribu que ha venido entorpeciendo el desarrollo constante del progreso [...] y bienestar de Sonora”. En aquel documento se informaba

que las expulsiones habían logrado el cese de “las depredaciones” del pueblo yoeme, cuyos miembros “no hacen movimiento alguno sin ponerlo antes en conocimiento del Gobierno”. La supuesta docilidad de los yaquis encendía la esperanza del gobierno. Sin embargo, el tono del comunicado era escéptico: “Los habitantes de Sonora están bien convencidos de que nada hay seguro en este importante asunto ni puede abrigarse completa confianza sino hasta después de efectuarse el hecho de la absoluta sumisión de los indios, y de tenerse la seguridad de que éstos quedan en condiciones de no poder sublevarse en lo sucesivo”. El mensaje era claro: para las autoridades mexicanas no podía haber otro objetivo que la derrota total de los indígenas.

Llegado este momento, la guerra contra los yoeme ya no se limitaba a asegurar el control del codiciado valle del Yaqui, ahora la violencia en Sonora se engarzaba visiblemente con otro de los proyectos emblemáticos del capitalismo porfirista: la producción de fibra de henequén en la península de Yucatán. Como es bien sabido, la deportación de los nativos fue aprovechada para dotar de mano de obra esclava a las lejanas plantaciones de terratenientes blancos de Yucatán, como Augusto L. Peón y los hermanos Audomaro y Olegario Molina. Este último, además de empresario, actuaba entonces como secretario de Fomento, Colonización e Industria del gobierno federal. Para finales de 1908, alrededor de 8 000 personas del pueblo yoeme habían sido transportadas hasta Yucatán, siguiendo una ruta pavorosa: comenzaba con la reclusión en la Penitenciaría Estatal de Sonora, en Hermosillo –que hoy alberga un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia–; seguía con el traslado a pie hasta Guaymas y luego por mar hasta San Blas, Nayarit; después los secuestrados caminaban hasta la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, y de ahí se transportaban en tren hasta la Ciudad de México y Veracruz, donde eran subidos a barcos que los llevaban hasta el puerto de Progreso, en Yucatán.

La complicada logística y el alto coste que implicaba este plan criminal habla de una complicidad entre las élites económicas de Sonora y Yucatán, y autoridades militares y civiles desde el nivel municipal hasta el federal. La brutal efectividad con la que se instrumentó esta elaborada estrategia deja en

claro que sus promotores compartían una visión de progreso que buscaba no sólo la acumulación de riqueza sino también la subyugación absoluta de comunidades indígenas, imaginadas por el pensamiento racista de la época como inferiores y casi infrahumanas. En los registros de archivo disponibles es evidente que se trató de un proyecto llevado a cabo siguiendo un proceso burocrático que implicaba la coordinación entre distintos niveles de gobierno, sectores sociales y fuerzas armadas. Por ejemplo, en una carta escrita por Lorenzo Torres al presidente municipal de Guaymas en junio de 1908, el general y terrateniente le pide al edil tener especial cuidado en justificar todos los fondos utilizados durante la capturas y deportaciones a fin de “que la Federación erogue el gasto” y no se vieran afectadas las finanzas locales. En esto la guerra del Yaqui se adelantaba a otros conflictos que durante el siglo xx buscaron poner la racionalidad técnica y la lógica burocrática al servicio del exterminio. Es innegable que 1908 representó el punto más alto de un proyecto dirigido a eliminar por completo la presencia de los indígenas en el valle del Yaqui. Esto es expresado de forma cristalina en una comunicación del general García Peña, jefe de la Comisión Científica de Sonora hasta inicios del siglo xx, en la que declaraba que la expulsión de familias enteras era no sólo una “medida sapientísima” sino la única alternativa para la colonización y el desarrollo de la región. En sus palabras, no bastaba con disciplinar al pueblo yoeme: lo más provechoso era extinguirlo definitivamente. No es exagerado decir, continuaba el general, “que uno de nuestros principales enemigos es la mujer Yaqui”, pues es ella, en su labor de madre, “la que forma los primeros elementos de educación del niño” y “le engendra desde que principia a tener noción de las cosas, el odio al yori”. García Peña remataba este alegato indignante afirmando: “no podemos menos que aplaudir con todas nuestras fuerzas [la] medida” de la deportación.

La criminal estrategia iniciada en 1908 tuvo un éxito innegable. Para 1910, alrededor de dos terceras partes de la población yoeme, es decir, entre 15 000 y 20 000 personas, se hallaban desperdigadas entre Yucatán, Sonora y el suroeste de Estados Unidos, a donde muchas huyeron para evitar la captura y el

exilio. Como resultado, los yaquis se convirtieron, en palabras de Bruce Vandervort, en el pueblo indígena más disperso de Norteamérica y sus tierras pudieron finalmente ser ocupadas de forma pacífica por mexicanos y extranjeros emocionados por el prospecto hipnotizante del Nilo de Sonora. Para finales del Porfiriato, el largamente esperado sueño de colonización del valle del Yaqui parecía haberse cumplido.

Sin embargo, el relato está lejos de terminar ahí. Fruto de sus excesos criminales, el régimen de Porfirio Díaz fue derrocado por el alzamiento revolucionario de 1910, apenas dos años después de la implementación de la deportación masiva yome. Sacudido por las huelgas, la guerra y el hambre, Sonora fue uno de los estados en los que los efectos de la Revolución pegarían con más fuerza. La crisis económica y política desencadenada en 1910 trajo consigo el colapso del triunvirato formado por Corral, Izábal y Torres, figuras que hasta hacía poco empuñaban un poder omnipotente en la región. Los tres principales responsables de los crímenes en contra de los yaquis morirían poco después en el destierro, sin haber enfrentado la justicia. Corral siguió los pasos de don Porfirio y se exilió en París, donde murió de cáncer en noviembre de 1912. Antes de su muerte fue premiado por el gobierno de Francia, un régimen que se situaba al frente de los excesos imperialistas y racistas de la época, con su inclusión en la tristemente famosa Legión de Honor. Izábal también huyó rumbo al viejo mundo cuando estalló la Revolución para morir en altamar en octubre de 1910. Quienes saquearon *La Europa*, su hacienda llamada así en un tono aspiracionista propio de un racista decimonónico, encontraron instrumentos de tortura y espacios dedicados al castigo corporal y el encierro que recordaban a los usados en las plantaciones de esclavos del sur estadounidense del siglo XIX. Lorenzo Torres y Luis Emeterio Torres terminarían sus vidas años después un poco más cerca del escenario de sus crímenes, afincados cómodamente en Los Ángeles, California, a poca distancia de las oficinas de la otrora próspera Compañía Constructora Richardson.

La evidencia que queda de este brutal episodio debe orillarnos a repensar no sólo el papel que la violencia racista ha

jugado en la historia reciente de Sonora, sino también las trayectorias del colonialismo en este territorio que hoy llamamos México. Está claro, por un lado, que la experiencia sonorenses tiene todo para ser considerada un ejemplo más de la implantación del colonialismo de asentamientos que tomó forma en lugares como Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. La lógica del exterminio, el énfasis en el control de la tierra y la importancia del discurso racista ocupan un lugar central en esta historia y nos impiden separar las trayectorias contemporáneas de nuestro país de las de otras latitudes azotadas por el flagelo imperialista durante los siglos XIX y XX, como Australia, Sudáfrica, el oeste estadounidense y el sur de Argentina. Hacernos más conscientes del papel central que estas ideas y proyectos han desempeñado en el pasado reciente de México debe llevarnos a afirmar que el colonialismo en estas tierras no terminó con la Nueva España, sino que se extendió hacia el periodo denominado “nacional” por la historiografía oficialista. Como es evidente en el sur de Sonora, las trayectorias de la nación mexicana están marcadas por una violencia colonial similar a las del orden virreinal novohispano.

Antes de pasar al último trecho de nuestro relato es importante detenernos a pensar en la posibilidad de reconocer que lo sucedido en Sonora fue un auténtico proyecto genocida, una perspectiva poco usada en la historiografía mexicana. Son escasos los autores, casi siempre desde fuera de la academia –quizá el más famoso sea Paco Ignacio Taibo II–, que han usado el término “genocidio” para referirse a la guerra contra los *yoeme*. Es sorprendente, sobre todo si tomamos en cuenta que la historiografía estadounidense lleva décadas lidiando con las implicaciones que el uso de esta categoría tiene para la comprensión y socialización de la historia de sus sociedades y ha desarrollado novedosos y propositivos análisis en torno a las trayectorias de violencia ejercidas desde el siglo XVIII contra los pueblos indígenas de Norteamérica por parte de colonos blancos. Me parece que ya va siendo hora de que comencemos a pensar seriamente en la utilidad de recurrir a la categoría de genocidio para entender estas historias y sus implicaciones para el presente que habitamos.

Conviene, entonces, aclarar un par de cosas. Uno de los autores que con más énfasis ha defendido el uso del concepto “genocidio” para la revisión histórica de las relaciones interétnicas en Norteamérica es Benjamin Madley, en cuyo libro *An American Genocide. The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873*, de 2016, me baso para hacer las siguientes afirmaciones.

La palabra “genocidio” es un neologismo acuñado por el legista Raphael Lemkin en 1944 para referirse a la terrible violencia encabezada por el régimen nacionalsocialista alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En esencia, para Lemkin, el genocidio implica un proyecto que aspira a la destrucción de una nación o grupo étnico por medio del ataque a sus instituciones culturales, lingüísticas y religiosas, y a la seguridad, dignidad, libertad y vida de sus integrantes. En 1948, la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de la Organización de las Naciones Unidas lo definió como un conjunto de actos cometidos con la intención de destruir, por completo o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Según la Convención, distintos actos pueden ser considerados genocidas, entre otros, asesinar miembros de dicho grupo; causarles daños físicos o mentales graves; infligirles de manera deliberada condiciones de vida calculadas para producir su destrucción total o parcial; imponer medidas que prevengan su reproducción, y transferir por la fuerza a niños o integrantes de ese grupo a otra región o grupo social. En su tipología, la Convención establece que el genocidio se puede perseguir como un delito en sí, pero también la conspiración para cometerlo, la incitación, el intento y la complicidad en prácticas genocidas. Las causas para incurrir en estas acciones, se reconoce en este documento, pueden ser múltiples y no siempre tienen que ver con el deseo explícito de destruir una comunidad. Se puede, por ejemplo, incurrir en prácticas genocidas al pretender objetivos económicos, territoriales, políticos o ideológicos diversos. Sin embargo, en vista de la gravedad del resultado, los motivos que conducen a estas conductas son enteramente irrelevantes.

Como apunta Madley en su libro, no es anacrónico utilizar una categoría creada en la década de 1940 para analizar even-



tos del pasado. Después del somero panorama dado en páginas anteriores es evidente que muchas de las prácticas en las que se incurrieron durante la prolongada guerra de colonización del valle del Yaqui, la llamada Campaña del Yaqui y los excesos de finales del Porfiriato pueden fácilmente ser calificadas como genocidas. Autoridades, familias, comunidades y empresas reconocibles e identificables participaron de manera clara y documentada en la instrumentación, la incitación, el intento y la justificación de crímenes genocidas. El grupo ejecutor incluye miembros de respetadas familias y figuras históricas bien conocidas. En vista de todo eso, resulta imperativo tomarse en serio el uso de esta categoría, más allá de cualquier efectismo publicitario, y comenzar a incluirla en nuestros análisis académicos y públicos del pasado reciente y no tan reciente de nuestros territorios y nuestras sociedades, y reconocer, como han comenzado a hacerlo al norte de nuestra frontera y en otras regiones, como Oceanía, que el genocidio efectivamente ha jugado un papel importante en la integración nacional de México, la consolidación de sus élites y el éxito de sus sistemas de producción y acumulación de capital. Repensar las implicaciones de la historia colonial del valle del Yaqui es un buen primer paso para este urgente ejercicio.



Figura 2. Vista aérea de una zona de riego del río Yaqui. Fotografía de Casasola, 1950, Sonora, México, Colección Archivo Casasola. Fototeca Nacional, INAH, México

VII

EL VALLE CAMBIA DE FORMA

La mayoría de los recuentos históricos o periodísticos de la prolongada guerra del Yaqui se limitan a discutir las violentas trayectorias del siglo XIX y el clímax brutal de la década de 1900. Sin embargo, es importante seguir las pistas de esta historia en décadas posteriores y tratar de entender que la llamada guerra secular en el sur de Sonora no fue sólo un reflejo más del antiguo régimen porfirista. La caída de Porfirio Díaz y sus cómplices sonorenses no marcó el fin de la cruenta colonización del valle del Yaqui. Durante los años posteriores al estallido revolucionario, los yoeme que permanecieron en su territorio lo siguieron defendiendo del expansionismo yori, mientras que amplios sectores de la denominada gente de razón enarbolaba aún las viejas consignas genocidas. En los hechos, el Estado posrevolucionario remataría el largo proceso de colonización de la región y sellaría el despojo del pueblo yaqui.

Si bien el levantamiento revolucionario provocó un importante cambio en el régimen político de Sonora, sus efectos hicieron poco para desenraizar la visión racista y deshumanizante que sus élites tenían de los nativos. En todo el estado, vecinos, empresarios y autoridades que se consideraban de raza blanca continuaron marginando a los indígenas en la práctica y el discurso, excluyéndolos de la vida social y económica, vigilando sus movimientos y criminalizando sus actividades cotidianas. El ánimo bélico y la lógica del exterminio siguió dictando la vida de la sociedad sonorenses y las relaciones entre

yorim y yoeme. Al mismo tiempo, como resultado de la devastación y el trauma causados por la brutal ofensiva de 1908, durante muchos años los yaquis fueron incapaces de retomar sus viejas pautas de vida, sociabilidad y reproducción. Para finales del periodo revolucionario (1910-1920), Tórim, Vícam y Pótam se hallaban en ruinas, mientras que a Bácum y Cócorit arribaban más colonos fuereños que amenazaban con desplazar a la población originaria.

Por otro lado, la guerra contra los nativos siguió siendo un mecanismo para crear mayor cohesión entre distintos grupos no indígenas de la sociedad sonoreNSE y promover el fortalecimiento de las nuevas élites políticas del estado. Una de las principales figuras que alimentaría este antagonismo en los años venideros fue nada menos que Plutarco Elías Calles, quien llegó a la gobernatura de Sonora en 1915. Durante su gestión, hasta 1919, aprovechó este añejo conflicto para consolidar su control sobre la entidad y recabar fondos desmedidos para su administración. Poco después de iniciar su gobierno, el oriundo de Guaymas decretó la creación de un impuesto extraordinario destinado a financiar las actividades de vigilancia y dominio del pueblo yoeme. Como parte de esta iniciativa, el gobierno estatal recibió importantes cantidades de dinero de la comunidad china de Hermosillo, la Cámara de Comercio de esa ciudad y varias familias influyentes, como Pablovich, Izábal, Noriega, Almada, Gaxiola y Valenzuela. Más allá de las contribuciones de la sociedad civil local, una vez más se buscó el apoyo de la federación para sostener la guerra contra los indígenas. En 1917, Elías Calles apeló a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para pedir fondos federales para formar una fuerza de seguridad pública integrada por 2 000 efectivos que se dedicarían exclusivamente a lidiar con la llamada sublevación yaqui y asegurar la prosperidad de la región “quizá más rica y productiva del Estado”. El gobernador también recurrió a la supuesta amenaza yoeme para ampliar sus atribuciones legales y amasar cada vez más poder. En junio de 1918, su gobierno expidió una ley que le otorgaba facultades extraordinarias en los ramos de Hacienda y Guerra, lo que en efecto le permitía gestionar discrecionalmente grandes canti-

dades de recursos y dirigir a su conveniencia la actuación de la fuerza pública. En el contexto de inestabilidad nacional y lucha a muerte por el poder federal, el argumento del combate a los yaquis hacía posible el fortalecimiento considerable del grupo de los sonorenses, integrado por Plutarco y su mentor político Álvaro Obregón, que a la postre definiría el rumbo de la política posrevolucionaria. Entre los mandos militares enviados a la región para continuar con la supuesta pacificación de los nativos en aquellos años estaba el joven general Lázaro Cárdenas, quien más tarde volvería a jugar un papel importante en la historia del conflicto yoeme.

Con el restablecimiento de la estabilidad nacional en 1920, se abrió nuevamente la posibilidad de avanzar con la ocupación y la expansión de la agricultura en las tierras del valle. Durante los primeros años de la década, la producción de cultivos como el azúcar, el garbanzo, el jitomate, el trigo y el arroz comenzó a crecer en la región avivando el sueño añejo de la prosperidad del Nilo de Sonora. A diferencia de lo que había sucedido en épocas anteriores, en aquellos años el estado ya no ocupaba un lugar marginal en el entramado de poder del régimen mexicano. La presencia de Obregón y Elías Calles al frente del nuevo Estado posrevolucionario hizo que el desarrollo de la entidad dejara de ser una preocupación secundaria para ser una prioridad del nuevo gobierno. Esto fue resultado de políticas desarrollistas concretas y del compromiso personal de ambos caudillos. En 1924, tras dejar la presidencia, Obregón se asentó en Navojoa, la población más importante del valle del Mayo, a pocos kilómetros del valle del Yaqui, decidido a impulsar el desarrollo agroindustrial del sur de Sonora, lo que dio inicio a un mayor involucramiento de las altas esferas del régimen posrevolucionario en la región. Como veremos a continuación, esto permitió el comienzo de una fase crítica en la colonización de la planicie, que culminaría no sólo con el despojo definitivo del pueblo yoeme, sino con la transformación absoluta e irrevocable del espacio que hasta entonces había sido su hogar.

La creciente implicación oficial y la estabilidad política posrevolucionaria, aceleraron el proceso de desarrollo agrí-

cola del valle del Yaqui. Como sucedió en otros sitios, como el valle de Mexicali, la región yoeme comenzó a atraer importantes inversiones de capital que sirvieron para financiar la creación de una red de caminos, telégrafos y líneas telefónicas, así como la adquisición de modernas instalaciones de refrigeración, empaquetamiento y procesamiento de productos agrícolas. En pocos años, esto condujo a un aumento sustancial de las condiciones salariales y de vida de los trabajadores campesinos, lo que captó una cantidad cada vez mayor de peones provenientes de otras zonas del país. En la fértil llanura estaba tomando forma una sociedad nueva, marcada por la acumulación de tierras, el crecimiento demográfico y la proletarización de grandes números de jornaleros inmigrantes. El incremento de la población del valle y la producción agrícola empeoró la situación de los yoeme. La necesidad en aumento de agua en los amplios campos del sur del río Yaqui llevó al acaparamiento del líquido, que cada vez era menos en los poblados y terrenos del norte que rodeaban los viejos pueblos indígenas. Como veremos a continuación, esta situación avivaría de nuevo la llama de la insurrección en la comarca.

Para gran parte de este crecimiento el agua fue canalizada en redes creadas por la Compañía Constructora Richardson en años anteriores. A diferencia de figuras vinculadas al triunvirato, caídas en desgracia después de 1910, la empresa sobrevivió a la Revolución y consolidó su posición en el sur de Sonora. En 1911, sus accionistas llegaron a un acuerdo con el nuevo gobierno de Francisco I. Madero para continuar con su proyecto de colonización por un periodo de 15 años. En 1926, la firma se comprometía a completar la irrigación de todas las tierras agrícolas de la región y establecer un sistema de 550 kilómetros de canales, 816 compuertas y bocatomas, más de 600 kilómetros de caminos y alrededor de 150 puentes que conectarían todos los rincones del valle. Esto equivalía nada menos que a una transformación profunda del espacio yoeme, plan que siguió generando una importante movilización por parte de los indígenas, cuyas constantes acciones de resistencia dificultaron el avance de las obras durante los próximos años. Sin embargo, en los hechos, en 1925 la Richardson era dueña de



importantes porciones de la codiciada llanura. Según un informe de julio de aquel año, redactado por el ingeniero Felipe de Jesús Sánchez, resguardado en el Archivo Nacional del Agua, la compañía poseía 80% de las tierras del valle, otros dueños particulares tenían 10% y la llamada tribu yaqui conservaba apenas 0.5%, equivalente a unas 1 500 hectáreas. Después de décadas de guerra y agresiones, los nativos finalmente habían sido despojados de su territorio.

El año de 1926 es un parteaguas en la historia del valle del Yaqui. Desde finales del periodo revolucionario, la trayectoria de la Richardson había sido observada con gran detenimiento e interés por Elías Calles y Obregón. Durante la década de 1920, este último, originario de Navojoa, había invertido importantes cantidades de dinero en el sur de Sonora hasta convertirse en uno de los principales promotores de la agroindustria. Como parte de su intención por beneficiarse del desarrollo de la región, en 1926 cabildeó para que el gobierno mexicano, por medio del recién creado Banco Nacional del Crédito Agrícola y Ganadero, adquiriera la mayoría de las acciones de la Compañía Constructora Richardson, efectivamente nacionalizando gran parte de las tierras del valle del Yaqui. Aprovechando el trato, Obregón se hizo acreedor de una considerable porción de estas acciones, fortaleciendo su posición como uno de los más importantes terratenientes y empresarios del sur del estado. En los siguientes años, el ex presidente también emergería como uno de los principales empresarios locales, al constituirse como líder de la Unión de Garbanceros y director del Banco Reaccionario de Occidente, que reunió comerciantes y productores de Sonora y Sinaloa, incluyendo personajes como Tomás Robinson Bours Jr., Crispín Palomares e Ignacio Gaxiola.

Esta maniobra del régimen posrevolucionario tuvo profundas implicaciones para el futuro del valle. Durante 1925, reunida bajo el liderazgo de Francisco Pluma Blanca, la comunidad yoeme dirigió al gobierno federal una serie de peticiones para exigir la restitución de tierras y el acceso al agua que fueron ignoradas olímpicamente por las autoridades de la Ciudad de México. Como resultado, la compra de las acciones de la Richardson por parte del gobierno en 1926 estuvo acompañada

de una nueva escalada de violencia en la región. En septiembre, en la estación de tren de Vícam, un grupo de alrededor de 1 000 yaquis tomó como rehén a Obregón, que viajaba en compañía de 150 soldados del ejército mexicano. En una muestra excepcional de rebeldía, los indígenas lo mantuvieron preso por dos días, al término de los cuales el ex presidente huyó del valle del Yaqui, llevándose consigo un fuerte rencor por la humillación de la que había sido sujeto. Pocos meses después, el gobierno federal mandó un contingente de 20 000 tropas, que atacaron nuevamente los poblados yoeme sin miramientos, repitiendo la lógica de las antiguas agresiones. En posesión de armamento más sofisticado que las fuerzas porfiristas, el ejército mexicano llevó a cabo una campaña de bombardeo de la Sierra del Bacatete e impulsó una nueva oleada de deportaciones en la que casi 1 000 nativos, incluyendo mujeres y niños, fueron transportados a distintos sitios del país bajo la supervisión del gobernador Román Yocupicio. Esta salvaje ofensiva, ocurrida casi veinte años después de la campaña genocida de 1908, volvió a dejar patente el desprecio de las autoridades sonorenses por los pueblos originarios.

La respuesta oficial al alzamiento de 1926 no sería sólo militar. A petición del mismo Obregón, ese año también se comenzó a dar forma a la traza de un nuevo asentamiento emplazado en un sitio llamado Estación Cajeme, en el extremo nororiental del valle del Yaqui. Alrededor de un viejo centro de operaciones del Ferrocarril Sud Pacífico, empezó a modelarse un proyecto de urbanización pensado para hospedar al creciente número de colonos que se esperaba se establecieran en la región en años próximos. El 28 de julio de 1928, apenas diez días después del asesinato del ex presidente sonorense, este poblado fue bautizado como Ciudad Obregón y pronto se convertiría en la cabecera del nuevo municipio de Cajeme. Como ha señalado Luis Aboites, descartar el apellido del líder yoeme José María Cajeme y elegir el del viejo cacique y empresario dejaba en claro el triunfo de una nueva visión para el futuro del valle del Yaqui, definida por el impulso a la agroindustria, en la que los indígenas serían invisibilizados y silenciados. La localidad tuvo una trayectoria meteórica en

los años siguientes: pasó de 237 habitantes cuando era la Estación Cajeme en 1921, a 10 000 en 1930 en la nueva urbe. Veinte años después, la planicie hospedaba a más de 60 000 personas y este asentamiento se había consolidado como el centro de la transformación socioeconómica de una vasta región que se extendía desde las costas de Guaymas hasta los valles del norte de Sinaloa. En poco tiempo, la ciudad se convirtió en el epicentro de uno de los procesos de desarrollo urbano más notables de la historia de México, alimentado por la creación de innumerables empresas productivas, comercializadoras y de transporte enfocadas en la agricultura, así como por la llegada de miles de trabajadores, administradores y profesionistas de otras zonas del país y el extranjero. Al mismo tiempo, como ha señalado Mario Cerutti, esta urbe se erigió como el nodo principal de un entramado de pueblos y ciudades pequeñas dedicadas a la agroindustria que se extiende desde el centro de Sonora hasta el norte de Sinaloa, e incluye poblados como Huatabampo, Los Mochis, Guasave y Navojoa. Construida siguiendo un ideal funcional similar al de las metrópolis estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX, Ciudad Obregón creció a partir de una traza cuadriculada delineada por amplias vialidades, espacios públicos inexistentes en otras localidades de la entidad y hasta una enorme laguna artificial alimentada con agua desviada del generoso río Yaqui. Pocos años después de la muerte del general que le había dado nombre, la ciudad se mostraba como el símbolo de un modelo de desarrollo regional único en la historia reciente de México. De contar con apenas algunas decenas de habitantes a mediados de la década de 1920, hoy tiene una población de casi medio millón de personas, en la que los yoeme son una ínfima minoría.



Figura 3. Soldados federales sepultan a indígenas yaquis después de un combate.
Fotografía de Casasola, circa 1926, Sonora, México, Colección Archivo Casasola.
Fototeca Nacional, INAH, México

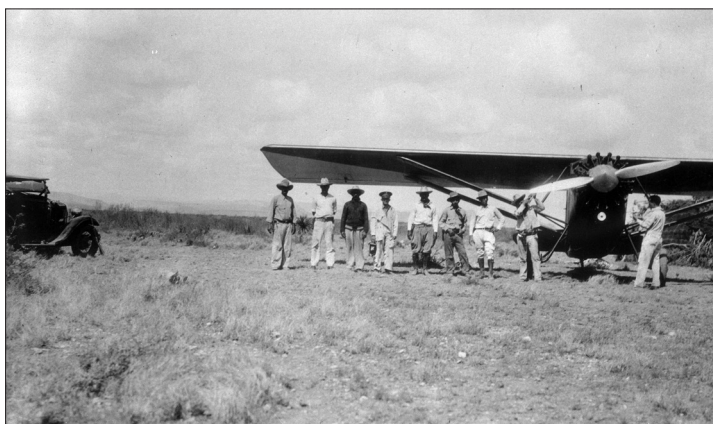


Figura 4. Militares junto a uno de los aeroplanos con que combatieron a los yaquis.
Fotografía de Casasola, circa 1926, Sonora, México, Colección Archivo Casasola.
Fototeca Nacional, INAH, México



El despliegue urbano de Ciudad Obregón y la expansión de las industrias relacionadas con la agricultura en el valle encauzaron una nueva era de estabilidad marcada por la reducción de los enfrentamientos entre yorim y yoeme, así como la neutralización de la resistencia de estos últimos. A partir de 1929, los efectos transnacionales de la Gran Depresión hicieron que un número importante de trabajadores mexicanos se viera obligado a cruzar la frontera hacia el sur y buscar opciones laborales en México. Muchos de ellos viajaron al valle del Yaqui para beneficiarse del auge agroindustrial y urbano de la región. Esto acabó de inclinar la balanza a favor de las poblaciones yorim de la planicie, que combinaban un reducido y selecto grupo de “pioneros” provenientes de otras partes de México y el extranjero, con una masa creciente de trabajadores que mes con mes llegaba con miras a insertarse en la floreciente economía de la zona. En la década de 1930, numerosos yaquis que habían sido deportados a Yucatán y se habían exiliado voluntariamente en otras localidades de México y Estados Unidos para escapar de la violencia, comenzaron a volver al valle con la intención de reconstruir sus viejas redes comunitarias. Sin embargo, era demasiado tarde. La privatización de las tierras se había consolidado y se había sellado un fuerte pacto entre el gobierno posrevolucionario y los intereses privados de un número cada vez mayor de terratenientes y empresarios agrícolas provenientes de otras partes de México y el mundo.

El modelo de desarrollo agroindustrial instaurado en el valle del Yaqui a finales de la década de 1920 rápidamente generó una situación marcada por la desigualdad extrema y el acaparamiento de tierras. Entre 1929 y 1935, dos gobernadores con vínculos de sangre con el Jefe Máximo, Elías Calles, renegaron de los ideales agraristas de la Revolución e impulsaron la acumulación de riqueza y territorio en pocas manos. Para mediados de la década de 1930, 90% de la población en Sonora no poseía tierras, mientras que 90% de los campos productivos se encontraba en poder de algunas decenas de grandes terratenientes, muchos de ellos de origen estadounidense. El proyecto de colonización de largo aliento no había desembocado en la creación de una sociedad de empresarios



Figura 5. Mujeres y niños yaquis hechos prisioneros en Mabampo, Sonora.
 Fotografía de Casasola, circa 1926, Sonora, México, Colección Archivo Casasola.
 Fototeca Nacional, INAH, México

emprendedores, sino en una réplica de las condiciones que habían llevado al estallido revolucionario de 1910.

La llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, en 1934, representó un cambio profundo en la situación del valle del Yaqui, como en muchas otras regiones del país. Bajo su mandato se dio inicio a un amplio proceso de reforma agraria que acabaría por cumplir uno de los anhelos más caros de la Revolución: el reparto de tierras entre los trabajadores agrícolas. Por un lado, Cárdenas utilizó la reforma agraria para debilitar a los seguidores locales de Elías Calles y consolidar su control político del noroeste con el apoyo a distintos grupos agraristas formados en años recientes. Por el otro, buscó utilizar la entrega de tierras para fortalecer la simpatía hacia el régimen entre sectores populares y campesinos de aquella cada vez más importante región del noroeste. Por primera ocasión en la historia de México, Cárdenas tomó en cuenta las exigencias y necesidades de los yoeme. Para el presidente, gran parte de la superficie del valle era, por derecho, patrimonio ancestral los indígenas, incluyendo no sólo los terrenos de los tradicionales ocho pueblos sino también el sitio en el que se había erigido la flamante Ciudad Obregón. Después de un par de años de apro-

ximaciones, negociaciones y estudios, en octubre de 1937 se publicó un acuerdo presidencial que estipulaba, como parte de la creación de distintos ejidos colectivos, la entrega de casi medio millón de hectáreas de tierra agrícola a la comunidad yaqui, y un programa de apoyos políticos y económicos para la población originaria del valle, que contemplaban la entrega de cabezas de ganado, herramientas, tractores, fertilizantes, así como la concesión de la mitad del agua proveniente de la presa La Angostura, cuya inauguración estaba proyectada para 1940. Al mismo tiempo se promovió la construcción de escuelas de la Secretaría de Educación Pública e instalaciones educativas administradas por el Departamento de Asuntos Indígenas en las zonas yoeme.

A pesar de ser concebida para asegurar una forma limitada de autonomía política para el pueblo nativo, esta iniciativa cardenista representó una concesión ambigua. Si bien les otorgaba control sobre una pequeña parte de territorio, incluyendo buena parte de las tierras que rodeaban los antiguos ocho asentamientos, el decreto no hacía nada para limitar al avance de la colonización en el resto del valle. Al contrario, durante los años siguientes el gobierno de Cárdenas promovió activamente la expansión de los cultivos comerciales en la región y, como veremos a continuación, dio inicio a la creación de una prodigiosa infraestructura hidráulica que acabaría de transformar el espacio del sur del estado. En décadas posteriores, los yoeme no sólo se verían excluidos de las dinámicas de desarrollo de su ancestral valle. Con el éxito de la agricultura tecnificada perderían incluso su antiguo prestigio como hábiles e incansables trabajadores, quedando marginados también del espectacular éxito económico de la región en los momentos álgidos del llamado milagro mexicano. Después de un siglo de resistencia, la derrota del pueblo yaqui no llegó por la vía de las armas, sino como un efecto colateral del triunfo agroindustrial del sur de Sonora.

PARTE III

EL PASADO RECIENTE

VIII

DE VUELTA AL MUNDO

A partir del final del periodo revolucionario, el valle del Yaqui se convirtió en una de las regiones más beneficiadas por la inversión de gasto público en México. Los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles inauguraron esta tendencia al respaldar la compra oficial de las acciones de la Compañía Constructora Richardson, la urbanización de Ciudad Obregón y el denominado por distintos historiadores como un auténtico programa de irrigación revolucionaria basado en el despliegue de gigantescas presas y un sistema de canales sin comparación en otras latitudes de México. A finales de la década de 1930, Lázaro Cárdenas inició la construcción de la presa La Angostura en el norte de Sonora, un proyecto ideado durante la administración de Elías Calles para aprovechar las aguas del río Bavispe, uno de los principales afluentes del río Yaqui. Una década y media después, en 1952, entró en funcionamiento la presa Oviáchic a poca distancia de Ciudad Obregón. Estas dos obras azuzaron el entusiasmo de las élites sonorenses quienes veían en ellas la posibilidad de consolidar “la unidad agrícola más grande de América” en el sur del estado, como declaraba un editorial del periódico *El Imparcial*, citado por Dora Elvia Enríquez y Gustavo Lorenzana. Este proceso de edificación de infraestructura hídrica sin paralelo en otras zonas del país fue rematado en 1965 con la construcción de la presa El Novillo, situada entre Mazatán y Sahuaripa, que utilizaría las abundantes aguas del río Yaqui para generar energía eléctrica,



Figura 6. Trilladoras descargando trigo en un camión, en un campo de cultivo de Ciudad Obregón. Fotografía de Casasola, *circa* 1926, Cajeme, Sonora, México, Colección Archivo Casasola. Fototeca Nacional, INAH, México

que sería distribuida por todo Sonora. En conjunto, estas magnas obras ejecutadas con una enorme inversión pública –que según cálculos informados llegó a rondar entre 8 y 14% del presupuesto federal total de algunos años– posibilitaron la creación de un vasto distrito de riego conformado por millones de hectáreas en el valle del Yaqui y la consolidación de la red de servicios productivos de la región.

Al mismo tiempo, se fortaleció enormemente el financiamiento público para dotar de comunicaciones el territorio yaqui. Si bien a principios de la década de 1940 casi no existían caminos asfaltados, para inicios de la década de 1960 la llanura contaba con más de 200 kilómetros de carreteras. De acuerdo con datos recabados por Cynthia Hewitt de Alcántara, el presupuesto federal anual para la construcción de vías

férreas en la comarca llegó a promediarse en hasta 600 millones de pesos, una cifra muy superior a la destinada al desarrollo de otros estados de la república. Como han señalado distintos autores, este proceso fue único en la historia del país y benefició al sur de Sonora a costa del desarrollo de otras regiones de México donde la presencia de fondos del gobierno no llegó a ser ni una fracción de lo que se destinaba a la transformación del valle del Yaqui; además, alteró profundamente el paisaje natural de la planicie e impactó el flujo ancestral del Nilo de Sonora, atrajo a miles de colonos y cimentó el espectacular éxito de nuevos grupos empresariales que, a pesar de la mitología individualista y de emprendimiento financiada por sus herederos, recogieron los frutos del vasto emporio agrícola creado al amparo de la política y gracias al impulso del dinero público.

Con el final del Cardenismo, el valle del Yaqui se convirtió en una región prioritaria para el gobierno federal. Desde el arranque de su gestión, Manuel Ávila Camacho (1940-1946) dejó en claro su intención de fortalecer la actividad rural de México para que sirviera como palanca para el despegue de la anhelada modernización industrial y la consolidación del sector manufacturero. Esto marcó el inicio de un largo periodo de alza sostenida de la producción agrícola en México, que creció a una tasa anual promedio de casi 7% entre 1940 y 1958. La reforma agraria, el respaldo de la inversión pública y la coyuntura internacional, marcada por el aumento en la demanda global de materias primas y alimentos causado por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y sus efectos durante la década de 1950, enmarcaron un momento de apogeo en el desarrollo nacional y el sector agrario en particular. En las décadas intermedias del pasado siglo xx se consolidó un fértil entramado agroindustrial en el sur de Sonora, en cuyo centro se hallaban las fértiles tierras del valle del Yaqui, que se erigió como una de las regiones productoras de cereales más importantes del país y uno de los pilares más sólidos del llamado milagro mexicano.

Sobre las bases de la larga guerra de colonización del Yaqui, estos acontecimientos cimentaron la creación de una sociedad de frontera exitosa y de indudables logros socioeconómicos. Para finales de la década de 1960, la planicie formaba parte de

una de las zonas más prósperas del continente, enquistada en un país que permanecía eminentemente pobre y se tornaba cada vez más desigual. Durante los veinte años anteriores, la población de Ciudad Obregón y el valle del Yaqui había crecido de manera sostenida y gracias al auge agroindustrial se vivió una experiencia de movilidad social única en México y excepcional en el contexto latinoamericano y tercermundista de la época. Los resultados innegablemente positivos en términos de indicadores económicos arrojados por la expansiva explotación del campo parecían validar la experiencia histórica del régimen posrevolucionario, cuyo prestigio por aquel entonces comenzaba a resquebrajarse en otras regiones menos favorecidas por el gasto público y el capital privado, como Guerrero, Morelos y Chihuahua. En palabras de Luis Aboites, en ese momento el valle del Yaqui representaba “la joya de la corona del Estado posrevolucionario”. En ningún otro lugar del país, afirma este historiador, se había “invertido tanto empeño y dinero para salirse con la suya, es decir, para formar una próspera zona agrícola de riego en manos de un grupo de poderosos productores agrícolas privados igualmente prósperos”.

Sin embargo, en la década de 1970 resultaba evidente que los frutos de esta abundancia no estaban siendo distribuidos de manera equitativa ni justa. El número de beneficiarios de la bonanza agroindustrial financiada con dinero público y asentada sobre décadas de violencia y despojo no era muy elevado. Menos de 2 000 familias concentraban gran parte de esta riqueza, entre ellas los descendientes de colonos que habían participado en la guerra de tiempos anteriores, como Bours, Obregón, Almada, Valenzuela y Araiza, y nuevos linajes cuyas fortunas se engrosaron a partir de la década de 1930, como Esquer, Astiazarán, Mexía, Bórquez, Parada y Robinson. Para rematar, durante la segunda mitad del siglo xx, la región comenzó a recibir el flujo creciente de jornaleros migrantes provenientes de los lugares más pobres del centro, sur y sureste del país, en donde el modelo desarrollista del “milagro”, lejos de crear prosperidad y movilidad social, había redondeado el abandono y estancamiento. Incluso en eso los herederos de la colonización del valle salieron favorecidos.

Lejos de reconocer su deuda con el Estado –decimonónico, porfirista y posrevolucionario–, los líderes de este conjunto de empresarios alimentaron una narrativa épica de perseverancia, esfuerzo y sacrificio para explicar los orígenes de su enorme riqueza. Los nuevos dueños del valle del Yaqui se concebían como pioneros heroicos que habían logrado “vencer al desierto” y, en un eco de la mitología del *west* estadounidense, traer la civilización a una tierra salvaje y agreste. En estos relatos, la guerra secular contra el pueblo yoeme aparecía como un episodio de importancia menor, un estorbo en una historia que buscaba glorificar a los principales miembros de aquella naciente sociedad definida por el éxito capitalista, el control del territorio y la ilusión del triunfo individual. Hasta la fecha, gran parte de los habitantes de Sonora, los historiadores de la región y la mayoría de los observadores externos dan por válida esta narrativa sesgada y falaz que ensombrece la violencia, el despojo y la crueldad que explican la prosperidad reciente de las élites del valle del Yaqui. Más allá de los apologistas del regionalismo sonorense, esta visión parcial tampoco ha sido puesta en tela de juicio por la mayoría de los historiadores económicos, políticos o culturales del noroeste, en cuyas obras rara vez se vincula la gloria agroindustrial de la llanura con las trayectorias de expolio, racismo y colonización encabezadas por agentes mexicanos desde hace 200 años.

Además de sus ramificaciones para la historia nacional, durante las décadas intermedias del siglo XX la consolidación de la explotación de la tierra en la comarca del Yaqui también se asoció a procesos de intercambio y negociación científica, política y económica de impactos transcontinentales. A principios de la década de 1940, tuvo lugar una relación diplomática y de investigación que daría otro giro a la historia del valle del Yaqui y la vincularía de nuevo con corrientes de cambio de repercusiones globales. En 1941, un grupo de expertos estadounidenses financiados por la Fundación Rockefeller visitó las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo, Estado de México. Su intención era sentar las bases para un programa de cooperación e intercambio académico y científico que facilitara la transmisión de técnicas novedosas de cultivo,



fertilización y comercialización agrícola desarrolladas en Estados Unidos, que permitían un incremento considerable en la producción final de alimentos y la acumulación de riqueza generada por la agroindustria. Durante los siguientes meses, los extranjeros viajaron a distintos rincones de la república con permiso y apoyo del gobierno mexicano, hicieron numerosos estudios de suelos, cultivos y cosechas, y establecieron vínculos con sectores científicos y productivos de regiones y localidades agrarias. Esta visita sembró la semilla de un proceso de diálogo y negociación que en 1943 condujo a la creación de la Oficina de Estudios Especiales (OEE), un centro enfocado en el estudio de técnicas agrícolas, ligado a la Escuela Nacional de Agricultura y financiado por la autoridad mexicana y la Fundación Rockefeller.

Este episodio, que se ha vuelto recurrente en los recuentos históricos y hagiográficos de la Revolución Verde, debe ser enmarcado en el contexto más amplio del acercamiento entre los gobiernos de los dos países en los años de la Segunda Guerra Mundial. Presionado por las exigencias del conflicto bélico transcontinental, Estados Unidos buscó consolidar su esfera de influencia en América, estrategia para la cual el fomento de relaciones de cooperación e intercambio con México resultaba una prioridad. Esto implicaba zanjar viejas disputas, como las causadas por la nacionalización del petróleo, decretada en 1938, y crear nuevas áreas de colaboración. Como parte de este acercamiento, en 1940, el vicepresidente estadounidense Henry Wallace, quien se había desempeñado como secretario de Agricultura, estuvo presente en la toma de protesta de Ávila Camacho. Durante su estancia, aprovechó para tantear las aguas respecto a la posibilidad de incrementar el involucramiento público y estatal de su país en el sector de la producción agrícola en México. Dada la creciente demanda de alimentos y materias, como el caucho y los cereales, creada por la guerra, los estadounidenses estaban ansiosos por garantizar el suministro de materias primas baratas, seguras y de calidad. A su regreso, Wallace recurrió a Nelson Rockefeller para comenzar a dar forma a un plan de colaboración e intervencionismo que

impactaría profundamente la historia del valle del Yaqui, de México, y del Tercer Mundo en su conjunto.

Desde un inicio, el objetivo de la OEE fue contribuir a la modernización de la agricultura mexicana siguiendo pautas científicas y comerciales desarrolladas al norte de la frontera. Se enfocó en el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo, fertilización y cosecha de cereales, en especial maíz y trigo. Estas iniciativas dieron paso a la consolidación de la colaboración entre la Rockefeller y el gobierno federal, que se selló con la creación del Programa Agrícola Mexicano (PAM), en 1943, que serviría de plataforma para el desarrollo de modelos productivos en distintas regiones del país, llegando a ser un ejemplo de colaboración internacional pionero en el mundo, que colocaría a México firmemente en la esfera de influencia y acción estadounidense. Un año más tarde, Norman Borlaug, patólogo formado en la Universidad de Minnesota, llegó para hacerse cargo del programa de trigo de la OEE y fortalecer el impulso del flamante PAM. Muy pronto, y con una intuición que resultaría visionaria, Borlaug dirigió la mirada hacia el lejano valle del Yaqui, que se le aparecía al científico como la zona más prometedora para la siembra de trigo en México. En aquel momento, este cereal representaba un producto secundario en el sur de Sonora, opacado por otros como el arroz, y sus cosechas no eran muy abundantes, con rendimientos apenas menores a una tonelada de grano por hectárea sembrada. Decidido a respaldar la modernización de este cultivo, Borlaug se trasladó a Ciudad Obregón desde donde encabezaría durante los siguientes lustros un proceso intensivo de experimentación dirigido al mejoramiento del trigo, que tendría repercusiones internacionales de gran calado. El primer paso fue identificar y combatir las plagas que afectaban al cereal en la región, en especial la famosa roya de tallo, que limitaba seriamente las cosechas. Más tarde, se empeñó en introducir distintos tipos de fertilizantes químicos que funcionaran en las condiciones de la planicie y fomentar la siembra de nuevas variedades de trigos enanos de alto rendimiento. Perfeccionadas para adaptarse al suelo y las condiciones climáticas del sur de Sonora, estas variedades –bautizadas como trigo Sonora, trigo Mayo o tri-

go Yaqui– permitieron un alza significativa en la producción, hasta que México se convirtió, en 1956, en el primer país del Tercer Mundo en cubrir su consumo de aquel cereal enteramente con cultivos nacionales. Como resultado de este proceso de colaboración científica, México aparecía como un modelo exitoso de desarrollo agroindustrial en un planeta en el que el hambre y la sobrepoblación comenzaban a ser preocupaciones prioritarias para los gobiernos de los países pobres de Asia, África y Latinoamérica.

Desde un inicio, los frutos sorprendentes del trabajo desarrollado por Borlaug y su equipo en las estaciones experimentales de Ciudad Obregón atrajo la atención de un número creciente de empresarios agrícolas de la zona. Para mediados de la década de 1950, la hábil gestión del estadounidense logró que distintos productores y compañías privadas se involucraran activamente en el financiamiento de sus actividades científicas, lo que complementó los fondos provenientes de la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano para dar un importante impulso a su labor y su equipo binacional. Esta sinergia marcó el comienzo de una tradición de investigación en cultivos en el corazón del noroeste que, una vez más, era única en el país. En 1955, Ciudad Obregón se convirtió en la sede del nuevo Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste (CIANO), una institución respaldada por la Fundación Rockefeller, la presidencia de México y el dirigente estatal Rodolfo Elías Calles, heredero del legado político de Plutarco. Bajo el liderazgo de Borlaug, quien se mudó a la ciudad y se convertiría en uno de sus habitantes más ilustres, el CIANO se erigió como el complemento científico del programa de irrigación antes descrito y el proyecto de larga duración de colonización del valle del Yaqui para alcanzar el sueño modernista de las élites mexicanas que deseaban convertir a Sonora en el granero de la república.

La presencia estadounidense en México y los tratos entre los gobiernos y la Fundación Rockefeller obedecían a una nueva lógica de intervencionismo moldeada por las compulsiones del conflicto geopolítico global de la Guerra Fría. A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, las agencias internacionales



de los Estados Unidos extendieron sus actividades a distintas regiones del planeta con las que buscaban contener el avance del comunismo. En la creciente arena del Tercer Mundo, conformada por los países y sociedades que durante las décadas de 1950 y 1960 tomaban forma tras la descolonización de amplias franjas de Asia y África, antes controladas por las potencias imperialistas europeas, una de las mayores preocupaciones de esta nación norteamericana era que los bajos niveles de vida de la población hicieran más atractivo el prospecto de abrazar el comunismo, sobre todo a la luz de los innegables logros en materia social de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en décadas recientes. Para muchos burócratas y oficiales estadounidenses, la clave para combatir el comunismo pasaba por declarar “una guerra contra el hambre” que permitiera elevar los niveles de vida de la población del Tercer Mundo. Para esto, las autoridades de aquel país dieron forma a una agenda intervencionista global definida por la idea del desarrollo, un lema que se convertiría en la piedra de toque de innumerables programas políticos, económicos y sociales marcados por la lógica contenciosa de la Guerra Fría. Los avances de la OEE y el auge de la producción de trigo en el valle del Yaqui constituían un incuestionable triunfo para esta maniobra internacional pues demostraban la capacidad del intervencionismo científico y la colaboración gubernamental para atajar el problema del hambre en un país pobre, como México. Así, el éxito agroindustrial se convirtió no sólo en un patrón a imitar para distintas naciones del Tercer Mundo, sino también en la muestra palpable de los aciertos de la agenda desarrollista de Estados Unidos.

Todo esto hizo que el “modelo Sonora” se exportara a otras regiones llamadas subdesarrolladas en aquellas décadas álgidas de la Guerra Fría. El primer país del Tercer Mundo en el que el impacto de la prosperidad sonoreNSE tuvo repercusiones importantes fue India. A partir de su independencia, en 1947, la República de la India había convertido la producción de alimentos en una de sus prioridades. Trágicamente acos-tumbrada a las hambrunas artificiales gestadas por el modelo de explotación colonial británico durante los siglos XIX y XX, la sociedad conocía el poder devastador del hambre y los nue-

vos gobernantes del Partido del Congreso pronto se dieron a la tarea de buscar soluciones para alimentar a su creciente población, que por aquel entonces rondaba los 360 millones de personas. Comenzando en 1951, colaboradores de la OEE y miembros de la Fundación Rockefeller hicieron varios viajes al subcontinente asiático para establecer contacto con científicos, autoridades y empresarios locales, y promover los resultados y estrategias del PAM. Durante los siguientes años se siguió tejiendo un diálogo entre agentes de los tres países, que fue coronado con la visita del propio Borlaug a India, en 1963. Como parte de sus actividades, el patólogo gestionó el envío de varios kilos de semillas experimentales de trigo desarrolladas en el CIANO. Este primer intercambio, acordado por autoridades indias, estadounidenses y mexicanas, fue completado en años posteriores con el despacho de paquetes de otras variedades de trigo Sonora al subcontinente indio, sembradas en amplias franjas agrícolas de regiones como el Punjab y Gujarat. Tres años más tarde, la devastadora hambruna de Bihar, que entre 1966 y 1967 sacudió el norte del país causando la muerte de miles de personas, obligaría al gobierno a recurrir una vez más a la Fundación Rockefeller. En el verano de 1966, esta agencia organizó el traslado de un enorme cargamento de 18 000 toneladas de semillas de trigo híbrido desarrolladas en Sonora hacia el subcontinente indio. En el centro de las gestiones para este envío transcontinental estuvo el propio Borlaug, quien supervisó la expedición de las semillas desde Ciudad Obregón hasta el puerto de Guaymas, donde la carga zarpó en dirección al puerto de Kandla, en la costa occidental de India. Este intercambio entre autoridades de los tres países y distintos agentes de la Fundación Rockefeller es ampliamente reconocido como el comienzo de la internacionalización de la llamada Revolución Verde, un complejo proceso de transferencia de tecnología agrícola que transformaría la producción de alimentos en amplias áreas del planeta en los siguientes años.

En la arena mundial, el éxito de la expansión del cultivo del trigo en el valle del Yaqui serviría durante los próximos años como ejemplo e inspiración para la creación de programas paralelos al PAM e instituciones vinculadas a la OEE en



países como India, Paquistán, Kenia y Filipinas. Para finales de la década de 1960, el sur de Sonora se había convertido en el núcleo que irradiaba la promesa transcontinental de la llamada Revolución Verde, un proyecto en el que se entretrejían los anhelos desarrollistas del régimen priista, el sueño de la modernización para el Tercer Mundo y varias agendas de pugna ideológica, científica y comercial promovidas por la confrontación geopolítica global de la Guerra Fría. Después de décadas de inestabilidad y conflicto, la sociedad colonial del valle del Yaqui parecía encontrar su justificación en medio de estas corrientes de cambio transcontinentales.

Sin embargo, durante la década de 1970, una nueva crisis sacudió el sur de Sonora colocándola otra vez en el centro de la vida política nacional. Para entonces, los ingresos de la antes próspera economía agroindustrial habían comenzado a decaer al mismo tiempo que la desigualdad económica de la región y de toda la franja productiva del noroeste comenzaba a generar importantes tensiones entre distintos grupos de agricultores, empresarios y trabajadores del campo. Como es bien sabido, aunque poco comprendido en términos históricos, en 1976 esta situación de confrontación alcanzó un punto de máxima tensión cuando el gobierno federal decretó la expropiación de 75 000 hectáreas en la comarca, que equivalían aproximadamente a 11% de los terrenos privados de los valles del Yaqui y el Mayo. Esta medida, que en palabras de Luis Aboites marca el inicio del fin de la reforma agraria, y otras tomadas durante la gestión de Luis Echeverría alimentaron la creciente politización de la clase empresarial de la región, que pronto estrecharía sus lazos con sus pares en otras latitudes mexicanas para promover, en la década de 1980, una nueva forma de política vinculada al incremento de la relevancia del Partido Acción Nacional y a la emergencia de fuerzas empresariales en el horizonte político del país. Durante los próximos años, los grandes industriales agrícolas de Ciudad Obregón, aquellos grupos enriquecidos como resultado de la larga guerra colonial del valle del Yaqui y el enorme apoyo gubernamental, y sus contrapartes de otras zonas cercanas, como Culiacán y Mexicali, jugarían un



papel protagónico en las postrimerías del régimen priista y contribuirían de manera fundamental a la consolidación de un imaginario político nutrido por proyectos emergidos de la llamada sociedad civil empresarial. Pero esa es otra historia, cuyos contornos apenas comenzamos a vislumbrar y cuyas implicaciones tendremos que investigar con más detenimiento en los tiempos que vienen. Basta con decir que, una vez más, el sector colonial del valle del Yaqui se colocaba en el centro de los grandes cambios de la vida nacional.

CONCLUSIONES

LOS SURCOS DEL PRESENTE

Las conquistas no sólo pertenecen al pasado.

Tzvetan Todorov, *La Conquista de América:
el problema del otro*

El estudio de la colonización del valle del Yaqui nos obliga a reflexionar sobre un proceso de cambio histórico particularmente trágico y significativo. Las trayectorias de violencia, despojo, privatización, acumulación y profunda transformación vividas en la región durante los últimos dos siglos delinean lo que quizá sea el ejemplo más extremo del éxito del proyecto modernizador de las élites nacionales mexicanas en sus sucesivas encarnaciones: liberales, porfiristas, revolucionarias, desarrollistas y neoliberales. Al mismo tiempo, la resistencia del pueblo yoeme frente al avance de esta progresión de visiones coloniales representa, sin duda, el caso más valiente, sostenido y coherente de oposición a la integración económica, cultural y política de la nación mexicana de los últimos 200 años. Durante más de una centuria de vida independiente, la resistencia organizada del pueblo yaqui a la invasión y ocupación de su territorio le permitió conservar su autonomía política, cultural y económica en una época de creciente expansión nacional que coincidía, además, con el momento álgido del nuevo imperialismo europeo en amplias franjas del mundo. Los yoeme fueron, en este sentido, una excepción en el horizonte de los



pueblos indígenas mexicanos –y americanos– porque en los hechos lograron conservar su independencia, ante la acometida irrefrenable de los Estados-nación criollos hasta las décadas iniciales del siglo xx. Sin embargo, a partir de 1920, la fuerza militar del Estado mexicano y el entusiasmo colonizador de las élites sonorenses fueron complementados con un proyecto de desarrollo agroindustrial que transformó tan radicalmente el entorno del valle que hizo imposible la persistencia de formas de vida, organización y subsistencia practicadas por los nativos desde hacía siglos. Sobre los estragos causados por las políticas abiertamente genocidas en las décadas intermedias del siglo xx, el tránsito hacia un modo de cultivo no dependiente del uso intensivo de mano de obra acabó por marginar económicamente a las comunidades ancestrales. La pauperización causada por el modelo de desarrollo agroindustrial posrevolucionario logró lo que cien años de políticas de exterminio no habían podido hacer: someter a los pueblos originarios del río Yaqui.

El éxito económico reciente del sur de Sonora, y de todo el noroeste de México, es inseparable de estas trayectorias y no se entiende sin tomar en cuenta la brutalidad que les dio forma. Como hemos visto, el Porfiriato ofrece el momento más dramático de esta historia, no obstante, la violencia no fue privativa de aquel régimen y también fue parte del repertorio colonizador de gobiernos previos y posteriores. Es más, resulta fundamental señalar que la invasión definitiva del valle se consolidó después de 1920 y fue consecuencia de distintas políticas conscientes y focalizadas del poder posrevolucionario. Al mismo tiempo, como vimos en el capítulo anterior, el producto de esta colonización nutrió el florecimiento político y económico de México en las décadas intermedias de la pasada centuria y jugó un papel importante en el colapso del gobierno del Partido Revolucionario Institucional en las postrimerías del siglo xx. En este sentido, debe quedar claro que, lejos de ser un relato de interés meramente regional, los sucesos del valle del Yaqui están en el centro de las principales transformaciones vividas en México en épocas recientes. Más allá del impacto que las trayectorias coloniales del territorio yoeme han tenido en la historia nacional, es claro que también han repercutido



de manera importante en el desarrollo de corrientes de cambio globales, como aquellas asociadas a la llamada Revolución Verde, la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo en las décadas intermedias del siglo pasado.

Una de las apuestas principales de este corto libro ha sido plantear la necesidad de ampliar nuestro repertorio analítico y conceptual para llegar a una comprensión más profunda y menos parcial de la historia colonial de lo que hoy llamamos México. Como dijimos en la introducción, una primera invitación ha sido repensar cómo entendemos el papel que jugó la colonización del espacio en el devenir de la historia nacional. En segundo lugar, hemos querido proponer que la ocupación en estas tierras ha tomado formas que, en distintos momentos, han estado alineadas a procesos similares en otros sitios del mundo. En otras palabras, lo que sucedió en México no fue algo único, desconectado de lo que ocurría más allá de sus fronteras. Al contrario, la colonización en este país siempre ha corrido paralela a mecanismos globales de despojo y acumulación que vale la pena tener en cuenta. A diferencia de otras regiones del centro y sur del país, en las que observamos los efectos de prolongados procesos de ocupación, hibridación, dominio y negociación iniciados en los siglos XVI y XVII, en el norte de México se gestó el colonialismo de asentamientos durante los siglos XIX y XX, en una versión local y específica parecida a las que por aquellos años tomaban forma en otras latitudes del planeta, como Australia o Estados Unidos. Esto dio paso a un orden social enteramente distinto, marcado por trayectorias particulares de racialización y desarrollo sin comparación en otras regiones del país y Latinoamérica. Por un lado, entonces, el norte de México fue el escenario de una de las últimas “guerras del oeste” norteamericano, cuyos efectos delinearon una sociedad construida sobre lo que el historiador Lance R. Blyth ha denominado comunidades de violencia. Por el otro, en esta región se originó un proyecto de tintes claramente genocidas cuyos contornos e implicaciones resulta imprescindible analizar con detenimiento.

Recuperando los planteamientos de Raphael Lemkin y en un afán de resumir, podemos afirmar que el genocidio refiere



a un plan coherente y concertado que busca destruir las bases esenciales para la reproducción de la vida de algún grupo o comunidad con el objetivo de promover su exterminio. Es innegable que en Sonora existió un proyecto de este tipo enfocado en la destrucción del pueblo yoeme. Este mecanismo fue expuesto con claridad durante la década de 1900, pero sobrevivió al régimen porfirista. Como vimos en capítulos previos, la lógica deshumanizadora que justificó las deportaciones y campañas de exterminio de 1908 fue adoptada por la sociedad que emergió de la gesta revolucionaria en el valle del Yaqui y se integró al orden agroindustrial que tomó forma en el sur de Sonora después de la década de 1920. Quizá sea útil recurrir a la obra de Tony Barta para seguir pensando en el caso sonorense. Según este historiador australiano, históricamente han existido distintas “relaciones de genocidio” perpetuadas no por estructuras de Estado sino por agentes sociales que buscan imponer regímenes de violencia a otros grupos sociales con el fin de despojarlos de sus recursos o territorios mediante la fuerza. Esta idea pone de relieve que el genocidio no necesariamente debe ser visto como un proyecto de Estado, sino que puede ser también una lógica social de larga duración capaz de tomar varios cauces. Como hemos visto en Sonora, esta lógica se hizo presente a partir de los últimos años del siglo XIX y principios del XX, cuando se volvió factible pensar en el prospecto de prescindir enteramente de la presencia yoeme en el valle sin poner en peligro el sueño del desarrollo agrícola en la región. Esto se agudizó con el inicio de la agroindustria a gran escala, a cuya sombra se consolidó una nueva sociedad de colonos empresarios, comerciantes y políticos que hasta la fecha juegan un papel predominante en la vida del sur de Sonora y el noroeste de México y que han participado, de formas distintas, en estas relaciones de genocidio como parte de su consolidación y reproducción.

Por otro lado, de poco sirve plasmar los contornos de esta historia de violenta colonización sin preguntarnos al mismo tiempo sobre sus implicaciones para la validez y estabilidad de la narrativa nacional mexicana en la que se inscribe. En todas sus vertientes ideológicas y variaciones historiográficas,



la Historia de México, con mayúscula, está construida sobre la premisa de que la nación es *posterior* a lo colonial. México aparece, entonces, como una nación erigida sobre la derrota de un orden político extranjero e injusto, implantado en estas tierras por un proyecto anacrónico y condenable, encabezado por imperialistas ibéricos. En estos relatos, la colonización aparece como parte de un pasado superado, ajeno y no mexicano. Sin embargo, esta ficción historiográfica se desvanece muy pronto cuando pensamos en acontecimientos recientes en lugares como el valle del Yaqui, cuyas trayectorias dejan patentemente en claro que la colonización y lo colonial no forman parte de una memoria lejana, sino que son las claves sobre las que se han levantado la identidad y las estructuras socioeconómicas actuales de esta región tan importante para el pasado y el presente de esta nación. Como vimos en los primeros capítulos, lo sucedido con los yoeme no fue excepcional, sino parte de lo que Ana Sabau ha denominado el paradigma de la guerra racial defendido por las élites mexicanas a partir de la mitad del siglo XIX. En las narrativas históricas del norte de México, como en las de tantas otras zonas del país y Latinoamérica, lo colonial es, en palabras de Valeria Añón y Mario Rufer, un silencio fundante que permite la conformación de un relato coherente, triunfal y celebratorio del pasado reciente y el presente de sus estructuras sociales.

La historia, como lo ha planteado de manera magistral Ralph-Michel Trouillot, no se construye sólo de relatos, sino también de silencios. De acuerdo con el historiador haitiano, los silencios definen la producción de la historia en distintos momentos y formas. En primer lugar, determinan de manera crucial el proceso de producción y conservación de fuentes documentales pues, como sabemos, los registros archivísticos son siempre arbitrarios, excluyentes y delimitados por una lógica que beneficia siempre las estructuras de poder. En segundo lugar, como dicta el cliché, los silencios influyen en la creación de narrativas basadas en estos indicios documentales dado que la historia siempre la escriben los vencedores y rara vez se permite la presencia de voces, miradas y perspectivas subalternas en la conformación de los grandes relatos hege-

mónicos del pasado. Por último, los silencios empapan lo que Trouillot llama la “producción retrospectiva de sentido” de la historia, o lo que es lo mismo, dan forma a la interpretación de los sucesos anteriores para dar significado al presente.

En la trayectoria de la larga guerra de colonización del México independiente, los silencios corresponden siempre a la presencia, agencia y sufrimiento de los pueblos originarios. La perspectiva y los anhelos de sus integrantes están ausentes de las fuentes documentales guardadas en los principales archivos regionales y nacionales de Ciudad Obregón, San Cristóbal de Las Casas, Mérida, Hermosillo y la Ciudad de México. En los grandes fondos archivísticos de esta nación, los pueblos indígenas aparecen sólo como víctimas o criminales, y en definitiva como enemigos de una razón de Estado que es acríticamente aceptada como válida a pesar de su crueldad y brutalidad. Al mismo tiempo, aunque estén ausentes en los archivos, su comparecencia histórica debe ser silenciada de mil formas distintas. Resulta útil recurrir una vez más a la obra de Trouillot, para quien existen diversas fórmulas del silencio, que van desde el borramiento hasta la banalización.

En el caso de la historiografía decimonónica y de principios del siglo xx en torno al valle del Yaqui, por ejemplo, se hace uso de todas estas fórmulas de manera recurrente. La violencia de las campañas genocidas y de colonización es atenuada y justificada de múltiples maneras, como en el trabajo de autores como Manuel Balbás o Francisco P. Troncoso, cuando no es enteramente silenciada, como sucede en la obra de Claudio Dabdoub. A pesar de pretender contar el relato de la guerra del Yaqui, estos escritores acaban perpetuando el silencio en torno a la historia de los indígenas y su región. Balbás, devoto seguidor de Porfirio Díaz; Troncoso, general mexicano y convencido defensor de las diferencias raciales, y Dabdoub, bardo de la emergente sociedad agroindustrial del sur de Sonora, construyen una historiografía en la que la violencia contra los pueblos originarios es justificada por ser un efecto secundario del progreso, al mismo tiempo que la insurgencia y la organización yoeme son desechadas con adjetivos denigrantes y metáforas falaces. En este *corpus* historiográfico, reeditado



periódicamente por las autoridades sonorenses y mexicanas, los nativos aparecen como primitivos, salvajes, depredadores, y son descritos como una extensión de su entorno natural: indomables como las aguas del río Yaqui, feroces como el sol del desierto, etcétera. Sus páginas están teñidas a partes iguales por una ilusión de superioridad y un profundo miedo. Creada como parte del esfuerzo coordinado por “pacificar” y colonizar el valle, esta historiografía es un ejemplo nítido de lo que el gran historiador indio Ranajit Guha ha denominado la prosa de la contrainsurgencia: un discurso íntimamente comprometido con un proyecto colonial de dominación, explotación y transformación que, a pesar de fortalecer el impulso de integración nacional de México, avanzaba paralelo a iniciativas imperialistas que estaban tomando forma en otras partes del mundo.

Sin embargo, éste no es un vicio sólo de la llamada historiografía liberal o del excesivo celo regionalista de historiadores aficionados. En distintas narrativas recientes de corte académico se repite el flagrante uso de estas técnicas de silenciamiento a la hora de construir relatos sobre la conformación de las estructuras socioeconómicas del valle del Yaqui. Es el caso, por ejemplo, de un libro publicado por El Colegio de Sonora, en 2014, en el que se describen los “proyectos de colonización y rebeliones indígenas de los valles del Yaqui y del Mayo” como el reflejo de unas supuestamente virtuosas utopías liberales, y de un artículo dedicado a la historia de Ciudad Obregón, publicado por un prestigioso historiador económico del norte de México, en el que describe la guerra secular del Yaqui como resultado de la “resistencia de los grupos vernáculos” del sur de Sonora, quienes “se vieron obligados a ceder parte de las tierras y del agua al Estado y a los agentes económicos que habrían de transformar este rudo desierto en un próspero emporio agrícola”. El lenguaje eufemístico usado en ambos casos alimenta una vez más el silenciamiento de las pugnas del pasado y contribuye a solidificar una narrativa que justifica el dominio de las élites coloniales de la región, al mismo tiempo que perpetúa la violencia de siglos infligida contra el pueblo yoeme por parte de los emisarios del proyecto modernizador mexicano.



El señalamiento de estos silencios deja en claro que la importante deuda política de las sociedades sonorenses y mexicanas con el pueblo yoeme tiene una contraparte historiográfica. Resulta indispensable no sólo denunciar los mecanismos de racialización, criminalización y genocidio implantados en el sur de Sonora desde hace siglos contra los indígenas, sino también evidenciar las formas en las que fueron silenciados, trivializados y negados por las narrativas históricas que han construido la identidad política y cultural de esta próspera región. Es sintomático y revelador que en años recientes este esfuerzo historiográfico haya estado encabezado por mujeres como Raquel Padilla Ramos, Zulema Trejo Contreras, Ana Luz Ramírez Zavala, Esther Padilla Calderón y Lucía García Rivera, quienes han buscado documentar y narrar los pormenores de la resistencia yoeme a lo largo de los últimos dos siglos. Sin querer caer en esencialismos, me parece que es un claro testimonio de que la perspectiva masculina desde la cual está escrita gran parte de la historia, sobre todo la nacionalista y la colonial, adolece de una ceguera importante que hace que se perpetúen en el presente los silencios, las crueldades y la impunidad del pasado.

Estos silencios no sólo definen los contornos de la historia oficial, también habitan el espacio público de ciudades como Hermosillo. La toponimia de esta capital está empapada de la memoria de la violencia ejercida contra el pueblo yoeme por próceres sonorenses y autoridades mexicanas a lo largo de varios siglos. El aeropuerto se llama Ignacio Pesqueira y la avenida que lo conecta con el centro urbano fue nombrada en honor a Jesús García Morales, los dos principales enemigos y verdugos de las comunidades originarias durante el periodo liberal decimonónico. Los inicios de la carretera que lleva a Guaymas se llama Agustín Vildósola, el traidor de los yoeme en el lejano siglo XVIII, y una céntrica calle cercana al emblemático Parque Madero lleva por nombre General Carbó, un aliado porfirista en las brutales batallas de la Campaña del Yaqui. Una de las avenidas centrales se llama, por supuesto, Álvaro Obregón, quien ordenó el bombardeo de la Sierra del Bacatete, en 1926. La presencia aplastante de estos hombres yori, todos



involucrados de maneras distintas en la violencia que marcó el proceso de colonización del valle del Yaqui, contrasta con la total ausencia de espacios públicos que reivindiquen la memoria del pueblo nativo. No existen plazas, calles, escuelas, bibliotecas y poblados nombrados en honor a Juan de la Cruz Banderas ni Juan Maldonado Waswechia “Tetabiate”, mucho menos algún reconocimiento público a las redes de solidaridad que durante décadas mantuvieron viva la insurgencia yoeme. En el corazón mismo del territorio ancestral, en el actual municipio de Cajeme, la capital administrativa y económica de la región lleva el nombre de Ciudad Obregón, símbolo del colono y empresario, y de la consolidación del poder político nacional. Día a día, la toponimia urbana de Hermosillo, Ciudad Obregón y otros sitios de Sonora perpetúa el silencio histórico en torno a la colonización del valle del Yaqui, al mismo tiempo que reivindica y glorifica la violencia organizada en su contra por parte de élites nacionales, regionales y extranjeras durante siglos. Como sucede con la presencia de nombres como el del represor Gustavo Díaz Ordaz o el del esclavista Cristóbal Colón, estas denominaciones naturalizan viejas agresiones y dan forma a una memoria pública sesgada, incompleta y falaz.

Aún es pronto para evaluar el impacto y la sinceridad de los actuales planes de restitución y justicia anunciados por el gobierno federal en 2021. Lo que resulta claro es que la historia de despojo del territorio yoeme sigue avanzando, como lo muestra el impulso que le dio el gobierno del panista Guillermo Padrés –que hoy enfrenta procesos legales por delincuencia organizada y defraudación fiscal– a la construcción del Acueducto Independencia, que desvía aguas del río Yaqui para proveer a la ciudad de Hermosillo. Esta obra ha revivido la organización del pueblo nativo que, como dejó en claro Jesús Varela en la reunión descrita en la introducción de este libro, hasta la fecha reivindica su recelo frente al proyecto nacional mexicano y su ferviente deseo de autonomía cultural y política.

Es hora de cerrar este relato. Quisiera retomar la invitación de Sara Ahmed, quien en su libro *La política cultural de las emociones* nos conmina a entender de manera consciente y



cuidadosa las distintas maneras en las que las heridas del pasado dan forma a la política del presente. Las heridas de la etapa colonial de la nación mexicana permanecen abiertas y sus efectos siguen sintiéndose, aunque de maneras muy desiguales, en la piel de las comunidades que habitamos estas tierras. La tarea de quienes somos herederos del triunfo de ese colonialismo es, siguiendo a Ahmed, en primer lugar, aprender a escuchar las historias de dolor de ese pasado con todo lo que esto implica en términos de reescrituras, relecturas y realineamientos. Los lectores no indígenas del colonialismo mexicano debemos tomarnos personalmente estas historias, pues son las que nos constituyen y nos dan forma como sociedad contemporánea. Vincular nuestras historias regionales, nacionales, comunitarias y personales al dolor causado por la violencia del colonialismo pasa, en un segundo momento, por enfrentarse a la posibilidad de lo que Ahmed llama “quedarse sin casa”. Esta afirmación puede ser leída de dos maneras complementarias. La primera tiene que ver con aceptar que “se vivía en un lugar que no era la propia casa”, es decir, que el territorio en el que hemos crecido y al que sentimos que pertenecemos es en realidad la casa de otros, en la que hemos podido habitar, prosperar y reproducirnos. Pero también “quedarse sin casa” refiere a la idea de que hemos de renunciar a las historias triunfalistas, incompletas y llenas de silencios que nos cobijan y nos dan sentido. Es necesario reconocer las otras historias que completan aquellas que vemos como nuestras e identificar la dificultad y la urgencia de pensar en formas de ofrecer justicia por la violencia colonial de la que somos herederos. Según Ahmed, debemos abrirnos a la posibilidad de saber que estas heridas imprimen, como surcos en la tierra, el cuerpo social en el que hoy habitamos. Hacernos conscientes de estas marcas, de estas cicatrices, puede llevarnos a vislumbrar una manera inédita de habitar el presente en común, nacido de aquellas memorias coloniales. Este nuevo habitar, que es un llamado a la acción del vivir éticamente en este espacio, deberá estar guiado por la aceptación de que, aunque sea imposible reconciliarnos con este pasado, deberemos seguir estando juntos.



Más allá de la importante labor de repensar la historia del colonialismo mexicano para imaginar estas nuevas formas de habitar en el presente, es imperativo retomar estas historias de manera crítica para seguir interrogando la lacerante presencia de la violencia en la vida cotidiana de nuestras sociedades. Como ha planteado Rita Segato en su libro *La guerra contra las mujeres*, esta violencia es el resultado de una lógica de colonización y conquista que sigue permeando la cotidianidad en países como México, en los que la “atmósfera dramática, caótica y crecientemente violenta” refleja que en nuestros territorios “la Conquista nunca se completó” y “es un proceso continuo todavía en marcha”. Gran parte de la validez que la narrativa de la conquista tiene en nuestras sociedades emerge de cómo seguimos perpetuando los silencios del ayer y negando el carácter colonial de nuestro pasado reciente y nuestro habitar en común. Pero la batalla por la historia y la memoria siempre está en acción. Estamos a tiempo de componer las coordenadas y los contornos de nuestros relatos del pasado para estar en condiciones de pensar en nuevas formas de comprender y habitar nuestro presente. Ésta es una labor urgente en la que debemos participar todos para ir configurando una sociedad menos desigual y menos violenta, de la que podamos comenzar a sentirnos orgullosos.

REFERENCIAS

ARCHIVOS CONSULTADOS

Archivo General del Estado de Sonora, Hermosillo
Ejecutivo
Archivo Histórico del Agua, Ciudad de México
Aprovechamientos Superficiales
Fondo Documental Fernando Pesqueira de la Universidad de Sonora, Hermosillo
Documentos para la historia de Sonora
Rockefeller Archival Center, Tarrytown
Rockefeller Foundation Records

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aboites, Luis, *Los últimos años de la reforma agraria mexicana, 1971-1991*, México, El Colegio de México, 2022.
- Aguilar Gil, Yásnaya Elena, “¿Ni triunfo ni derrota? La cooptación discursiva de la Conquista de México”, en Eugenio Fernández Vázquez (coord.), *La Conquista en el presente*, México, La Cigarr Editorial, 2021.
- Ahmed, Sara, *La política cultural de las emociones*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
- Añón, Valeria y Mario Rufer, “Lo colonial como silencio, la conquista como tabú: reflexiones en tiempo presente”, *Tabula Rasa*, n. 29, 2018, p. 107-131.
- Balbás, Manuel, *Recuerdos del Yaqui. Principales episodios durante la campaña de 1899 a 1901*, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1985.
- Barta, Tony, “Relations of Genocide: Land and Lives in the Colonization of Australia”, en Isidor Wallimann y Michael N. Dobkowski (eds.), *Genocide and the Modern Age: Etiology and Case Studies of Mass Death*, Westport, Greenwood Press, 1987, p. 237-253.
- Blyth, Lance R., *Chiricahua and Janos. Communities of Violence in the Southwestern Borderlands, 1680-1880*, Lincoln, University of Nebraska Press, 2012.



- Brewster Folsom, Raphael, *The Yaquis and the Empire. Violence, Spanish Imperial Power, and Native Resilience in Colonial Mexico*, New Haven, Yale University Press, 2014.
- Candiani, Vera, *Dreaming of Dry Land. Environmental Transformation in Colonial Mexico City*, Stanford, Stanford University Press, 2014.
- Cerutti, Mario, “La agriculturización del desierto. Estado, riego y agricultura en el norte de México (1925-1970)”, *Apuntes*, v. XLII, n. 77, 2015, p. 91-127.
- , “La construcción de una agrociudad en el noroeste de México. Ciudad Obregón (1925-1960)”, *Secuencia*, n. 64, 2006, p. 113-143.
- Crosby, Alfred, W., *Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa, 900-1900*, Barcelona, Crítica, 1988.
- Curley, Andrew, “Resources is Just Another Word for Colonialism”, en Matthew Himley, Elizabeth Havice y Gabriela Valdivia (eds.), *The Routledge Handbook of Critical Resource Geography*, Londres, Routledge, 2022, p. 79-90.
- Dabdoub, Claudio, *Historia de El Valle del Yaqui*, México, Librería Manuel Porrúa, 1964.
- De Vos, Jan, “Una legislación de graves consecuencias. El acaparamiento de tierras baldías en México, con el pretexto de colonización, 1821-1910”, *Historia Mexicana*, v. 34, n. 1, 1984, p. 76-112.
- Enríquez Licón, Dora Elvia y Gustavo Lorenzana, “Las grandes presas en el río Yaqui (Sonora, México) y sus efectos socio ambientales”, *Revista de Sociología y Antropología: Virajes*, v. 19, n. 1, 2017, p. 165-188.
- Fabila, Alfonso, *Las tribus yaquis de Sonora. Su cultura y anhelada autodeterminación*, México, Instituto Nacional Indigenista, 1978.
- Fanon, Frantz, *Los condenados de la tierra*, México, Fondo de Cultura Económica, 2018.
- García Bravo, María Haydeé, “Anthropologie du Mexique y el régimen de indigeneidad racializada en México siglo XIX”, *Interdisciplina*, v. 4, n. 9, 2016, p. 51-70.
- García Rivera, Edna Lucía, “Sin medios de negociación. Las insurrecciones de indios en Sonora, 1855-1859”, *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, v. 57, 2019, p. 101-132.



- García y Alva, Federico, *México y sus progresos. Álbum-directorio del Estado de Sonora*, Hermosillo, Imprenta de Antonio B. Monteverde, 1905-1907.
- Grijalva Díaz, Ana Isabel y Juan José Gracida Romo, *El valle del Yaqui: propiedad privada, explotación agrícola, organización empresarial y crédito, 1930-1980*, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2019.
- Guha, Ranajit, “La prosa de la contrainsurgencia”, en Saurabh Dube (coord.), *Pasados poscoloniales*, México, El Colegio de México, 1999, p. 159-208.
- Harvey, David, “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, *Socialist Register*, 2005, p. 99-129.
- Heatherton, Christina, *Arise! Global Radicalism in the Era of the Mexican Revolution*, Oakland, University of California Press, 2022.
- Hernández, Fortunato, *Las razas indígenas de Sonora y la guerra del Yaqui*, México, J. de Elizalde, 1902.
- Hewitt de Alcántara, Cynthia, *La modernización de la agricultura mexicana, 1940-1970*, México, Siglo XXI Editores, 1978.
- Hu-DeHart, Evelyn, *Yaqui Resistance and Survival. The struggle for land and autonomy. 1821-1910*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1984.
- Jacoby, Karl, “‘The Broad Platform of Extermination’: Nature and Violence in the Nineteenth Century North American Borderlands”, *Journal of Genocide Research*, v. 10, n. 2, 2008, p. 249-267.
- Katz, Friedrich (coord.), *Revuelta, rebelión y revolución. La lucha rural en México del siglo XVI al XX*, México, Era, 1990.
- Koyoc Kú, José Angel, “Para entender la mal llamada Guerra de ‘castas’”, *Relatos e Historias de México*, n. 151, 2021, p. 52-61.
- Lake, Marilyn y Henry Reynolds, *Drawing the Global Color Line: White Men’s Countries and the International Challenge of Racial Equality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Madley, Benjamin, *An American Genocide. The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873*, New Haven, Yale University Press, 2016.
- Martínez Rodríguez, Marcela, “El proyecto colonizador de México a finales del siglo XIX. Algunas perspectivas comparativas en Latinoamérica”, *Secuencia*, n. 76, 2010, p. 103-132.



Melville, Elinor G. K., *Plaga de ovejas. Consecuencias ambientales de la Conquista de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Navarrete, Federico, *México racista. Una denuncia*, México, Grijalbo, 2016.

Olsson, Tore C., *Agrarian Crossings. Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside*, Princeton, Princeton University Press, 2020.

Padilla Calderón, Esther y Amparo A. Reyes Gutiérrez, “El valle de los Yaquis y la colonización ‘oficial’ en un contexto de guerra, 1880-1900”, en José Marcos Medina Bustos y Esther Padilla Calderón (eds.), *Violencia interétnica en la frontera norte novohispana y mexicana. Siglos XVII-XIX*, Hermosillo, El Colegio de Sonora/El Colegio de Michoacán/Universidad Autónoma de Baja California, 2015.

Padilla Ramos, Raquel, *Los partes fragmentados. Narrativa de la guerra y la deportación yaquis*, México, Secretaría de Cultura/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018.

———, *Los irredentos parias. Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán*, 1911, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2011.

Padilla Ramos, Raquel y Zulema Trejo Contreras, “Guerra secular del Yaqui y significaciones e imaginarios sociales”, *Historia Mexicana*, v. 62, n. 1, 2012, p. 59-103.

Pfefferkorn, Ignaz, *Descripción de la provincia de Sonora*, libro primero, Hermosillo, Gobierno del Estado de Sonora, 1984.

Pinto Rodríguez, Jorge, “Mapuches, colonos nacionales y colonos extranjeros en la Araucanía. Conflictos y movilizaciones en el siglo XIX”, en Romana Falcón y Antonio Escobar Ohmstede (coords.), *Los ejes de la disputa. Movimientos sociales y actores colectivos en América Latina, siglo XIX*, Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2022, p. 233-270.

Pravilova, Ekaterina, “River of Empire: Geopolitics, Irrigation, and the Amu Darya in the Late 19th Century”, *Cahiers d'Asie Centrale*, n. 17-18, 2009, p. 255-287.

Ramírez Zavala, Ana Luz, “‘De todo esto se han aprovechado esos hombres políticos y revolucionarios’. Los yaquis durante el proceso de formación del Estado posrevolucionario: negociación y cambio cultural, 1920-1940”, tesis de doctorado en Historia, México, El Colegio de México, 2014.



Redacción Aristegui Noticias, “Perdón y justicia al pueblo yaqui. Discurso completo de Jesús Varela, representante del pueblo Tórim”, *Aristegui Noticias*, 28 de septiembre de 2021. <<https://aristegui-noticias.com/2809/reforma/perdon-y-justicia-al-pueblo-yaqui-discurso-completo-de-jesus-varela-representante-del-pueblo-torim/>>

Reina, Leticia, *Las rebeliones campesinas en México (1819-1906)*, México, Siglo XXI Editores, 1980.

Revilla Celaya, Iván Arturo, *Utopías liberales: proyectos de colonización y rebeliones indígenas en los valles del Yaqui y del Mayo, 1853-1867*, Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2014.

Sabau, Ana, *Riot and Rebellion in Mexico. The Making of a Race War Paradigm*, Austin, University of Texas Press, 2022.

Segato, Rita Laura, *La guerra contra las mujeres*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2016.

Semo, Enrique, *México: del antiguo régimen a la modernidad. Reforma y Revolución*, México/Ciudad Juárez, Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2012.

Spicer, Edward H., *Cycles of Conquest. The Impact of Spain, Mexico and the United States on the Indians of the Southwest, 1533-1960*, Tucson, The University of Arizona Press, 1997 (1962), versión electrónica.

Taibo II, Paco Ignacio, *Yaquis. Historia de una guerra popular y de un genocidio en México*, México, Planeta, 2013.

Tinker Salas, Miguel, *A la sombra de las águilas. Sonora y la transformación de la frontera durante el Porfiriato*, México, Fondo de Cultura Económica/El Colegio de Sonora/Universidad Autónoma de Sinaloa, 2010.

Troncoso, Francisco P., *Las guerras con las tribus yaqui y mayo del estado de Sonora*, México, Tipografía de Estado Mayor, 1905.

Trouillot, Michel-Ralph, *Silenciando el pasado. El poder y la producción de la Historia*, Granada, Editorial Comares, 2017.

Urías Horcasitas, Beatriz, *Historias secretas del racismo en México (1920-1950)*, México, Tusquets, 2007.

Vandervort, Bruce, *Indian Wars of Mexico, Canada and the United States, 1821-1900*, Nueva York, Routledge, 2006.



Velasco Toro, José, *La rebelión yaqui ante el avance del capitalismo en Sonora durante el siglo XIX*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1985.

Worster, Donald, *Rivers of Empire. Water, Aridity, and the Growth of the American West*, Nueva York, Oxford University Press, 1992.

Zuleta, María Cecilia, “La Secretaría de Fomento y el fomento agrícola en México, 1876-1910: la invención de una agricultura próspera que no fue”, *Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales*, v. 1, n. 1, 2000.

Zúñiga, Ignacio, “Memoria sobre el permiso de navegación de los ríos Fuerte y Yaqui”, 1841, Fondo Ignacio Pesqueira, en Documentos para la historia de Sonora, serie 1, t. 2, Hermosillo, Universidad de Sonora, 1835-1841, p. 448.

HERIDAS EN LA TIERRA

**COLONIZACIÓN, RACISMO Y AGROINDUSTRIA
EN MÉXICO**

de Daniel Kent Carrasco

editado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM,
se terminó de imprimir en offset el 14 de diciembre de 2023
en los talleres de Gráfica Premier, S.A. de C.V.,
5 de febrero 2309, San Jerónimo Chicahualco, C.P. 52170,
Metepéc, Estado de México.

Su formación tipográfica en tipos MorePro y Barlow
estuvo a cargo de Ónix Acevedo Frómata.

La edición, en papel Bond ahuesado de 90 g, consta de 1000 ejemplares
y estuvo al cuidado de Ónix Acevedo Frómata
y corrección de estilo a cargo de Gwennhael Huesca Reyes



Históricas Comunicación Pública es una serie que ofrece a públicos no especializados productos históricos de calidad, textos originales y rigurosos sobre temáticas generales.

Este libro explora las continuidades entre lo colonial y lo nacional en la historia contemporánea de México, poniendo el foco en procesos de ocupación del territorio, guerra en contra de los pueblos indígenas y creación de regímenes racializados de jerarquía social.

Partiendo del estudio histórico de la colonización del valle del Yaqui, *Heridas en la tierra* apuesta por ampliar el encuadre para poner atención a la imbricación de dinámicas locales con procesos de transformación, acumulación e intercambio de alcances globales. En la historia contemporánea del valle del Yaqui –uno de los escenarios privilegiados de la prosperidad agroindustrial del presente– se combinan trayectorias de colonización, racialización, criminalización, desarrollo de infraestructura, conformación de grupos empresariales, genocidio, urbanización, experimentación científica y conflicto agrario que resultan centrales para la comprensión de la historia de México y su lugar en los procesos de cambio internacionales de los últimos siglos. Esta es, por tanto, una historia simultáneamente regional, nacional y de implicaciones globales, a la que debemos poner atención para entender no sólo las complejidades de nuestro imbricado pasado, sino también los retos de nuestro conflictivo presente.

historicas.unam.mx

ISBN 978-607-30-8493-2



9 786073 084932 >



INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
HISTÓRICAS

HISTORIA
PRESENTE